



**INSTITUCIONALIDAD Y VIOLENCIA  
EL CASO COLOMBIANO**  
Trabajo de investigación

**ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE**  
(Estudiante Maestría en Sociología)

**Director**  
**LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ**  
Doctor en Sociología

**Facultad de Ciencias Sociales y Económicas**  
**Departamento de Ciencias Sociales**  
**Maestría en Sociología**

**Cali, 28 de enero de 2019**

## ÍNDICE DE MATERIAS

PRESENTACIÓN.....	6
CAPÍTULO I .....	8
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y LA TEORÍA .....	8
1.El problema de investigación .....	8
2. Consideraciones teóricas .....	13
3. Estado del arte .....	33
3.1 Los estudios pioneros de la Violencia en Colombia .....	33
3.2 La violencia como fenómeno endémico de la sociedad colombiana.....	36
3.3 Estudios sobre el fenómeno de la violencia en Colombia: una aproximación desde la década de 1970 y su relación con la debilidad del Estado .....	38
CAPÍTULO II .....	46
LA METODOLOGÍA.....	46
1. Esquema metodológico .....	46
2. Metodología de la relación entre institucionalidad y violencia .....	55
3. Determinación del área de estudio.....	57
CAPÍTULO III .....	65
LA PRESENCIA DIFERENCIAL DEL ESTADO VISTA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.....	65
1. Cobertura de Servicios Públicos .....	65
1.1.Cobertura de energía eléctrica.....	66
1.2 Cobertura de acueducto.....	67
1.3 Cobertura de Alcantarillado .....	67
2. Servicio de educación.....	69
2.1 Analfabetismo .....	70
2.2 Asistencia escolar .....	71

3.Cobertura de servicios públicos comparada con la tasa de homicidios .....	72
3.1 Servicios públicos domiciliarios y tasa de homicidios .....	74
3.2 Servicios educativos y tasa de homicidios .....	76
CAPÍTULO IV .....	79
ÍNDICE SINTÉTICO DE INSTITUCIONALIDAD Y VIOLENCIA .....	79
1.El Índice sintético de institucionalidad.....	79
2. Comparativo tasa de homicidios nacional y grupos de estudio.....	80
3.Análisis Índice sintético de institucionalidad .....	81
4.Análisis tasas de homicidios e Índice sintéticos de institucionalidad – Grupos de estudio.....	84
5. Análisis número de personas desplazadas e Indicador sintéticos de institucionalidad – Grupos de estudio.....	87
6. Análisis de la Correlación entre el Índice sintético de institucionalidad y la violencia .....	90
CONCLUSIONES .....	95
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	101

## ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Evolución del Sistema de Ciudades 1851-2014.....	56
Figura 2: Variables y fuentes de información.....	58
Figura 3: Presencia de Grupos Armados.....	59
Figura 4: Hectáreas de Cultivo de Coca 2001-2016 .....	60
Figura 5 : Masacres por municipios 1998-201 .....	60
Figura 6: Presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, y masacres .....	61
Figura 7: Tasa de homicidios – Municipios de estudio 1993 y 2005.....	72
Figura 8: Tasa de homicidios – Municipios de estudio 1993 y 2005.....	73
Figura 9: Gráficas comparativas grupos de estudio y tasas de homicidios 1993-2005.....	74-75
Figura 10: Gráficas comparativas grupos de estudio y tasa de homicidios 1993-2005.....	76-77
Figura 11: Tasas de homicidios - Grupos de estudio y promedio nacional .....	80
Figura 12: Indicador sintético de institucional 2005-2017 – Grupos de Estudio.....	82
Figura 13: Categorías Índice Sintético de Institucionalidad y Tasa de Homicidios.....	83
Figura 14: Tasa de homicidios e Índice Sintético de Institucionalidad – Grupos 1 y 2.....	84
Figura 15: Tasa de homicidios e Indicador Sintético de Institucionalidad – Grupos 3, 4 y 5...	85-86
Figura 16. Número de desplazados e Indicador Sintético de Institucionalidad Grupos 1 y 2...	88-89

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Metodología de Normalización de Variables- CEPAL .....	48
Tabla 2: Categorías y Variables – Indicador Sintético de Institucionalidad.....	50
Tabla 3: Componente de normalización positiva.....	52
Tabla 4: Componentes Normalización Negativa. ....	53
Tabla 5: Ponderación Categorías y Variables.....	53
Tabla 6: Componentes Agregación por Categorías. ....	54
Tabla 7. Componentes Agregación Índice Sintético de Institucionalidad.....	54
Tabla 8: Tamaño Poblacional - Municipios de Estudio .....	63
Tabla 9: Porcentaje de vivienda con acceso a energía eléctrica en los municipios objeto de estudio	66
Tabla 10: Analfabetismo urbano-rural en los municipios objeto de estudio.....	70
Tabla 11: Inasistencia escolar en municipios objeto de estudio.....	71
Tabla 12: Índice de institucionalidad y homicidios - Coeficiente de Correlación.....	90
Tabla 13: Correlación Índice Sintético de Institucionalidad y Homicidios - Grupos de Estudio.....	92
Tabla 14: Correlación Índice Sintético de Institucionalidad y Desplazados - Grupos de Estudio.....	93

## PRESENTACIÓN

La sociología ha validado ampliamente, desde los clásicos de la disciplina, que los hechos violentos son concomitantes con la existencia social del hombre. Una de las hipótesis más fuertes que se ha esgrimido desde diferentes enfoques teóricos es que el florecimiento de dichos hechos podría estar asociados con la precariedad de las instituciones, o, dicho de otra forma, con la debilidad del Estado. Es decir, si la articulación institucional del comportamiento humano es débil, o en el peor de los casos inexistente, la violencia surge como una consecuencia necesaria. Es precisamente la relación entre violencia e institucionalidad el problema de investigación de esta tesis para la Maestría en Sociología en la Universidad del Valle.

Sin embargo, no toda institucionalidad es incompatible con la violencia. En las sociedades contemporáneas ha habido instituciones estatales que promovieron la violencia como el nazismo en Alemania y las dictaduras militares en América Latina, entre otras. Es la institucionalidad democrática, que promueve como valor supremo el respeto por la vida y la diferencia en sus diferentes dimensiones (política, religiosa, ideológica, de género, racial y étnica) la que puede contener la violencia. Este planteamiento está en concordancia con el postulado de la Comisión de estudios sobre la violencia en Colombia de la década de 1980, que el antídoto contra la violencia es más democracia.

La relación entre hechos violentos e institucionalidad estatal se estudia a la luz de la violencia en Colombia, que ha generado el conflicto interno más longevo del Hemisferio Occidental y el más caro en términos de la pérdida de vidas y de destrucción de la infraestructura productiva y material de cualquier país latinoamericano. Para responder al interrogante que entraña el problema de investigación, se echa mano, por un lado, de la tradición sociológica que ha reflexionado sobre la violencia, pero también se analizan otras posiciones teóricas que desde el neoevolucionismo postulan que los humanos son producto de las características

mismas del proceso evolutivo del que son resultado y tienden a comportarse como fieras en un estado de incivilización, obligados al ejercicio de sus instintos básicos para garantizar su supervivencia, por otro lado, nos apoyamos en el neoinstitucionalismo que enfatiza en la importancia de las instituciones para la convivencia humana.

Metodológicamente el estudio se basó en técnicas de investigación cuantitativa como el uso de los Censos de 1993 y 2005, el procesamiento de diferentes bases de datos sobre el conflicto colombiano, las masacres, el desplazamiento, la presencia de cultivos de coca y el uso y reconfiguraciones de indicadores como el Índice sintético de institucionalidad, desarrollado por la Comisión Económica para América Latina, Cepal y ajustado por el Departamento Nacional de Planeación colombiano. Fue muy difícil acceder a estas fuentes por lo que fue necesario interponer derechos de petición ante del Departamento Nacional de Estadística, Dane, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre otros. Esto explica que la medición de algunas variables de estudio se hiciese en diferentes periodos.

El informe está dividido en cinco acápite. En el Capítulo I, se presenta el problema de investigación y el esquema teórico para abordarlo. En el Capítulo II, se desarrolla la metodología y se explica en detalle la conformación de una muestra de 35 municipios afectados por el conflicto, las fuentes de información y el ejercicio de construcción y uso del Índice sintético de institucionalidad. En el Capítulo III, se analiza la presencia diferencial del Estado en el territorio vista a través de la prestación de servicios públicos y la construcción de equipamientos colectivos. En el Capítulo IV, se analiza la relación entre violencia y presencia estatal mediante el Índice sintético de institucionalidad y el uso de la tasa de homicidios como un indicador indirecto de la violencia. También se muestran los resultados de las pruebas estadísticas que establecen las correlaciones entre el Índice sintético y las tasas de homicidios como proxis de la violencia. Finalmente, se presentan las conclusiones, las referencias bibliográficas y los anexos.

## CAPÍTULO I

### EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y LA TEORÍA

#### 1.El problema de investigación

“La violencia es tan vieja como el mundo; cosmogonías, mitologías y leyendas nos la muestran vinculada a los orígenes, acompañando siempre a los héroes y a los fundadores...La cosmogonía griega ha proclamado, con Heráclito, que la violencia es padre y rey de todo” (Domenach, 1981: 33).

Los estudios de la violencia no son privativos de la sociología. Múltiples disciplinas: la etología, la psicología, la fisiología, la economía, la antropología, el neoevolucionismo, entre otras, se han preocupado del fenómeno violento, buscando una explicación de los orígenes de la violencia (Unesco, 1981). En sociología tiene una tradición especial por su relación con el conflicto, la dominación, el poder y el cambio social (Guzmán, 1990: 3). Por esta relación, el concepto continúa impreciso y se la utiliza asimilándolo al poder, el autoritarismo o la dominación. Un concepto único de violencia es muy difícil porque incluso, en la misma sociología, por la diversidad de orientaciones teóricas, el concepto tiene connotaciones diferentes. Así, más asociado con la última aproximación, la violencia podría ser definida como el “empleo ilegítimo, o por lo menos ilegal, de la fuerza” (Domenach, 1981: 34). Por lo tanto, la violencia es un fenómeno humano. En este sentido, no se puede hablar de violencia de la naturaleza, “al menos que veamos en ello un Dios oculto”.

Siguiendo a Tilly (2007: 5-6), se puede decir, que los estudiosos de la violencia humana se pueden dividir en tres grupos: los partidarios de las ideas, de la conducta y de la relación. Los primeros resaltan el papel de la conciencia como base de la acción humana. Los seres humanos adquieren ideas, valores, normas, reglas y actúan individualmente o colectivamente siguiendo esas reglas. Algunas de estas ideas resaltan lo deseable de las acciones agresivas e inciden en la propensión a la violencia de una persona o un pueblo. Para erradicar la violencia habría que eliminar las ideas destructivas.



Los partidarios de la conducta apuntan a la evolución humana como el origen de la acción agresiva. Así, la propensión a usar medios violentos sería parte de la herencia genética humana. Aquí se ubican las posiciones evolucionistas y neo evolucionistas tipo Harari (2014, 2016) y Dawkins (2002, 2004, 2009) sobre los que volveremos más adelante. En esta perspectiva, la violencia se evitaría mediante el control social de las motivaciones y de las condiciones sociales que permiten la expresión de dichas motivaciones.

Los partidarios de la relación sostienen que entre los individuos y los grupos se presentan relaciones y transacciones. Los humanos desarrollan su personalidad y sus prácticas a través de los intercambios con los demás y aunque la mayoría de las transacciones interpersonales se realiza sin violencia, es en esos intercambios en los que ella surge. Para los marxistas, por ejemplo, lo prioritario son las relaciones y sería en las relaciones de clases en las que surge la violencia, aunque también les dan importancia a las ideas. Para el enfoque relacional, la limitación de la violencia depende de la transformación de las relaciones entre las personas, entre los grupos y de estos con el Estado.

En cierta forma, cada uno de los enfoques tiene parte de razón, por ello, más adelante, profundizaremos en algunos de estos enfoques. Pero lo más importante de lo anterior, para esta investigación, es que de una definición general de la violencia, como la esbozada antes, se derivan diferentes tipos; la que se desarrolla en la interacción entre los individuos y los grupos, pero también aquella que se caracteriza como violencia política, en la que diferentes actores la usan o la instrumentalizan para acceder al Estado, pero también la que el mismo Estado ejerce contra contradictores políticos, como fue característica de las dictaduras militares en América Latina o la que se produce en la interacción entre los partidos para eliminar al contendor, que ha sido característica del caso colombiano. Esta investigación, diferencia; por lo tanto, la violencia general (de género o la que es resultado de la delincuencia o de los ajustes de cuenta en el negocio del narcotráfico) de aquella articulada con el conflicto armado colombiano, que tiene un carácter político.

El marco más general del conflicto armado en Colombia ha sido la violencia, utilizada de múltiples formas e instrumentalizada para acceder al poder político. La violencia en Colombia ha tenido las más diversas manifestaciones: el crimen con sevicia, como aconteció en la llamada Violencia, las masacres perpetuadas por guerrillas y paramilitares, el uso del

terror y los enfrentamientos directos entre las fuerzas insurgentes y las Fuerzas Militares del Estado. El resultado ha sido el sufrimiento de 8 millones de colombianos víctimas y la muerte de 250.000 seres humanos.

Los estudios sobre la violencia en Colombia y una de sus expresiones fundamentales, el conflicto armado, que ha sido el más largo del Hemisferio Occidental y el más costoso en términos de vidas, destrucción de la infraestructura del país e impacto en la economía, son inagotables. Esto se explica, en parte, por su larga duración y por el interés que ha suscitado tanto en los estudiosos de los conflictos internos, como de las guerras entre los Estados. En una somera revisión de esta literatura se destacan: Agudelo (2003), Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987), Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016), Deas y Gaitán (1995), Deas (1999), Fals, Guzmán y Umaña (1962), Oquist (1978), Palacios y Safford (2002), Pécaut (1987a, 1987b, 1987c, 1994, 1999, 2002a, 2003a, 2003b, 2004, 2008), Hobsbawm (1974), Camacho y Guzmán (1990), Camacho (2014), Sánchez y Peñaranda (1991), Pizarro (1994, 2004), Rangel (1998), PNUD (2003), Palacios (2012), Pizarro (2004), Duncan (2006), González et al. (2007), Romero (2007), Centro Nacional de Memoria Histórica (2011). Recientemente, la Presidencia de la República editó 11 tomos del proceso de negociación del conflicto que el Estado adelantó con la desmovilizada guerrilla de las Farc y que llevó a la firma de un pacto de paz.

Estos estudios, en general, presentan un amplio panorama de las causas del conflicto, su caracterización política, económica y social y sus impactos en la sociedad colombiana. Sobresalen de esta larga lista, los trabajos del profesor Daniel Pécaut, los estudios de la Comisión de Memoria Histórica, es sobre el conflicto político violento en Colombia, y su peor expresión, las masacres y los 11 tomos del proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Varios autores de estos estudios han discutido de manera directa o indirecta la hipótesis de la debilidad de la institucionalidad y del Estado como una variable importante para entender y explicar el conflicto interno que ha padecido el país durante cerca de 60 años, pero que comienza a cesar con la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, logrado bajo el segundo período del presidente Santos, y que ha permitido que el país entre en una fase de posconflicto, o dicho de una mejor manera, de postacuerdo. Como se mencionó de manera previa, el estudio de los fenómenos de violencia, así como el de las causas de los mismos, no

ha sido ajeno al desarrollo histórico de los estudios sociológicos, considerando los clásicos del pensamiento en la materia, pasando por autores contemporáneos de gran notoriedad y estribando en el desarrollo académico colombiano de la sociología; en consecuencia, el tratamiento de la violencia como objeto de estudio ha sido una constante transversal.

Los estudios sobre el conflicto interno colombiano, es decir, el que ha enfrentado a diferentes fuerzas insurgentes y el Estado y la llamada Violencia, citados antes, han mostrado que existe una diferencia estructural entre la violencia rural y urbana en Colombia. La violencia generada en el conflicto político ha tenido más un carácter rural, se ha desarrollado en las zonas de frontera, de colonización y en los márgenes territoriales donde el Estado tradicionalmente ha tenido una presencia débil y diferencial. La llamada Violencia de la década de los años 1940 y 1950 también tuvo un marcado carácter rural, los centros urbanos se veían afectados por esta violencia en especial por la migración de los campesinos que huían de las áreas rurales para escapar al enfrentamiento fratricida entre los Partidos Liberal y Conservador.

La violencia de los centros urbanos ha sido más de carácter social, difusa y más articulada con las diferencias sociales; se origina en buena medida en las acciones de la delincuencia y desde la década de 1980 una de sus principales causas ha sido los ajustes de cuentas de las actividades ilícitas del narcotráfico, lo que se ha expresado cuantitativamente en las altas tasas de homicidios. La Comisión de Estudios sobre la violencia de la década de 1980, diferenció claramente los dos tipos de violencia: “No pocas veces se ha afirmado que en Colombia la violencia es fundamentalmente política... Aunque la violencia en Colombia se muestra, cuantitativamente hablando, como un fenómeno muy alarmante, más del 90% de sus víctimas no han de considerarse de naturaleza política, en cuanto que no provienen de la confrontación del Estado actual con los grupos e individuos que buscan sustituirlo. Son, esencialmente, las víctimas de una violencia originada en las desigualdades sociales...más que la del monte, la violencia que nos está matando es la de las ciudades” (Comisión de Estudios sobre la violencia, 1987: 17-18).

La idea sobre la que se cimienta la actual investigación consiste en realizar una contribución al estudio de la relación yacente entre el fenómeno social de la violencia y la existencia y funcionamiento de las instituciones democráticas, entendidas ellas como: “reglas, características de cumplimiento de las reglas y normas de comportamiento que estructuran la interacción humana repetitiva” (North, 1989). En otras palabras, como un conjunto de normas y reglas estandarizadas con una vocación de permanencia espacio temporal, dedicadas a regular y estructurar el comportamiento humano.

En relación con la violencia, la discusión teórica propuesta parte del supuesto, ampliamente discutido y validado dentro de la sociología, de que los fenómenos violentos son concomitantes con la existencia social del hombre, como se dijo antes. Valga, solamente para clarificar este punto, citar a Robert Dowse y John Hughes (1993) cuando advierten que:

“-La violencia, según la frase que se atribuye a Mr Rap Brown es tan norteamericana como la tarta de cereza-, y, podría añadirse, ¡tan británica como la tarta de melaza, tan francesa como las ancas de rana, y tan alemana como el chucrut! La agresión y la violencia han formado parte de la historia del hombre desde sus comienzos, y quizá debido a ello la idea de que tal comportamiento es inherente al ser humano resulta bastante verosímil” (Dowse & Hughes, 1993, p. 506).

Por lo tanto, el problema de investigación busca inquirir en las causas sociológicas de la violencia humana, pero especialmente, en su influencia en el desarrollo y el entendimiento de los fenómenos violentos acaecidos en el territorio colombiano; especialmente en los 35 municipios que el análisis metodológico arrojó como los más afectados dentro del territorio nacional, por la conjunción en ellos de distintos fenómenos violentos, en especial de violencia política y social, en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2017, reflejado en las preguntas: ¿Cuáles son las causas sociales que determinan la génesis y permanencia de la violencia en los territorios más apartados de la geografía colombiana? y ¿Cuáles son las alternativas que desde la teoría sociológica se pueden aportar para la disminución de este fenómeno? A las que se plantea la hipótesis de que el fenómeno de la violencia puede encontrar sus causas en la inexistencia, o en la existencia precaria, de instituciones sociales democráticas que permitan el tránsito hacia una convivencia social pacífica, abandonando a los hombres a un estado “natural” de incivilización hobbesiano (Hobbes, 1994), en el que los más bajos y básicos instintos bestiales de supervivencia se desatan causando inevitablemente el conflicto social. En aras de concluir resaltando la imperiosa necesidad de gestar

instituciones democráticas formales o informales que posibiliten la convivencia social como la manera más óptima de garantizar el ejercicio de los derechos de los miembros que componen esa sociedad.

La violencia en el territorio colombiano ha sido generalizada, son escasos o casi nulos los municipios que en algún momento de su historia no han tenido importantes brotes de violencia. Por lo cual, para el desarrollo de la investigación, se buscó establecer una delimitación territorial de ciertos municipios que cumplieran características similares, como son: la presencia de actores armados, masacres y cultivos ilícitos. En un capítulo posterior, se desarrolla el proceso metodológico que determinó los 35 municipios de estudio.

En cuanto a la temporalidad de la investigación, inicialmente se procuró establecer un periodo ambicioso desde 1980 hasta el 2017, pero durante el desarrollo investigativo se acotó al encontrarse limitaciones en la consecución de indicadores que constituyeran series históricas y cuya medición fuera confiable, reduciendo el periodo de 2005 a 2017. Sin embargo, para no desconocer este impulso inicial que implicaba un mayor periodo de estudio, sí se desarrolló una introducción inicial de contexto con base en los datos obtenidos por el censo 1993 y 2005, para posteriormente abordar el estudio del indicador que se creó.

## 2. Consideraciones teóricas

Como se dijo antes, el desarrollo de la sociología como disciplina autónoma no ha sido ajeno al estudio de la violencia en las sociedades modernas, grandes tratadistas de esta ciencia ya han hecho un denodado esfuerzo explicativo en torno al fenómeno violento, sus causas y consecuencias en el entramado social. Ejemplo de ello son los estudios de largo aliento que le dedicaron a esta cuestión autores clásicos de esta disciplina como Max Weber y Emile Durkheim, y aunque no sea evidente en ninguna de sus obras el desarrollo metodológico de un concepto concreto de violencia, sí son palpables en la lectura de las mismas ciertas concepciones del fenómeno que permiten identificar la importancia conceptual del mismo en el desarrollo de sus respectivas teorías.

La presente investigación enmarca su objeto de estudio en el análisis y la discusión teóricos acerca de las causas de la violencia como fenómeno social, con la ulterior pretensión de comprobar una relación causal entre la inexistencia o la existencia precaria de instituciones sociales democráticas y el surgimiento de fenómenos violentos. Para tal cometido, se plantea, en primera instancia, una disertación teórica multidisciplinar que desarrolla un poco más los planteamientos teóricos de Tilly (2007), que aunque preminentemente sociológica, hace una breve alusión de la biología, la genética y las recientes teorías evolucionistas para dar cuenta de la propensión del hombre a la violencia; en segundo lugar, se echará mano de las propuestas institucionalistas de la sociología política, para instar que sólo con el desarrollo de instituciones sociales democráticas logra acotarse, en algún modo, la tendencia a la violencia del comportamiento humano; para por último, contrastar empíricamente esta disertación con un estudio de caso focalizado en municipios afectados por el conflicto armado y con evidente carencia de la presencia estatal. En la realización de dichos propósitos, se echará mano de las propuestas teóricas de Max Weber (1969), Emile Durkheim (1967), Anthony Giddens (1984), March y Olsen (1989), Huntington (1968), Daniel Pécaut (1987, 1988, 2001a, 2002b, 2008), Paul Oquist (1978), Carlos Miguel Ortiz (1985), complementados con las tesis de los profesores Yuval Noah Harari (2014, 2016) y Richard Dawkins (2004, 2008, 2009). Con una propuesta metodológica del tipo “monografía” que busca el análisis teórico de la información obtenida sobre un fenómeno determinado.

En primera instancia, resulta menester interrogarse acerca de esa, al parecer inherente, relación entre la existencia y realidad social del hombre con los fenómenos de violencia. Ya que, si bien, los grandes tratadistas de la sociología dedican gran parte de sus consideraciones a analizar los fenómenos violentos y pese a que el gran desarrollo teórico denominado como funcionalista en el argot sociológico, brinde varias luces con respecto a las causas que dan origen a los fenómenos sociales violentos. Y, como se verá a continuación, varios autores contemporáneos suscriben la idea de que, en ausencia de un entramado social organizado institucionalmente, se prestan las condiciones perfectas para el desarrollo del conflicto y la violencia. En nuestra perspectiva existe una suerte de vacío conceptual a la hora de tratar el motivo por el cual el humano cuando se ve abocado a situaciones en las cuales hay un vacío institucional de poder recurre a la violencia como recurso necesario.

Hay diferentes aproximaciones a la comprensión de la violencia, como se dijo antes. Por ejemplo, algunas perspectivas de tipo biólogo (la segunda a la que se refiere Tilly) postulan que los humanos son producto de las características mismas del proceso evolutivo del que son resultado y tienden a comportarse como fieras en un estado de incivilización, obligados al ejercicio de sus instintos básicos para garantizar su supervivencia, derivando necesariamente en un comportamiento violento. Algunos autores como Sigmund Freud (1997) y Norbert Elías (1997) han postulado que una de las formas de controlar el comportamiento violento está dada por los lineamientos comportamentales dictados por las instituciones sociales (que Elías llama proceso civilizatorio) que organizan el ejercicio de la violencia humana entorno a unos objetivos y prácticas comunes que permiten la convivencia social y posibilitan la coexistencia pacífica.

El proceso civilizatorio, como lo llama Elías (1997), ha estado acompañado de la violencia, fenómeno que, para algunos autores, obedece a las características propias de los seres humanos y de su inevitable propensión evolutiva al conflicto. Independientemente de que compartamos o no esta hipótesis, sin duda, una manera óptima de evitar los fenómenos violentos, con la intención de garantizar la coexistencia pacífica de las sociedades en aras de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los individuos que las componen, es por medio de la gestación de instituciones democráticas, tanto formales como informales, que constriñan el comportamiento de sus miembros y organicen el ejercicio de la violencia en torno a fines que resulten legítimos.

Solamente a título de curiosidad científica válgase instar en este trabajo que el estudio de la violencia, como se planteó antes, no es propio ni exclusivo de la sociología, variadas disciplinas científicas, entre las cuales se encuentran incluso las teorías neo-evolucionistas, han inquirido acerca de las razones que hacen que inmersos en situaciones de reestructuración del ordenamiento social, anomia (Durkheim, 1967; López, 2009) o carencia institucional los seres humanos recurran a la violencia como único recurso de supervivencia.

Los desarrollos teóricos de Richard Dawkins, quien tras haber hecho una exhaustiva crítica de la forma en la cual algunos biólogos interpretan el darwinismo, y al concluir que las teorías de la selección de grupos contemplaban un enfoque investigativo erróneo, dado que, la unidad fundamental de la selección natural no es la especie ni el grupo, ni siquiera,

estrictamente hablando, el individuo, sino el gen y la unidad de la herencia (Dawkins, 2002, p. 14), concluye planteando que “se puede deducir que cualquier ser que haya evolucionado por selección natural será egoísta” (Dawkins, 2002, p. 5).

Debido a que, todos los seres que han pasado por el tamiz de la selección natural han de ser considerados como “máquinas de supervivencia” (Dawkins, 2002, p. 27) y necesariamente egoístas por las características propias del proceso de la selección natural que premia a los más aptos y condena a los que no lo son. De esta forma, para el autor, un ser egoísta se comporta de manera tal que aumenta el bienestar propio a expensas del bienestar de otro (Dawkins, 2002, p. 5), entendiendo bienestar como oportunidades de supervivencia. El individuo, para Dawkins, es una máquina egoísta programada para realizar cualquier cosa que sea mejor para la preservación de sus genes. El conflicto surge como una consecuencia necesaria porque los individuos de la misma especie, siendo máquinas para preservar genes en el mismo lugar y tiempo, y con la misma forma de vida, son competidores directos de todos los mismos recursos (Dawkins, 2002, p. 88), que siempre estarán limitados o serán escasos. Cuando se considera al gen como la unidad fundamental de la selección natural y no a la especie o el individuo, y se entiende que este primer replicador tiene como principal función la de reproducirse y permanecer, se comprende porque los individuos de la misma especie tienen la tendencia evolutiva a generar conflicto con sus pares, exceptuando por su puesto a su descendencia y a sus parientes más cercanos, por compartir con ellos gran parte, si no la inmensa mayoría, de su codificación genética. Así las cosas, advierte Dawkins que “una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes, de un egoísmo cruel y universal, sería una sociedad muy desagradable en la cual vivir” (Dawkins, 2002, p. 3).

En este mismo sentido, se entienden los planteamientos de Yuval Noha Harari para quien todo el tránsito evolutivo que conllevó a la aparición del hombre sobre la tierra estuvo impregnado de una violencia sin par, desde la misma gestación del *homo sapiens* como especie, que determinó la eliminación violenta de las demás especies del género *homo* como el *homo neanderthalensis*; así como la extinción de todos los mamíferos superiores alrededor de la geografía universal, y el uso violento que como especie le damos a las demás especies de las que depende nuestra supervivencia (Harari, 2014).



En lo que refiere a la discusión enmarcada en la disciplina sociológica, grandes y variados han sido los avances en cuanto a la comprensión de la relación existente entre los fenómenos violentos y la existencia, o la inexistencia, de instituciones sociales que los acoten, ordenen y minimicen. Max Weber en su detallada explicación del orden social trata el concepto de violencia en relación con su explicación del poder y la dominación. Entiende entonces el fenómeno violento como un suceso esencialmente político enmarcado en lo que él denomina como la acción social, es decir la acción humana encaminada a generar efectos en el conjunto de la sociedad (Weber, 1969, p. 14). En este orden de ideas, la acción violenta en Weber se orienta por el propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de otra u otras partes” “dirigida a la aniquilación de la vida del contrario” (Weber, 1969, p. 31).

Sin embargo, para este autor la violencia no es, ni puede ser, una constante en el desarrollo del orden social, más bien se erige como una excepción, un fenómeno que ocurre en los momentos de resquebrajamiento del poder y la dominación. La violencia en ese sentido es un mecanismo extremo que opera en la estructuración, cuestionamiento o disolución de un orden social de dominación cualquiera, ya que, en una situación de dominación completa no se esperaría el recurso de la violencia (Guzmán, 1990, p. 12). “En la medida en que se ejerce efectivamente el poder, tiende a disminuir el recurso a la fuerza que se deriva de una relación de lucha o contraposición de voluntades” (Guzmán, 1990, p. 10).

Para este autor, la violencia es un recurso de última *ratio* supeditado a las situaciones en la cuales el poder no se encuentra efectivamente consolidado. Cuando el poder se ejerce efectivamente en una sociedad, tiende a disminuir el recurso a la fuerza. Esta racionalización en el uso de la fuerza tiene una de sus máximas expresiones en el Derecho, en donde, gradualmente, la violencia política interna se objetiva en un “orden jurídico estatal” (Guzmán, 1990, p. 13). En este sentido, Weber reconoce que cuando una sociedad está políticamente organizada y goza de la permanencia de unas instituciones sociales relativamente estables, el recurso a la fuerza, y, por ende, la aparición de los fenómenos de violencia se hace innecesarios, siempre que la comunidad política tiende a monopolizar la aplicación legítima de la violencia.

Recorre entonces Weber al Estado como institución legitimada para frenar o contener los fenómenos de violencia. En esta misma esfera del pensamiento giran los planteamientos

teóricos de Emile Durkheim, que encuadra su concepción de la violencia en su propuesta teórica acerca de la división del trabajo y la gestación de solidaridad, como esquemas fundamentales en los que se cimienta la organización social (López, 2009, p 133).

Durkheim advierte que en una sociedad con una deficiente división del trabajo se generan escenarios de conflicto y violencia, producto de un estado de anomia, entendida esta como la falta de reglamentación y sus consecuencias en las conductas individuales. En sus propias palabras, “si la división del trabajo no produce la solidaridad, es porque las relaciones de los órganos no están reglamentadas, es porque están en un estado de anomia” (Durkheim, 1967, p. 313). La fuente de conflicto y a su vez de violencia se centra en la no institucionalización del entramado social. Anomia y violencia se conjugan en la teoría Durkheimiana como fenómenos concomitantes.

Así como lo advierte Guzmán en su análisis:

Hay entonces dos niveles en una posible teoría de la violencia con arraigo Durkheimiano: aquel que subraya la necesidad de institucionalizar un campo normativo que dirima de manera no violenta el conflicto, que regule en este sentido la vida social, y aquel que subraya la dimensión más individual de la aceptación de la normatividad. (Guzmán, 1990, p. 16).

Como se verá con posterioridad con el respaldo de las teorías de March y Olsen (1984, 1989), la forma en la cual se reglamenta y modela el comportamiento humano y social es por medio de las instituciones. Conjugando este planteamiento con la perspectiva Durkheimiana de la violencia, se ha de entender cómo, en los casos en los que la articulación institucional del comportamiento humano es inexistente, escasa o no está interiorizada, la violencia surge como una consecuencia necesaria, que no se entiende como circunstancial; sino como una consecuencia directa de dejar a la deriva el comportamiento bestial al que está determinado el humano de forma ingénita, por la naturaleza misma del proceso evolutivo del cuál es resultado como especie.

El funcionalismo Durkheimiano se ha reproducido con profusión en autores contemporáneos, de lo cual Neil Smelser (1962) es ejemplo, lo que se destaca cuando advierte que: la violencia es “una movilización no institucional para la acción que procura modificar una o más tensiones sobre la base de una recomposición general de los elementos de la acción”

(Smelser, 1962, p. 71) de donde es importante señalar el enfoque colectivo de la acción violenta y su carácter no institucional.

Coser (1970) también advierte el carácter des-institucionalizado de los fenómenos violentos y su contraposición a los gobiernos civiles donde se garantizan los derechos:

“Solo donde se han conquistado derechos ciudadanos por todos los estratos de una población, esto es, solo cuando existen canales abiertos de comunicación política a través de los cuales todos los grupos pueden articular sus demandas, hay una buena posibilidad de que el ejercicio de la violencia política se pueda minimizar exitosamente” (Coser, 1970, p. 106).

El profesor Huntington (1968) acompaña esta reflexión agregando además que cuando el cambio social es abrupto y no está acompañado de forma conjunta con un ajuste institucional se genera el espacio propicio para la violencia:

“Los efectos violentos que puede tener el cambio social al no acompañarse de un debido proceso de institucionalización de las nuevas unidades sociales. Su tesis central es la de que las situaciones de inestabilidad política y de violencia [...] son en gran medida el producto del cambio social rápido y de la movilización acentuada de nuevos grupos en el campo político junto con un bajo desarrollo de las instituciones políticas” (Huntintong, 1968).

Para este autor, la ausencia de instituciones políticas fuertes y adaptables, implica que las demandas de participación política que no son respondidas de forma institucional devienen en inestabilidad y violencia (Huntintong, 1968, p. 12).

En esta misma línea de argumentación, se encuentran los planteamientos de Robert Dowse y Jhon Hughes quienes en su análisis de la sociología política dedican un acápite completo al problema de la violencia advirtiendo que en “los siglos XVII y XIX estaba muy extendida la creencia de que la disminución de la violencia era concomitante al progreso social (Dowse & Hughes, 1993, p. 493), “este enfoque del progreso se basa en la idea de que, a medida que se desarrolla, la civilización, irá haciéndose más pacífica” (Dowse & Hughes, 1993, p. 494). Para estos autores hoy continúa la tradición del siglo XIX ya que se tiende a entender los actos de violencia como ilegítimos, patológicos y extraños a un gobierno civil.

En el ámbito nacional también se han dado manifestaciones académicas en este sentido, ejemplo claro de ello es el profesor Fals Borda, que destaca que “la violencia en Colombia

se puede interpretar como una impresionante acumulación de disfunciones en todas las instituciones fundamentales...” (Guzmán Campos, Fals Borda, & Umaña Luna, 1980, p. 401).

Planteamiento coherente con lo que advierte Paul Oquist para quien la violencia política colombiana tiene su génesis en la construcción de un aparato estatal que no se acompaña de una cultura de lo político, por lo que es entendido como un botín por el cual se pelean a muerte los grupos sociales. Para él, “el derrumbe parcial del Estado se presentó debido al serio conflicto entre las élites de los dos partidos en las cuales estaba dividida la clase dominante de la nación colombiana. Este conflicto alcanzó tal intensidad que el funcionamiento del Estado se vio entorpecido” (Oquist, 1978, p. 243).

En consonancia con estos estudios, Carlos Miguel Ortiz propone un estudio regional de la violencia, centrado en los actores, sus relaciones sociales y económicas en la región cafetera y el papel que jugó el Estado en su formación. Advierte al respecto que “... fue la escasa presencia del Estado, característica desde la colonización, lo que permitiría consolidar el enfrentamiento armado de los dos partidos” (Ortíz, 1985, p. 324). Asimismo, asevera que “la Violencia lo que hizo fue evidenciar la precariedad (del Estado n.a.), en un momento en que los cambios de conformación social acelerados durante los últimos años, se convirtieron en un roto más complicado que nunca” (Ortíz, 1985, p. 325).

Por último, Daniel Pécaut insta que la desintegración de lo político se yergue como el más dilecto de los valles en los que germina la violencia, siempre que hay una ausencia de vías institucionales de le den trámite a los conflictos que surgen en el terreno social.

La noción de división radical introduce la de violencia originaria. Ella conmueve los referentes políticos antiguos, arruina la función instituyente del poder. Introduce la social en lo político, pero induce también su disociación. Pone así la violencia en el centro mismo de lo político (Pécaut, 1986, p. 194).

Asimismo, Pécaut advierte que “en un país en el que el poder civil deja espacios abiertos y tiene tan poco dominio de la sociedad, la violencia se difunde en todos los recovecos de la vida social y más aún a medida que se mezclan en ella protagonistas que diluyen las delimitaciones entre lo político y lo no político” (Pécaut, 1988, p. 438).

Este breve resumen de los autores más preponderantes en lo relativo al problema de esta investigación, deja entrever que la relación inversa que se ciñe entre el desarrollo institucional y la génesis de los fenómenos de violencia, es más bien una constante en el pensamiento sociológico, lo que deja entrever que el trabajo investigativo planteado, se suma a una gran lista de apuestas teóricas que suscriben la misma posición teórica.

Sin embargo, hasta este punto sólo se ha establecido una suerte de relación causal entre la creación y existencia de instituciones (fundamentalmente de carácter democrático) o la inexistencia de las mismas, y la gestación de los fenómenos violentos. Pero no se ha ahondado en las razones subyacentes a esta relación causal, es decir, cómo y por qué, el desarrollo de un entramado institucional dentro de la sociedad evita la formación de fenómenos violentos. Este es el cometido que nos proponemos dilucidar en el desarrollo subsiguiente del presente texto, al tono de las propuestas teóricas neo-institucionalistas dimanadas del pensamiento de March & Olsen (1984,1989).

De esta manera, en un primer momento, se hará una definición general de lo que se ha de entender en este texto por instituciones, luego se examinarán la propuesta de Mary Douglas en *Cómo piensan las instituciones* y la perspectiva institucionalista de la sociología política como una forma de entender el comportamiento humano, enfatizando en las ventajas de este tipo de aproximación teórica en el análisis general de los fenómenos sociales, y en especial en el análisis que le incumbe al presente texto, en contraste con algunos otros postulados teóricos. Seguido a ello, se examinará la manera en la cual las instituciones determinan el comportamiento humano por medio del establecimiento de los comportamientos apropiados y la creación de sentido, tanto individual como de comunidad. Para concluir, advirtiendo las razones por las cuales la formación de instituciones sociales puede acotar, o eliminar, la gestación de los fenómenos violentos.

Las instituciones, como se relató con antelación, han de entenderse como un conjunto de reglas y normas de comportamiento, así como la imposición de las mismas, que estructuran la interacción humana reiterada y definen el conjunto de elecciones de los individuos en el entramado social. (North, 1989).

En este punto, son los relevantes los aportes de Mary Douglas en su conocido libro *Cómo piensan las instituciones*. A partir del estudio de Emilio Durkheim y de Ludwik Fleck y de

sus conceptos de solidaridad y cooperación, estudia cómo se forman las instituciones, cuáles son sus propósitos y sus premisas. Para Douglas, el pensamiento del individuo se ve condicionado por la colectividad, y solo puede ser concebido y explicado como representación colectiva, planeamiento que había hecho mucho tiempo atrás Durkheim. Para ella, una institución es “Una agrupación social legítima y con autoridad, que puede ser personal o difusa. Se establece con el aval de la colectividad con el propósito de que, actúe como principio auto controlador en las interacciones sociales (...) se desarrollan de manera espontánea, o natural en la búsqueda del equilibrio por parte de los intereses en conflicto y su existencia es fundamental, a la hora de organizar información, tomar decisiones, controlar la incertidumbre y resolver problemas. Se busca este grado de coordinación, para evitar situaciones de desorden y confusión” (Douglas, 1996: 45).

Por lo tanto, para Douglas lo fundamental son las instituciones, los individuos calculan, deciden, desean y se enfrentan en el seno de las instituciones y ellas son fundamentales para resolver los conflictos y, en nuestro caso, contener la violencia. De ello se deriva el interrogante de cuál es el tipo de institucionalidad y de estatalidad que hacen posible contener los fenómenos de violencia ya que la institucionalidad de por sí no garantiza la no violencia. Hay ciertos tipos de institucionalidad que son compatibles con la violencia. De ello hay múltiples ejemplos en las sociedades modernas y contemporáneas; el nazismo en Alemania, que desde la institucionalidad estatal produjo la muerte de millones de judíos y que tan bien estudio Zygmunt Bauman en su libro *Modernidad y holocausto* (2010). En América Latina, la violencia irrumpe en el momento en el cual hay una ruptura de la institucionalidad, sobre todo la que promueven las dictaduras militares. Sin embargo, estas dictaduras violentas promueven sus propias formas de institucionalidad.

Para Colombia, como dice el profesor Alberto Valencia: “(...) lo fundamental del caso colombiano es precisamente la forma como la violencia no es incompatible con la institucionalidad, sino que se integra a ella y se convierte incluso en una de las mejores vías para el mantenimiento del statu quo”. Dicho de otra manera no basta con que haya presencia de alguna institucionalidad bajo el supuesto de que dicha presencia es suficiente para disminuir la violencia; se trata de ir más allá y preguntarse del tipo de institucionalidad. Hemos dicho que hay institucionalidades que inclusive pueden ejercer la violencia y la

violencia ilegal siendo instituciones, pueden abusar de la ley e inclusive imponer una ley injusta. Hay institucionalidades además partidarias o culturales que son capaces de generar violencias e institucionalidades que hacen presencia pero que son incapaces de contener las violencias; institucionalidades ineptas, institucionalidades pasivas o permeadas por la corrupción o simplemente paralizadas por otros factores violentos o por miedo o por la inoperancia o simplemente por su propia petrificación burocrática, lo que Weber llamaba la “Jaula de Hierro”. En este trabajo entonces insistiremos que es indispensable y que esperamos demostrarlo que haya presencia de la institucionalidad en el territorio, para disminuir la violencia. Pero el tipo de institucionalidad que demandamos no solamente debe ser una institucionalidad democrática sino además legítima. Y hacemos esta segunda distinción porque también puede haber institucionalidades democráticas originadas en el voto popular que sin embargo por cuenta de la clientelización del modelo o de su simple inoperancia no le garantizan al territorio en el que supuestamente ejercen autoridad, orden y la preservación de la paz. Esas institucionalidades clientelares o inoperantes terminan por supuesto por perder toda legitimidad frente a la ciudadanía, de suerte que la institucionalidad necesaria para poder garantizar el orden social y evitar la violencia es una institucionalidad democrática y además legítima, en el entendido de legitimada por la ciudadanía que acata su autoridad y por ende su normatividad.

Como también dice el Profesor Valencia “la violencia es funcional al orden social, en términos de que contribuye a producir formas de integración y de cohesión, las alimenta y permite su permanencia (...) Este es el caso de lo que significaron durante muchas décadas los partidos políticos Liberal y Conservador. Por una parte, fueron fuente de integración social, fueron elementos básicos de construcción de las identidades colectivas, garantizaron un vínculo entre el ciudadano y el Estado, reemplazaron a esta institución en la gestión simbólica del orden social. Pero, al mismo tiempo, en la medida en que esa tarea de construcción de la institucionalidad se hacía excluyendo al adversario político, esos mismos partidos en diversos momentos de la historia colombiana se convirtieron en fuentes de violencia, como ocurrió durante las guerras civiles del siglo XIX, en la guerra de los mil días, en el episodio de violencia de los liberales contra los conservadores entre 1931 y 1933 en Boyacá y Santanderes y, sobre todo, en la Violencia de los años 1950. Todo esto nos pone de presente que la lógica bipartidista fue de manera simultánea fuente de integración social

y fuente de violencia. Ante determinadas circunstancias concretas, en nombre de esos partidos, garantes de la institucionalidad, que en tiempo de paz convivían, se desatan formas de violencia y de exterminio mutuo caracterizadas por una extrema crueldad” (Valencia, 2018a: 3-4).

Por lo tanto, cuando en esta investigación nos referimos a la institucionalidad o a la debilidad o presencial diferencial del Estado, hacemos referencia a la institucionalidad democrática, aquella que solo promueve el uso legítimo de la fuerza y que difunde los valores democráticos del respeto por la vida, del respeto a las diferencias políticas, ideológicas, religiosas, étnicas, raciales y de género, entre otras, y que no instrumentaliza la violencia para dirimir las diferencias políticas. Es evidente que no referimos que cuando hablamos de Instituciones, nos referimos al Estado y particularmente al Estado de Derecho, la normatividad política que organiza la sociedad y para el efecto de esta investigación no estamos refiriéndonos a otras formas institucionales provenientes de la cultura o las religiones. También es importante aclarar que nos referimos a unas instituciones que no son puramente instrumentales, si no instituciones que tengan una dimensión simbólica tal y como explica el Profesor Alberto Valencia y veremos más adelante a propósito de la presencia de los servicios públicos como variable institucional. Al decir de Durkheim “el Estado debe ser una potencia moral” Por lo tanto hacemos referencia a una institucionalidad democrática y legítima, pero no solamente instrumental sino que también con contenido simbólico. Como lo dijo la Comisión de estudios sobre la violencia en Colombia de la década de 1980 “El antídoto contra la violencia es más democracia” (Comisión de estudios sobre la violencia, 1987). Pero también, la institucionalidad no se refiere meramente a la estatal, las reglas de comportamiento que los individuos interiorizan y ponen en práctica, precisamente por la construcción simbólica del Estado, hacen también parte de la institucionalidad.

Más específicamente, para los autores March y Olsen (1984,1989) la perspectiva institucionalista es la manera más óptima de generar un análisis acertado acerca de la forma en la cual se determina el comportamiento humano, el busilis de esta posición teórica estriba en el hecho de entender a las instituciones como agentes o actores independientes en el entramado social, y no como un mero espejo en el que las fuerzas sociales, construidas de manera exógena, se reflejan. En este sentido, aducen que su planteamiento teórico es más



antiguo de lo que se piensa, y se desarrolló con profusión al menos hasta mediados del siglo pasado en la historia de la teoría política (March & Olsen, 1989, p. 4). Sin embargo, con el advenimiento de nuevas escuelas del análisis político, este tipo de pensamiento se fue relegando, a juicio de ellos, de manera errónea, para darle cabida a nuevas interpretaciones del comportamiento humano. Así lo expresan los autores:

“Desde un punto de vista comportamental, las instituciones políticas formalmente organizadas se han retratado simplemente como arenas dentro de las cuales el comportamiento político, dirigido por factores más fundamentales, sucede. Desde una perspectiva normativista, las ideas que insertan la moralidad dentro de las instituciones, como el derecho o la burocracia, y que hacen un énfasis en la ciudadanía y la comunidad como fundamentos de la identidad política, les han dado la vía a las ideas del individualismo moral y el énfasis de la negociación de los intereses en conflicto” (March & Olsen, 1989, p. 1).

El rescate del institucionalismo como herramienta de análisis teórico, según los autores, se debe al papel cada vez más preponderante que juegan las instituciones en la vida moderna “las instituciones sociales, económicas y políticas se han vuelto más grandes, considerablemente más complejas y recursivas, y en “prima facie” más importantes para la vida colectiva” (March & Olsen, 1989, p. 1). Igualmente, “muchos de los principales actores en sistemas políticos y económicos modernos son las organizaciones, y las instituciones del derecho y la burocracia ocupan un rol dominante en la vida contemporánea” (March & Olsen, 1989, p. 2).

De manera análoga, se establece que, no solo las instituciones ocupan un papel más preponderante en la vida moderna, sino que la perspectiva de análisis institucional brinda mejores instrumentos analíticos que otras posturas, así lo reflejan los autores cuando la contrastan con ellas y advierten sus defectos.

En este sentido, al contrastarlo con el contextualismo, escuela que para los autores no encuentra ninguna diferencia entre los ámbitos político y social, siendo todos parte de un mismo todo que subsume las relaciones humanas bajo un mismo concepto, su ejemplo más recurrente: la estructura de clase; se encuentra que el Estado pierde su papel preponderante en el análisis político. El principal problema cognoscitivo de este tipo de aproximaciones es “su inclinación general a ver relaciones causales entre la sociedad y la política, recorriendo

desde aquella a esta, en lugar de entenderlo en la vía contraria” (March & Olsen , 1989, p. 4).

Lo mismo sucede al contrastarla con el reduccionismo, que asume que los fenómenos políticos son mejor entendidos como el agregado de las consecuencias del comportamiento, entendido en un nivel individual o grupal. Cuyo principal yerro consiste en asumir que “las preferencias y los poderes de los actores son exógenos a la política, y dependen de sus posiciones en el sistema económico y social” (March & Olsen, 1989, p. 5).

El utilitarismo, por su parte, supone que los eventos políticos son consecuencia de decisiones calculadas, es decir, que dependen de los valores e intereses del tomador de decisiones, y siempre que las consecuencias de las acciones han de ser realizadas en el futuro, es necesario anticipar, no solo lo que ha de ocurrir, sino cómo ha de sentirse el agente de la decisión cuando estos resultados sean experimentados. Su problema fundamental es que “asumen que las preferencias son estables, por lo tanto, las preferencias actuales son un buen pronóstico de las preferencias futuras” (March & Olsen, 1989, p. 6); de modo que las preferencias no son ambiguas y son consistentes. Por lo que las preferencias son exógenas, y cualquiera que sea el proceso de generación de las preferencias precede a la elección y se entiende como independiente de la decisión.

Por último, el instrumentalismo, que hace énfasis en los resultados de la acción, muy relacionado con el utilitarismo, supone que toda acción humana está encaminada a generar ciertos resultados predecibles, sin embargo, esta perspectiva ignora la cantidad inconmensurable de contingencias a las que están sometidas las acciones humanas en un mundo complejo, e igualmente ignora la importancia significativa de lo simbólico a la hora de tomar cualquier determinación, a lo sumo lo contempla como un esfuerzo manipulativo de algunos actores en el constructo social por controlar los resultados. (March & Olsen, 1989, p. 6).

Para los autores constituye un yerro conceptual el hecho de soslayar que:

“La política moderna está tan llena de símbolos, rituales y ceremonias como las sociedades se familiarizan más con la tradición antropológica. Lo políticos anuncian apoyo público a posiciones que no defienden en privado. Los legisladores votan una legislación mientras permanecen indiferentes a su implementación. Los administradores solicitan participación pública en la toma de decisiones con el

ánimo de asegurar el apoyo público a políticas a las cuales ya se encuentran previamente determinados” (March & Olsen, 1989, p. 7).

En términos generales, los autores critican el carácter reduccionista de las posturas teóricas señaladas, pasando por alto el alto grado de complejidad que acaece cuando estos individuos, o grupos individualmente considerados, persiguen todos al tiempo intereses disímiles y en conflicto. Igualmente, advierten que en reiteradas ocasiones la coherencia individual no deja de ser más que una suposición teórica que suele carecer de un correlato fáctico, y que sin este supuesto, toda teoría que se sustente en el comportamiento racional de los actores sociales adolece de sustrato lógico. Así lo expresan los autores:

“Se ha observado que los individuos pelean por el derecho a participar en la toma de decisiones y luego no ejercitan ese derecho con ningún vigor. Los tomadores de decisiones ignoran información que tienen piden más información y luego ignoren la nueva información cuando está disponible” (March & Olsen , 1989, p. 11).

A manera de respuesta, frente a estas contradicciones, se han establecidos modelos de clasificación temporal como el modelo del “bote de basura”, cuya idea fundamental es la sustitución de un orden temporal por un orden consecucional. Esta postura propone que el proceso de la toma de decisiones no es algo ordenado ni racional, más bien que se encuentran problemas, soluciones, tomadores de decisiones, y oportunidades de escogencia concentrándose juntas como resultado de estar disponibles simultáneamente (March & Olsen, 1989, p. 12).

No obstante, lo anterior, incluso los modelos de clasificación temporal, adolecen para los autores de una incorrección insubsanable; y es la de asumir que el orden es impuesto en una institución política de forma exógena, en el caso de los modelos racionales, el orden se impone por medio de la mano invisible de la competencia, en el caso de los modelos de “bote de basura” el orden se establece por virtud de la simultaneidad temporal (March & Olsen , 1989, p. 15).

Frente a estas perspectivas, es que resurge el análisis institucional del comportamiento humano, porque no solo es consciente de que las instituciones en el mundo moderno cumplen un papel independiente políticamente hablando, sino que además evitan los problemas suscritos a las contradicciones que surgen de los reduccionismos previamente señalados,

precisamente debido a que entienden que el papel de las instituciones sociales se concentra en simplificar la existencia social del hombre, regulando y normalizando los comportamientos reiterados de la interacción humana.

Cualquier paradigma social enfoca su atención en algunas cosas y la distrae de otras, la ventaja comparativa del punto de vista institucional es que entiende que las instituciones definen al individuo, al grupo, a las identidades sociales y a las preferencias que se gestan dentro de ellas, determinando las condiciones necesarias para pertenecer a un grupo específico (March & Olsen , 1989, p. 16).

Igualmente, su aproximación no deja de ser intuitiva, pues para nadie resulta cuestionable que, por citar un ejemplo, cuando se habla de democracia política, esta “no solo depende en las condiciones económicas y sociales sino también en el diseño de las instituciones políticas” (March & Olsen, 1989, p. 17).

Los autores son conscientes de que asumir esta perspectiva implica hacer un llamado necesario a la coherencia institucional, si se quieren considerar como actores independientes a los que se les imputan intereses, expectativas y voluntad, es necesario advertir alguna suerte de comportamiento coherente en ellas; sin embargo, atribuirle esta parafernalia racional a un actor institucional no es ni más ni menos problemático, a priori, que imputársela a un individuo (March & Olsen , 1989, p. 19). Igualmente, la teoría política tradicional dedicó especial énfasis a las maneras en las que la coherencia podía ser inducida en una institución a través de constituciones, leyes y otras reglas estables, incluso, por la implementación de normas sustentadas en un dogma religioso.

Habiendo hecho estas claridades acerca de la conveniencia del análisis desde la perspectiva del neo-institucionalismo, es menester ahora señalar la manera actual en la que las instituciones, como actores independientes en el entramado social, determinan, modelan y forjan el comportamiento humano.

En primera instancia, valga señalar que lo que acá se pretende establecer es que las instituciones, o más bien la institucionalización de las acciones, reduce la ambigüedad y modela la política. Muchos de los comportamientos que observamos dentro de las instituciones políticas reflejan la forma rutinaria en la cual la gente hace lo que está supuesta

a hacer, sin la imperiosa necesidad de realizar un análisis extensivo de las consecuencias de sus actos, pues el simple estímulo desencadena complejos y estandarizados patrones de acción (March & Olsen, 1989, p. 21).

Las instituciones, entendidas como reglas, pueden ser impuestas o reforzadas por medio de un ejercicio coercitivo de autoridad, o pueden ser parte de un código de comportamiento apropiado que es aprendido e interiorizado por medio de la educación o la socialización. Por reglas ha de entenderse según los autores: “las rutinas, procedimientos, convenciones, roles, estrategias, formas organizacionales y tecnologías alrededor de la cuales la actividad política se construye” (March & Olsen, 1989, p. 22). Este tipo de rutinas pueden cobrar la forma de reglas procedimentales que especifiquen los pasos de un proceso, o reglas de decisión que advierten la manera en la cual los recursos deben transformarse en resultados.

El almendrón del análisis del comportamiento institucional se encuentra en identificar que la acción humana está más a menudo basada en la identificación del comportamiento normativamente apropiado, que en el cálculo de los resultados esperados por una opción alternativa.

“Las rutinas institucionales son seguidas incluso cuando no resulte obvio en el estrecho interés propio de la persona responsable de hacerlo. Incluso en situaciones extremas como en la guerra, o en los campos de concentración, los individuos parecen actuar sobre la base de reglas sobre lo apropiado en lugar de un cálculo racional consecuencial” (March & Olsen, 1989, p. 22).

Lo que se entiende como apropiado por una persona particular en un momento particular es definido por las instituciones sociales y transmitido a través de la educación. Pese a que puede llegarse a considerar que la conformidad con las reglas institucionales es un arreglo contractual del individuo, como acuerdo implícito en el que se asume la obligación de actuar de una manera determinada, en retorno a ser tratado de una manera apropiada. Esto no es óbice para señalar que el proceso de socialización dentro de un conjunto de reglas, y la aceptación de su carácter de apropiadas, no es en términos ordinarios un caso de la suscripción intencional y voluntaria de un contrato o acuerdo (March & Olsen, 1989, p. 23).

Resumiendo, para los autores:

“Describir el comportamiento como dirigido por normas es ver la acción como una respuesta a una situación y a las demandas de una posición. Las reglas definen las relaciones entre los roles en términos

de lo que la incumbencia de un rol les debe a las incumbencias de los otros roles. La terminología es una de deberes y obligaciones en lugar de una toma de decisiones anticipatoria y consecuencial. Los actores políticos asocian acciones específicas a situaciones específicas por medio de las reglas de lo apropiado.” (March & Olsen, 1989, p. 23).

A pesar de lo previamente señalado, no se quiere manifestar acá que, por ser un procedimiento reglado de forma institucional, el discernimiento de lo apropiado de una acción sea un proceso trivial o irracional. Lo que sucede es que el encuadre de una regla a una situación particular es un procedimiento mental más cercano al razonamiento legal que al económico. Las reglas y las situaciones están relacionadas por un criterio de semejanza o diferencia, y su razonamiento se establece en la forma de analogías y metáforas, en un proceso que está fuertemente mediado por el lenguaje.

Esto se acompasa con el razonamiento weberiano, suscrito previamente, según el cual la racionalización del uso de la fuerza se ejecutaba en una dimensión jurídica y no económica encontrando sus máximas expresiones en el Derecho, en que la violencia política se objetiva en un orden jurídico social (Guzmán, 1990, p. 13).

La perspectiva institucionalista también se relaciona con la propuesta teórica de Emile Durkheim (1967), mencionada con antelación, en lo relativo a la gestación de la división del trabajo. Siempre que se entienda que dentro de las instituciones políticas la experticia especializada justifica esa división del trabajo y le impone límites; así las cosas, las instituciones identifican a los especialistas en determinada labor, brindándoles un acceso especial a un conjunto de problemas y soluciones identificadas con un dominio específico. Con base en el principio de la especialización, las instituciones gestan la división entre ciudadanos y oficiales dentro de conjuntos de reglas y roles relativamente auto-contenidas (March & Olsen, 1989, p. 26).

Por último, la forma en la cual las instituciones determinan el comportamiento humano se genera a través de la creación de significados. “Las instituciones constriñen y modelan la política por medio de la construcción de significados. Porque el proceso de comprensión del mundo se convierte, bajo algunas circunstancias en una promulgación del mundo” (March & Olsen, 1989, p. 39).

Esto se da en la medida en la que las instituciones, consideradas como actores independientes, crean su propio ambiente por la manera en la que actúan e interpretan el mundo confuso. El individuo, al hacer parte de estas instituciones, está en la necesidad de interiorizar este ambiente con todas sus contingencias. En este sentido, por la vía de determinar qué es lo apropiado, las instituciones determinan el significado de las cosas y las acciones. Y el individuo, por medio de los procesos de socialización, interioriza estos significados y los aplica a su propio comportamiento (March & Olsen, 1989, p. 47). Así lo reconocen de forma manifiesta los autores cuando señalan que: “La política crea, confirma, o modifica las interpretaciones de la vida. A través de la política los individuos modelan sus identidades, sus comunidades y su bienestar público” (March & Olsen, 1989, p. 48).

Concluyendo este acápite, se advierte que el papel principal de las instituciones en la determinación del comportamiento humano estriba en la estipulación de lo que es –o no– apropiado a la hora de tomar una decisión o ejercer una acción. Esta estipulación se logra por medio de la creación de sentidos y significados que son interiorizados por los individuos y los grupos por medio de la educación y la socialización. Igualmente, la división del trabajo como fenómeno adjunto, determina cuales son los cursos de acción apropiados en el caso de detentar una posición específica dentro del entramado social.

La política, como un fenómeno institucional –quizá el más preponderante de todos– se organiza por una lógica de lo apropiado. Las instituciones políticas non son más que una colección de reglas y rutinas interrelacionadas que definen cuáles son las acciones apropiadas dependiendo de las relaciones entre los roles y las situaciones (March & Olsen, 1989, p. 160). Bajo ésta lógica de lo apropiado las acciones son intencionales, pero no voluntarias, su objetivo es atender las obligaciones que emanan de un rol en una situación determinada.

Precisamente por ello, en la perspectiva de estos autores:

“La mayor actividad de las instituciones políticas es la educación de los individuos en ciudadanos reconocibles. Un ciudadano reconocible es aquel que está familiarizado con las reglas del comportamiento apropiado y con las virtudes intelectuales y morales de la política, y quien conoce, por lo tanto, las razones institucionales de los comportamientos, y puede justificarlos por referencia a los requerimientos de un orden superior.” (March & Olsen, 1989, p. 162).

En lo que respecta al asunto en estudio, esta postura teórica brinda serias luces para entender cómo, por medio de la generación de significados y sentidos sociales, las instituciones sociales, primordialmente el Estado, determinan lo que es apropiado y lo que no, con tal que logran, por medio de la socialización de estos valores, establecer patrones de conducta que han de ser seguidos por los individuos miembros de una sociedad, de forma casi que involuntaria; sin la necesidad de un análisis ulterior de los beneficios o costos que les reportan ciertos cursos de acción.

En lo que refiere específicamente a los fenómenos violentos, es evidente al rompe, que las instituciones sociales, especialmente la estatal, tienen la intención generalizada de evitarlos y disminuirlos, ello no solo se expresa en los textos constitucionales de la inmensa mayoría de los países, sino que su ejecución se condena de forma generalizada por las disposiciones penales. La materialización de nuestras instituciones jurídicas en normas positivas hace mucho más sencillo este análisis. Brindando la posibilidad de colegir una lógica cierta de un comportamiento apropiado apático a la violencia, sin la necesidad de establecer un análisis muy profundo.

Considerando lo previamente dicho puede dilucidarse que el individuo, sometido a un régimen institucionalizado de interacciones humanas, principalmente a causa de la existencia de un Estado jurídico de derecho, ha de interiorizar estos valores y significados generando un comportamiento apropiado, conforme a lo que las instituciones reclaman de él. Rechazando la violencia y asumiendo en principio los valores democráticos que garanticen una convivencia pacífica.

Arribar a este tipo de aseveraciones resulta complicado cuando se asume otra perspectiva teórica del comportamiento, solo por instancia valga señalar que, en una lógica contextualita, en a que lo que prima sobre el comportamiento humano es la estructura de clase, los fenómenos violentos deben asumirse como una consecuencia indispensable de la lucha de clases, así lo advierte Frantz Fanon en su libro *Los condenados de la tierra* (2011). Igualmente, en términos racionales, y considerando únicamente el interés privado, no se puede señalar con precisión que, en un escenario en el que por medio del uso de la violencia un individuo obtenga un resultado mucho más satisfactorio que el que obtendría sin utilizarla, este se abstenga de ejercerla en contra de sus congéneres.



Precisamente, para el caso colombiano, que es nuestra principal preocupación, una de las principales dificultades para consolidar el proceso de paz, disminuir los niveles de violencia y fortalecer la presencia estatal, proviene de que el Estado no ha logrado sustituir a las Farc en sus antiguas zonas de influencia y donde, precisamente, las Farc ejercía las funciones de Estado al dirimir los conflictos, cobrar “impuestos” y ejerce el poder, aunque ilegalmente. En este sentido, es claro para esta investigación que la institucionalidad que podría poner fin a la violencia es que aquella que logra promover que los ciudadanos reconozcan al Estado como una autoridad política, lo que no se ha logrado en Colombia en los años de existencia de un Estado de Derechos precario.

### 3. Estado del arte

#### 3.1 Los estudios pioneros de la Violencia en Colombia

Como se dijo antes, los estudios sobre la violencia en Colombia, o mejor, las violencias, son inagotables y siguen en ascenso a raíz, entre otros hechos sociales, de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las Farc que ha hecho que el país ingrese, después de cerca de sesenta años, en un proceso de posconflicto<sup>1</sup>, o mejor, sociológicamente hablando, de posacuerdo. Los textos más sobresalientes de la literatura sobre las violencias en Colombia se citan supra páginas 3 y 4, pero es importante en este acápite hacer una aproximación al estado del arte o a los estudios más significativos que establecen una relación entre violencia y debilidad de la institucionalidad o del Estado.

La violencia en Colombia se ha consolidado como un acontecimiento permanente (Cartagena, 2016). Siendo así, en primera instancia es necesario exponer un breve contexto histórico que permita identificar las principales características de este fenómeno, en aras de mostrar el papel central que ha cumplido en la conformación y el desarrollo de la sociedad colombiana. Para efecto de lo anterior, a continuación, se expondrán algunas de las principales conclusiones y tesis que se han elaborado en torno al tema, con el fin de hallar

---

<sup>1</sup> En términos sociológicos, la expresión “posconflicto” es imprecisa y se presta a confusión porque ella sugiere que se transita hacia una fase en que el conflicto desaparece, cuando éste, violento o no violento, es consustancial a la sociedad. Por ello, parece mucho mejor emplear la frase posacuerdo para referirse al proceso de paz en Colombia.

principios generales que sirvan como punto de partida para la elaboración de la presente investigación.

Por ejemplo, para el profesor Luis Carlos Castillo, el problema de la violencia ha sido tan abrumador en la literatura sociológica colombiana que ha opacado el análisis y disertación con respecto a la exploración de procesos diferentes a la violencia. En sus propias palabras, hablando del coloquio sostenido en la Universidad del Valle sobre “Colombia a Comienzos del Nuevo Milenio”, el profesor Castillo destacó: “se podría decir, entonces, que el tema del encuentro: Colombia a comienzos del nuevo milenio terminó convertido en el estudio del conflicto en Colombia a comienzos del nuevo milenio” (Castillo, 2004, p. 17)

Sin lugar a duda, el fenómeno de la violencia en Colombia se vio acentuado por la aparición y consolidación de los grupos insurgentes (Farc Eln, Epl) a mediados de los años 1960, además de la entrada al conflicto de grupos de autodefensas, estructuras paramilitares y carteles de narcotráfico en la década de 1980. Sin embargo, pese a que este factor fue determinante en el proceso de degradación y descomposición de la guerra, no es correcto afirmar que la violencia se limita a este periodo. Tal y como menciona Catalina Cartagena (Cartagena, 2016) la historia del conflicto en Colombia se remonta a la fundación misma de la Nación. De hecho, el periodo más álgido de la confrontación armada fue resultado de un conjunto de conflictos sociales que venían gestándose desde mediados del siglo XIX, y que hallaron en las revoluciones latinoamericanas un detonante que posteriormente derivaría en la confrontación armada más longeva del continente.

Los estudios sobre la violencia se remontan a mediados de la década de 1950, particularmente con las investigaciones realizadas por Vernon Fluharty (1957) y Antonio García (1955), quienes explicaban este fenómeno (La Violencia) a partir de la siguiente hipótesis: la violencia tuvo como origen el proceso de transición de un orden feudal a un orden de características capitalista. Al presentarse un proceso de transformación política y de reestructuración económica, las elites feudales que habían gobernado hasta comienzo del siglo XX se vieron en la necesidad de acomodarse a los procesos de transición que se estaban presentando a nivel global. Este proceso de acomodación no tuvo como objetivo impulsar el proceso de modernización que se estaba presentando en aquel entonces, sino la conservación

de los privilegios que habían adquirido a lo largo de la historia republicana del país (citados en Zuleta, 2006).

Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la naciente hegemonía estadounidense se presentó un proceso de fortalecimiento del comercio internacional. Siendo así, durante la década de 1920 llegó una cantidad significativa de inversión extranjera al país, lo que directamente modificó las dinámicas económicas, dando paso a la aparición del libre mercado<sup>2</sup>. Esta nueva estructura económica se distanció considerablemente de la economía planificada y semifeudal en la que se encontraba Colombia a comienzo de siglo, situación que obligó a la oligarquía a modificar sus prácticas en aras de garantizar los medios para mantener sus privilegios. A grandes rasgos, se podría afirmar, que el proceso de modernización económica se caracterizó por presentar un nivel muy alto de concentración de la propiedad y del capital, situación que posteriormente derivaría en procesos de reivindicación social que cumplirían un papel activo en el conflicto armado.

El segundo aspecto que mencionan Fluharty (1957) y García (1955) es la irrupción de ideas liberales. En un país donde el poder político estaba estrechamente ligado a la Iglesia Católica, la llegada de principios modernos necesariamente implicó un traumatismo en la sociedad. La irrupción de estas ideas fue tan determinante en la configuración del país que para 1930 el Partido Liberal logró adjudicarse la Presidencia de la República después de cincuenta años de hegemonía conservadora (Zuleta, 2006). Esta situación posteriormente derivó en el surgimiento del Liberalismo Radical cuyo máximo exponente fue el caudillo Jorge Eliecer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. El magnicidio de Gaitán fue un factor determinante en el surgimiento de las guerrillas liberales las cuales posteriormente darían paso a los grupos subversivos de corte marxista-leninista.

Como menciona Pécaut, “La correlación de fuerzas que se instaura después del 9 de abril entre la burguesía y las masas urbanas constituyen el trasfondo sobre el cual se generalizará la Violencia a partir de 1949” (Pécaut, 1987c: 519).

---

<sup>2</sup> El proceso de transición económica tuvo sus primeros réditos para 1940, particularmente en el sector cafetero. De 1944 a 1946, el precio del café aumentó significativamente lo que fomentó una nueva ola de inversión extranjera, y lo que se tradujo a su vez en un aumento en los ingresos del país. Sin embargo, gran parte de estos ingresos fueron apropiados por una clase dominante la cual había cooptado la burocracia del comercio cafetero.

Algunos de los anteriores planteamientos han sido superados por los estudios más recientes de Daniel Pécaut y Fernán González. En este sentido, interesa destacar aquí que el La Violencia (con mayúscula) hace referencia el periodo comprendido entre los años 1946 y 1965 y que se caracterizó por el enfrentamiento a muerte entre los Partidos Liberal y Conservador y que buscaba el exterminio recíproco o la respuesta o resistencia a la agresión del otro. Fue un fenómeno fundamentalmente rural, que se vivió en la periferia del país y que poco impactó en los principales centros urbanos como Bogotá, Cali o Medellín, aunque estas ciudades fueron receptoras de los campesinos que huían del conflicto en las áreas rurales. Se caracterizó por todo tipo de acciones violentas en las que primó la sevicia y el horror, como bien lo describen Fals Borda, Germán Guzmán y Umaña Luna (1980) en su famoso libro: *La Violencia en Colombia*.

“La Violencia no tiene un comienzo ni un final fácilmente discernibles, que se puedan identificar con un acontecimiento preciso. Algunos incluso consideran que tuvo origen en los años 1931-1932 en los departamentos de Boyacá y Santander, cuando se produce la muerte de más de 10.000 personas, como consecuencia del cambio de la hegemonía conservadora a la hegemonía liberal. No obstante, la mayor parte de los analistas están de acuerdo en considerar que pasa por varias etapas: un preámbulo entre el segundo semestre de 1946 y los meses finales de 1949, caracterizado por un gran debate público a nivel nacional, en el que participan activamente los líderes de los partidos políticos; y por la persecución a los liberales como resultado del intento de homogeneizar políticamente el país ante la inminencia de las elecciones legislativas de marzo de 1947, con la consecuente reacción de estos últimos a la agresión de que son objeto. Un período de clímax comprendido entre 1949 y 1953 en el que la violencia alcanza sus más altos niveles, con participación de ambos partidos, que cubre la mayor parte de las regiones del país. Sólo escapan del flagelo la Costa Norte, con algunas excepciones y, de manera parcial, los departamentos de Nariño y Chocó”. (Valencia et al, 2018b: 18).

### 3.2 La violencia como fenómeno endémico de la sociedad colombiana

En 1962, previo a la fundación de los dos grupos subversivos más importantes de la historia del país (Farc y Eln), se realizó la primera investigación sistemática del fenómeno de la

Violencia, a cargo de los profesores Germán Guzmán, Orlando Fals Borda, y Eduardo Umaña. Las más de 200.000 muertes que había generado la guerra bipartidista, y en ese entonces la aparición de nuevos actores motivados por el éxito de la Revolución Cubana y el ímpetu revolucionario que se había propagado por toda Latinoamérica, dio paso a la necesidad de elaborar un estudio detallado de la violencia, entendida esta como un fenómeno endémico de la sociedad colombiana. Cabe resaltar que la investigación no tuvo un fin exclusivamente académico, sino que a su vez estuvo orientada a configurarse como un primer ejercicio de memoria histórica, dando inicio de este modo a un nuevo campo de investigación cuyo fin era encontrar la verdad a través de la objetividad que en teoría la ciencia garantiza (Valencia, 2012a, 2012b, 2015; Zuleta, 2006). Al respecto, el profesor Alberto Valencia dice:

“Desde el punto de vista de la interpretación de monseñor Guzmán se deducen varias cosas. En primer lugar, en buena medida el libro es un duro enjuiciamiento de las oligarquías, que no supieron estar a la altura de su papel dirigente, que obraron de manera irresponsable (recordemos que las preguntas por la responsabilidad son constantes a lo largo de libro), que no se dieron cuenta de las consecuencias que su enfrentamiento podía tener en el pueblo campesino, y que una vez se percataron de su obra ya no pudieron hacer nada. El campesino, nos dice monseñor, fue arrastrado a la violencia “sin que los condottieros de turno se percataran de cuán peligroso es jugar en Colombia a la revolución con labriegos” (LVC t. 1, 43). Las oligarquías subestimaron “malignamente la dinámica del crimen y el crimen asfixió al país” (Valencia, 2012a, p. 78).

Si bien, son recurrentes las explicaciones que identifican el origen de la Violencia en aspectos como la rivalidad entre la oligarquía dominante, la relación de la Iglesia con el Estado, la concentración de la tierra, o la antigua disputa entre centralistas y federalistas (Sánchez, 2007), para los autores de *La Violencia en Colombia* la responsabilidad recae en la totalidad de la población, ya sea por acción o por omisión (Guzmán, Fals Borda, Umaña; 1980).

La escala que alcanzó el conflicto en Colombia fue la consecuencia de la normalización del ejercicio de violencia como medio legítimo para, o alcanzar reivindicaciones de orden social o mantener el *statu quo*. Los líderes de los partidos tradicionales aprovecharon su condición para defender sus intereses particulares valiéndose de los instintos más violentos de un pueblo “vengativo” y “sin formación” (Valencia; 2012b). Autores como Camilo Torres, célebre por combinar la lucha armada con la religión, además de ser uno de los fundadores de la sociología en Colombia, concluyó que la violencia “desencadenó un proceso social imprevisto por las clases dirigentes, que le otorgó al campesinado la solidaridad de grupo,

acompañado de un sentimiento de superioridad y seguridad en la acción” (Torres; 1972. p.27). Además de lo anterior, la violencia lamentablemente se convirtió en la única posibilidad de ascenso social para un porcentaje muy alto de la población rural.

El tema de la violencia campesina también fue trabajado por José Gutiérrez y Orlando Fals Borda, quienes afirmaron que un rasgo fundamental en el proceso de emancipación del campesinado fue la rebeldía y el ejercicio de la violencia como medio para superar la dominación de las elites. Fals Borda a su vez reconoce que en este proceso fue muy importante un movimiento de laicidad cuyo objetivo era dejar atrás “las ideas de sufrimiento y pasividad que caracterizaban al mundo mítico y religioso” (Valencia, 2012b) en el que se desenvolvía el campesinado.

La normalización de la violencia quizás es el mayor reto al que se enfrenta Colombia con relación a la superación del conflicto armado. La degradación de la guerra, la aparición de nuevos actores y la profundización de los conflictos sociales que dieron origen a la confrontación, trajo como consecuencia que a nivel social se naturalizara el ejercicio de la violencia. Para decirlo en otras palabras, este fenómeno se convirtió en un “paradigma existencial” (Almonacid, 2017). Siendo así, resulta fundamental promover principios institucionalistas que reconozcan la necesidad de estipular reglas y principios de conducta formales a través de los cuales se puedan canalizar y resolver los conflictos.

### 3.3 Estudios sobre el fenómeno de la violencia en Colombia: una aproximación desde la década de 1970 y su relación con la debilidad del Estado

El apartado anterior, tuvo como objetivo rastrear el desarrollo histórico del estudio de la Violencia en el país. Como bien se mencionó, desde la primera mitad del siglo XX, se han articulado múltiples esfuerzos desde la academia para consolidar un estudio destallado y sistemático de este fenómeno. Lo anterior no solo con el objetivo de explicar sus causas objetivas, sino que a su vez con el fin de promover un escenario de memoria histórica que contribuya a la superación del conflicto y a su vez garantice su no repetición.

Dado el carácter prolongado del conflicto, las transformaciones que ha presentado el mismo, así como la aparición de nuevos actores y la consolidación de nuevas dinámicas, desde la década de 1970 fue manifiesta la necesidad de desarrollar nuevos estudios sobre el tema.

Podría afirmarse que a la par del desarrollo de la violencia se desarrollaron proyectos de investigación orientados a ahondar en la especificidad de un conflicto que fue evolucionando con el transcurrir del tiempo y su relación con la precariedad de las instituciones y del mismo Estado.

Para efecto del presente apartado, se tomará como base bibliográfica las siguientes investigaciones, con el fin de ampliar en el concepto de violencia presentado antes: 1) *Violencia, política y conflicto en Colombia* de Paul Oquist, 2) *Orden y Violencia evolución socio política de Colombia entre 1930-1953*, *Violencia y Política en Colombia y Guerra contra la sociedad* de Daniel Pécaut, 3) El informe *¡Basta Ya!* Del Centro Nacional de Memoria Histórica, 4) *Poder y violencia en Colombia* de Fernán González, 5) *Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC* publicados por el Gobierno en el 2018.

### *3.3.1 Violencia, política y conflicto en Colombia*

El cientista político Paul Oquist (1978), en su tesis doctoral para la Universidad de California-Berkeley, *Violencia, política y conflicto en Colombia*, es uno de los primeros autores que postula una relación directa entre la debilidad del Estado y la Violencia en Colombia. Sostiene que la Violencia se presentó como resultado del “derrumbe parcial del Estado”, que se explica por varios factores, entre ellos: 1) desintegración de los diferentes aparatos institucionales, 2) debilitamiento del papel interventor del Estado como mediador entre los partidos políticos tradicionales, y 3) utilización del Estado en beneficio de una clase y unos gremios dominantes.

Para Oquist el debilitamiento institucional fue la principal causa de la rápida propagación de la Violencia. Al ser cooptado por los partidos tradicionales, y en algún sentido al haber sido utilizado como herramienta de los intereses de estos, el Estado abandonó su rol como agente regulador y mediador de conflictos, lo que finalmente desencadenó en la sublevación por parte de un sector de la población que en su momento no se sintió representado en las instituciones. Desde la publicación del libro, esta hipótesis ha tenido múltiples detractores que han argumentado que el Estado no solo tiene presencia con el aparato militar, sino que la construcción de la subjetividad, la interiorización de las normas, los imaginarios de la Nación y la fabricación de ciudadanos como colombianos son resultado de la presencia

estatal. A pesar de ello, especialistas de la violencia en Colombia, como Daniel Pécaut, aunque no comparte totalmente la hipótesis, la ha afirmado en algunos de sus componentes.

### *3.3.2 Orden y violencia. Evolución socio política de Colombia entre 1930-1953, Violencia y política en Colombia y Guerra contra la sociedad*

Lo señalado por Paul Oquist se conjuga con lo planteado por Daniel Pécaut, quien en su libro *Orden y Violencia evolución socio política de Colombia entre 1930-1953*, sostiene:

“La violencia en Colombia se produce en el seno de una democracia que tiene por fundamento una división de la que ella misma no puede dar cuenta. Todos los sistemas democráticos se organizan sin lugar a dudas en torno también de divisiones territoriales y culturales, como S.M Lipset y S. Rokkan lo han mostrado hace ya algún tiempo. Afirmar que en Colombia lo social está sometido primordialmente a lo político y lo político está constituido primordialmente como una sub cultura tiene un alcance completamente distinto y conduce a admitir que la división tiende a ser insuperable y, en lo fundamental, ampliamente no instituible. Existen ciertamente instituciones que manejan las tensiones y que se apoyan eventualmente en la ley de la mayoría. Sin embargo, en las elecciones todos se ven tentados a solo reconocer un estado de hecho, una simple correlación de fuerzas provisional; el fraude que se presenta en ellas es, por lo demás, un ingrediente aceptado” (Pecaut, 2001b, p.35)

De la misma forma, referencia Pécaut la carencia y precariedad del Estado como una de las causas de la violencia y la desintegración social en el país:

“El Estado colombiano, en efecto, no ocupa de manera alguna la posición de preeminencia que hemos mencionado en el caso de otros países ni inmediatamente después de la crisis de 1930, ni incluso en un periodo más cercano. Difícilmente llega a ser un agente político de constitución de la nación. Interviene ciertamente en la economía, pero lo hace mucho menos que en otros países del subcontinente y enfrentándose a las reticencias de las élites económicas.” (Pécaut, 2001b, p.30).

Asimismo, en su libro *Violencia y política en Colombia*, Pécaut relata que los procesos de adhesión de las poblaciones a en el país y el surgimiento de fenómenos violentos aduce como causa la precariedad de las formas de existencia colectiva:

“Nos parece que las condiciones y las formas de “adhesión” de las poblaciones remiten en gran medida a un proceso previo de carencia o de crisis de modelos globales o parciales de regulación social: la precariedad de las formas de existencia colectiva o, en ciertos casos, la frecuencia de las situaciones de “desafiliación” (Pecaut, 2003, p. 21).



Igualmente, en su libro *Guerra contra la sociedad* Pécaut refiere que la precariedad del Estado causa violencia:

“La precariedad del Estado nacional permite que, simultáneamente, aflore sin cesar una violencia multifacética. La carencia de una simbología de la unidad nacional, la ausencia de mecanismos constantes de regulación social, el fraccionamiento especial de los poderes, son otros tantos factores que ponen al descubierto una conflictividad que circula libremente a través del tejido social” (Pecaut, 2001a, p. 36).

Aunada a esta precariedad, señala Pécaut, que otro común denominador de las zonas en las cuales se produce la violencia es su reciente y desordenada colonización, situación que ha impedido la gestación de instituciones sociales.

“Las zonas donde esta “adhesión” se produce más masivamente son, como ha sido mostrado ampliamente, aquellas que habían sido ocupadas recientemente como consecuencia de las migraciones de múltiples procedencias. Además, el dominio del Estado prácticamente no se ejerce en estas regiones. [...] los núcleos que así se crean, lejos de las autoridades, son percibidos constantemente por el centro como lugares “Sin Dios y sin Ley”. Y de hecho, ante la ausencia de algún tipo de mediación institucional, el tratamiento de los litigios sólo se puede llevar a cabo allí de una manera expedita” (Pecaut, 2003, p.21).

En este sentido, para el profesor Luis Carlos Castillo, puede que la precariedad de las instituciones genere violencia, pero también es evidente que esta violencia tiene por objeto acabar y debilitar las pocas y precarias instituciones que existen en el país, y que a pesar de estos abates han logrado prevalecer en el tiempo y resistir.

“En primer lugar, las recientes transformaciones económicas, políticas y sociales estaban produciendo una nueva sociedad en Colombia de la cual apenas comenzábamos a vislumbrar sus contornos. En segundo lugar, el conflicto interno a pesar de sus terribles secuelas de muerte, desplazamiento y destrucción, que harían pensar a cualquier analista que habíamos arribado a una situación de caos y de desorden incontrolables, no había logrado colapsar las instituciones que, por el contrario, resistían y se recomponían” (Castillo, 2004, p. 9).

### 3.3.3 *¡Basta ya! Informe del Centro de Memoria Histórica*

Tal como se menciona en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica *¡Basta Ya!*, el conflicto armado colombiano ha sido uno de los “más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina”. De 1958 a 2012, aproximadamente, 220.000 personas

murieron a causa del conflicto. En este informe se hace énfasis, además de la relación del conflicto con la institucionalidad, en la degradación de la guerra.

La degradación de la guerra se puede analizar desde múltiples perspectivas, sin embargo, a todas ellas les es común un factor: el involucramiento de la población civil. Quizás esta situación fue el punto de quiebre que dio paso a los episodios más crudos de la confrontación. El Centro Nacional de Memoria Histórica sugiere que los actores armados (grupos subversivos, paramilitares, y fuerzas del Estado) involucraron sistemáticamente a la población civil como parte de una estrategia de persuasión cuyo objetivo principal era mantener u obligar a que esta transfiriera su lealtad:

Atacar a la población es, para los actores armados, una forma de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de acumular fuerzas. La población civil es para los actores armados una fuente de respaldo político, económico, moral y logístico, que suma en el resultado final del conflicto. Para los victimarios, poco importa si ese respaldo es consentido o forzado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Las principales modalidades de violencia perpetrada por parte de los grupos armados hacia la población civil contemplaron las siguientes acciones: asesinatos selectivos, masacres, sevicia y tortura, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos forzados, despojo, extorsiones, violencia sexual, y reclutamiento ilícito. El carácter sistemático de estas acciones generó un proceso de descomposición del tejido social cuyas consecuencias se mantienen a pesar de los diversos esfuerzos por promover procesos de reconciliación. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta cualquier proceso de paz es encontrar las herramientas y las estrategias adecuadas para garantizar procesos de perdón y reconciliación, no solo entre los combatientes sino entre todas aquellas personas que hicieron parte del conflicto.

La violencia en Colombia escaló a un nivel tal, que la confrontación superó la disputa entre insurgencia y Estado, dando paso a la aparición de fenómenos de violencia en el seno de la sociedad civil. La experiencia del proceso de paz con las FARC demostró que los mayores conflictos aún se mantienen en la sociedad y no tanto entre aquellos que participaron

activamente en la guerra. El plebiscito fue un claro ejemplo del nivel de ruptura al que llegó la sociedad colombiana, y puso de manifiesto la necesidad de fomentar mecanismos de reconciliación que, partiendo de la complejidad de la situación, efectivamente atiendan a las necesidades puntuales de los territorios más afectados durante estos 50 años de conflicto.

### *3.3.4 Poder y violencia en Colombia.*

En el texto *Poder y Violencia en Colombia*, el sacerdote jesuita, Fernán González presenta un estudio detallado de la configuración del Estado colombiano, prestando particular interés al papel central que ha cumplido la violencia en este proceso. Una de las nociones fundamentales de su investigación es lo que él denomina “la presencia diferencial del Estado” (González, 2014). Partiendo de las particularidades de los territorios, así como de sus características políticas, económicas y sociales, González traza una relación directa entre el nivel de presencia estatal y el desarrollo de la violencia.

Uno de los aspectos más importantes de la investigación de González es que reconoce la importancia de analizar de manera diferenciada cada uno de los territorios. Partir de una visión multidimensional posibilita no solo comprender las diferentes formas en las que se ha manifestado el fenómeno de la violencia, sino que a su vez permite desarrollar parámetros de acción que atiendan a las necesidades particulares de cada una de las regiones en las que el componente institucional y de presencia del Estado es central. Si la manifestación de la violencia está directamente vinculada con las condiciones concretas de cada territorio, es fundamental aplicar medidas igualmente diferenciadas para mitigar tanto el conflicto como sus consecuencias.

Cabe mencionar que la propuesta de González es mucho más puntual al momento de referirse a la forma en la que se debe intervenir en cada territorio. Si bien las medidas deben partir de un enfoque diferencial, este proceso debe estar orientado a evaluar hasta qué punto la incidencia institucional es un factor determinante en los procesos de transformación del territorio. Frente a la relación entre Estado, violencia e instituciones, González afirma lo siguiente:

“Este recorrido histórico nos ha obligado a matizar la concepción ideal del Estado como una realidad homogénea y claramente diferenciada de la sociedad, con pleno dominio de esa sociedad. Y a evitar la tentación de sobrestimar la capacidad de las instituciones estatales para transformar la sociedad, que pasa por alto las limitaciones que presentan las situaciones realmente existentes en regiones y localidades. En ese sentido, el hecho de que el Estado Colombiano nunca haya tenido control total del territorio ni haya detentado el pleno monopolio de la violencia legítima, en vez de ser una anomalía o irregularidad, aparece como parte de nuestro proceso particular de formación de las instituciones estatales de la construcción de nación”. (González, 2014, p. 18).

El objetivo de la anterior cita, no es restarle importancia al papel de las instituciones o a la hipótesis de la debilidad del Estado en la génesis de la violencia en Colombia y a su papel en el proceso de transformación y de pacificación en las zonas de conflicto. Contrario a ello, se busca resaltar que el fortalecimiento de las instituciones en las regiones del país más afectadas por dicho conflicto es una condición necesaria, aunque no suficiente, para la superar la larga noche de violencia que ha padecido la sociedad colombiana.

### *3.3.5 Institucionalismo y construcción de paz*

La relación entre la institucionalidad, la violencia y la construcción de paz territorial fue un tema central en el proceso de negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno de Colombia y la desmovilizada guerrilla de las Farc. Si bien esta fue una discusión que atravesó cada uno de los puntos de la agenda<sup>3</sup>, sin lugar a duda tuvo un mayor eco en el punto de participación política. Tal y como se menciona en el tomo III de la *Biblioteca del proceso de paz con las Farc-EP* (2018), un gran porcentaje de los territorios más afectados el conflicto no ha logrado tener una representación significativa de sus intereses en las instituciones del Estado. Siendo así, desde el Gobierno Nacional, y en el marco de las negociaciones, se promovió la participación política y la transparencia institucional, partiendo de la idea de que estos dos principios son fundamentales para garantizar el éxito de los procesos de reconciliación y construcción de paz que requiere el país. Frente al tema de la violencia, la participación política y las instituciones, es pertinente citar el siguiente extracto del tercer tomo de la *Biblioteca del proceso de paz*:

---

<sup>3</sup> El proceso de negociación se centró en los siguientes puntos: 1) Política de Desarrollo Agrario Integral, 2) Participación Política, 3) Fin del Conflicto, 4) Solución al problema de las drogas ilícitas, 4) Víctimas, 5) Implementación, verificación y refrendación.

Las sociedades exigen cada vez más una mayor participación ciudadana, comoquiera que no sienten representadas sus demandas en las diferentes instituciones de democracia representativa establecidas en la Constitución y las leyes. En una etapa de transición para la terminación del conflicto, los mecanismos de participación ciudadana deben verse fortalecidos con el fin de que exista una legitimidad en el trámite de demandas sociales, así como una construcción colectiva de paz “de abajo hacia arriba. (Presidencia de la República, 2018).

## CAPÍTULO II

### LA METODOLOGÍA

#### 1. Esquema metodológico

Metodológicamente se trata de una investigación cuantitativa, longitudinal y de alcance explicativo por cuanto pretende identificar y analizar las causas de un fenómeno social o hecho social, para usar la categoría durkheimiana. En particular, se pretenden identificar las “causas” de la violencia en un conjunto de pequeños municipios que se caracterizan su ruralidad, hacen parte de la periferia colombiana, tienen baja presencia institucional y a la vez presentan altos índices de violencia. En concordancia con el planteamiento teórico desarrollado antes, se pretende establecer la relación entre dos variables: los homicidios y la presencia institucional. Aunque existen múltiples violencias, la asociada con la delincuencia común, la violencia política relacionada con el conflicto interno, la violencia de género, entre otras, se utiliza la tasa de homicidio como una proxis de la violencia; la presencia estatal se analiza a través de la prestación de los servicios públicos y del Índice sintético de institucionalidad.

Es importante recalcar que la investigación adquiere un carácter longitudinal puesto que se analizan los cambios a través del tiempo de un conjunto de variables y sus relaciones. En concreto, se trata de dos series de tiempo. En primer lugar, en cuanto a los servicios públicos, se trabaja con los censos de los años 1993 y 2005 y en cuanto al Índice sintético de institucionalidad se analizan los datos en el período comprendido entre el 2005 y el 2017.

Es relevante aquí, una digresión sobre la variable servicios públicos como proxis también de la presencia estatal. En efecto, El Estado, como lo ha puesto de presente el profesor Daniel Pécaut en múltiples estudios, tiene una dimensión simbólica que va más allá de un simple carácter instrumental. Como también lo dice el Profesor Alberto Valencia, la presencia estatal no se reduce simplemente a la presencia militar, como aconteció en el doble periodo de la seguridad democrática del presidente Uribe Vélez, ni a la mera existencia de escuelas, de puestos de salud y la construcción de acueductos y alcantarillados. El Estado tiene una

dimensión simbólica fundamental que se expresa en su capacidad para que los individuos integren, interioricen, asimilen y pongan en práctica un conjunto de normas en sus relaciones con la autoridad política.

Cuando el Estado lleva servicios públicos a los municipios apartados, como los que se analizan en esta investigación, también está incidiendo en que los individuos, a través del pago de esos servicios, acaten las normas que ese mismo Estado diseña. Cuando se construyen escuelas y en ellas se enseña, el Estado está construyendo simbólicamente a los individuos como ciudadanos. A través de la enseñanza en esas escuelas de la historia o de la geografía, se construye en los individuos la ficción de una historia compartida, de los héroes que han construido la Nación y el Estado y cuáles son sus fronteras, que deben ser defendidas, incluso, a consta de la vida de esos ciudadanos. Por lo tanto, la prestación de servicios públicos no solo es una mera presencia instrumental del Estado, sino que también tiene un impacto simbólico fundamental.

Pero concentrándonos en el esquema metodológico, se revisó una propuesta de medición de la cohesión social de la Cepal, puesto que, dentro del universo de cohesión social, se encuentra la integración social que alude al acceso de los ciudadanos a niveles básicos de bienestar (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal, 2010). La metodología aplicada tiene como fin identificar el papel de las políticas públicas como sostén del bienestar y la cohesión social, con lo que se pretende capturar la forma como el Estado es capaz de incidir en la cohesión y por ende limitar los conflictos generados por la anomia. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal, 2010).

En la medición propuesta por la Cepal, es relevante el pilar de la Institucionalidad, el cual se centra en el papel del sistema de protección social, es decir, un seguimiento del rol de las instituciones como proveedoras de servicios de salud, vivienda y educación; también tiene un componente sobre la reducción de la corrupción, que busca la mejora de la administración estatal.

El otro pilar, "Acceso a los recursos", consiste en la garantía de integración de los territorios y su población al mercado global, mirando cómo el acceso permite el desarrollo económico.

Puesto que no consideramos que tenga relevancia con el desarrollo de la investigación, no acudimos a ninguno de los indicadores de este pilar.

La complejidad de la interacción de variables de diferentes esferas como el acceso a servicios, la garantía de seguridad y la calidad de gobierno estatal, hace que su revisión independiente se limite el contexto multidimensional que comprende la cohesión social, por lo cual la Cepal propone la elaboración de indicadores sintéticos, que permite la posibilidad de resumir un conjunto importante de información en un solo indicador compuesto, que da cuanta de información valiosa (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal, 2010).

El primer paso para la elaboración del indicador sintético es la función de transformación, dado que los atributos son medidos en diferentes unidades, ellos necesitan ser estandarizados para ser llevados a una escala común antes de ser agregados. Uno de los más utilizados es la estandarización basada en el rango, el cual utilizaremos para este caso, cabe notar que no existe una guía normativa para la selección del método (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal, 2010).

**Tabla 1: Metodología de Normalización de Variables- Cepal**

Método	Formula
A partir del Rango	$I_{ij} = \frac{x_{ij} - \min (x_j)}{\max (x_j) - \min (x_j)}$

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal, 2010.

La normalización a partir del rango, permite que las diferentes variables en unidades diferentes puedan ser expresadas en variables de entre 0 y 1, lo cual se obtiene de restar el valor de la determinada variable y el mínimo presente en la serie de datos para el tiempo determinado, posteriormente, es dividió por el rango que se obtiene al restar el máximo y mínimo de la serie en su periodo determinado.

El segundo paso, es la estructura de ponderación, esto corresponde al peso que se le otorga a cada variable del indicador sintético. La forma más simple para determinarlo, la cual se



utilizó, es ponderar por igual todos los atributos para reducir al mínimo la interferencia del investigador. Existen otros métodos como es otorgarle menor valor a las variables de las cuales la información pueda ser más imprecisa o consultando a la población sobre el valor que se le ha de otorgar.

Utilizando esta metodología propuesta por la Cepal, el Departamento Nacional de Planeación, en el 2015, creó un indicador para determinar la vulnerabilidad del territorio. Con este indicador sintético, se pretendía observar el esfuerzo estatal para afianzar una presencia institucional en todo el territorio, estaba constituido por 6 categorías, las cuales contenían 13 variables.

La vulnerabilidad territorial se entendía como:

“La inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida como consecuencia del impacto provocado por el conflicto armado interno y la criminalidad común y organizada. También, se asume que el grado de vulnerabilidad depende inversamente de la capacidad en el manejo de recursos y estrategias disponibles en las comunidades para enfrentar dichos fenómenos desestabilizadores.” (Departamento Nacional de Planeación, 2015).

Aunque existe cierta similitud con nuestro problema de investigación, se utilizó la metodología, pero cambiando algunas de las variables propuestas, ya que o no son relevantes (como porcentaje de recursos propios o dependencia de transferencias) o fueron utilizadas al inicio de la investigación para la determinación del área de estudio, como es el caso de las hectáreas de coca.

Por último, es importante anotar que esta metodología presenta una relativa similitud con el trabajo de Daron Acemoglu, Camilo García Jimeno y James A. Robinson, *State Capacity And Economic Development: A Network Approach* (2014), los cuales desarrollaron un indicador para el estudio de la capacidad estatal utilizando un acercamiento de redes de interacción entre los diferentes municipios.

Puesto que el análisis actual pretende analizar, independientemente, la relación que existe en los municipios entre el nivel de la institucionalidad y los índices de homicidios, se descartó la metodología del estudio de redes de interacción.

Tal como se hizo referencia en la sección anterior, el proceso para el desarrollo del Índice Sintético de Institucionalidad comprende dos fases. Una vez obtenido este indicador, se

procedió a comparar el grado de institucionalidad en una serie de tiempo frente al número de homicidios como variable de violencia y así poder validar la hipótesis de investigación.

La primera fase de construcción del indicador es la selección de indicadores, la cual fue basada en la pertinencia, calidad, disponibilidad y comparabilidad entre municipios. Con lo cual elaboramos la siguiente tabla:

**Tabla 2: Categorías y Variables – Indicador Sintético de Institucionalidad**

Categoría	Variable	Indicador	Valores	Fuente	Disponibilidad
<b>Inseguridad</b>	Ataque a Infraestructura Policial	Numero de Ataque	Absolutos	Policía - DIJIN	2005-2017
	Homicidio a Agentes de Policía	Número de Homicidios	Absolutos	Policía - DIJIN	2005-2017
	Personas Desplazadas	Número de Personas Desplazadas	Absolutos	Registro Único de Víctimas	2005-2017
<b>Educación</b>	Deserción Escolar	Tasa de Deserción	Relativos	Min Educación	2005-2017
	Proporción Estudiantes por Docentes	Docentes / Matricula Estudiantil	Relativos	Min Educación	2005-2017
	Cobertura en Transición	Cobertura Neta Transición	Relativos	Min Educación	2005-2017
	Cobertura en Educación Básica	Cobertura Neta Básica	Relativos	Min Educación	2005-2017
	Cobertura en Educación Media	Cobertura Neta Media	Relativos	Min Educación	2005-2017
<b>Buen Gobierno</b>	Funcionarios Públicos Sancionados	# de Funcionarios Sancionados	Absolutos	Procuraduría	2005-2017
	Servidores Públicos de Elección Popular Sancionados	# de Servidores Públicos de Elección Popular Sancionados	Absolutos	Procuraduría	2005-2017
	Funcionarios Públicos Investigados	# de Funcionarios Investigados	Absolutos	Procuraduría	2005-2017
	Servidores Públicos de Elección Popular Investigados	# de Servidores Públicos de Elección Popular Investigados	Absolutos	Procuraduría	2005-2017
	Dependencia del Presupuesto municipal del SGP	$x = 100 * (SGP + SGR + otras\ transf / Ingresos\ totales)$	Relativos	DNP	2005-2017
<b>Salud</b>	Vacunación	Cobertura de vacunación DPT 3° Dosis menores de 1 año.	Relativos	Min Salud	2005-2017
	Mortalidad Infantil	Tasa de Mortalidad Infantil.	Relativos	DANE	2005-2017

Fuente: Elaboración propia.

Estas categorías se construyeron para medir tres componentes de la institucionalidad en los municipios de estudio.

1. Al incluir una categoría de acciones armadas, se procuró mirar la capacidad de respuesta de las instituciones policivas en los municipios, luego de solicitar múltiples indicadores que utilizan organismos como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, no se encontró un indicador que tuviera relevancia o continuidad, por lo cual, se optó fue por enfocarlo frente a la vulnerabilidad de la infraestructura y personal de la fuerza policiva, y así observar el riesgo que presentaba la comunidad. Para complementarlo, se decidió incluir las cifras de personas desplazadas de cada municipio, ya que es un dato que complementa la debilidad de la estructura policiva al no poder evitar las presiones de desplazamiento producidas por el conflicto y porque esta variable tiene una continuidad y territorialidad que permitió su uso.
2. Existen múltiples formas para aproximarse a los servicios sociales prestados por las instituciones en los municipios, principalmente, se decidió optar por dos categorías de servicios esenciales, la salud y la educación las cuales cuentan con indicadores de análisis continuo y con una alta confiabilidad, para así determinar la presencia institucional en los municipios de estudio, como a su vez, la formación de instituciones que regulan el comportamiento de los individuos.
3. Por último, se procuró revisar el Buen Gobierno de la Administración Municipal, en primer lugar, observando la confianza institucional respecto de los individuos sobre las instituciones. Para esto, se consideró relevante las cifras de investigados y sancionados tanto de funcionarios como de servidores, para establecer si existe una relación respecto a comportamientos violentos. Segundo, el desarrollo de los municipios entorno a lograr fortalecer su administración pública, esto en cuanto a la dependencia del Gobierno nacional, medido por el porcentaje que representan los recursos de Transferencias (SGP y SGR) en el presupuesto municipal.

En el momento de selección de las variables, se recurrió a múltiples fuentes de información oficial: cifras del Ministerio de Justicia, respecto de la eficiencia judicial; cifras de la Policía Nacional, respecto de la presencia policiva como número de oficiales y sub oficiales en el territorio; cifras al Ministerio de Salud, respecto a la presencia de instituciones médicas. Muchas de ellas no se incluyeron puesto que la serie histórica estaba incompleta o la forma de la medición no arrojaba conclusiones relevantes respecto a nuestro problema de investigación.

Como se observa en la Tabla 2, algunos indicadores son expresados en valores absolutos (N° personas desplazadas) y otros relativos (Tasa de deserción escolar). Para expresar las variables en la misma unidad de medida, se procedió a normalizarlas mediante las siguientes fórmulas matemáticas, de forma que se pueden agregar ya que se expresan en variables de entre 0 y 1. Como los indicadores que fueron tomados para la medición, no todos corresponden a medidas positivas, se planteó dos formas para normalizar las variables ambas utilizando el rango.

Para las variables positivas, como sucede con la cobertura educativa, que al aumentar debe tener un comportamiento positivo, frente a nuestro indicador de institucionalidad, se normalizó tal como se observa en la siguiente fórmula:

$$y_{i,t} = \frac{x_{i,t} - Min_{xt}}{Max_{xt} - Min_{xt}}$$

Donde:

**Tabla 3: Componentes Normalización Positiva.**

$Y_{i,t}$	Valor de la variable normalizada para el municipio i en el periodo t.
$X_{i,t}$	Valor de la variable para el municipio i en el periodo t.
$Min_{xt}$	Valor mínimo de la variable x en el periodo t.
$Max_{xt}$	Valor máximo de la variable x en el periodo t.

**Fuente:** Índice de vulnerabilidad territorial: Resultados 2008-2012 – DNP.

Para las variables negativas, como los ataques a infraestructura policial, los cuales al aumentar deben presentar un impacto negativo, se ajustó la metodología propuesta por el DNP de la siguiente forma.

$$y_{i,t} = \frac{Max_{xt} - x_{i,t}}{Max_{xt} - Min_{xt}}$$

Donde:

**Tabla 4: Componentes Normalización Negativa**

$Y_{i,t}$	Valor de la variable normalizada para el municipio i en el periodo t.
$X_{i,t}$	Valor de la variable para el municipio i en el periodo t.
$Min_{xt}$	Valor mínimo de la variable x en el periodo t.
$Max_{xt}$	Valor máximo de la variable x en el periodo t.

Fuente: Ajustado por el autor con base en el Índice de vulnerabilidad territorial: Resultados 2008-2012 – DNP.

La siguiente fase, que comprende la ponderación de las variables y de las categorías que las agrupan, para evitar alteraciones por parte del investigador, se determinó establecer un peso igual a cada categoría y variable, lo cual se exprese en la siguiente tabla.

**Tabla 5: Ponderación Categorías y Variables.**

Categoría	Ponderación	Variable	Ponderación
Inseguridad	25%	- Ataque a infraestructura policial	33%
Inseguridad		- Homicidio de agentes de policía	33%
Inseguridad		- Personas desplazadas	34%
Educación	25%	- Deserción escolar	20%
Educación		+ Proporción estudiantes por docentes	20%
Educación		+ Cobertura en transición	20%
Educación		+ Cobertura en educación básica	20%
Educación	25%	+ Cobertura en educación media	20%
Buen Gobierno		- Funcionarios sancionados	20%
Buen Gobierno		- Electos sancionados	20%
Buen Gobierno		- Funcionarios investigados	20%
Buen Gobierno		- Servidores Investigados	20%
Buen Gobierno		- Dependencia del presupuesto municipal del SGP	20%
Salud	25%	+ Vacunación	50%
Salud		- Mortalidad infantil	50%

Fuente: Elaboración propia.

El Índice Sintético de Institucionalidad (ISI), se calcula a partir del valor normalizado de las variables, primero por la ponderación de variable y luego por la ponderación de categoría.

Ponderación de variables para determinar las Categorías:

$$M_{i,t,c} = \rho_{s1}(y_{1,i,t}) + \rho_{s2}(y_{2,i,t}) + \dots + \rho_{sn}(y_{n,i,t})$$

Donde:

**Tabla 6. Componentes Agregación por Categorías**

$M_{i,t,c}$	Valor de la categoría (c) para el municipio (i) en el periodo (t).
$Y_{n,i,t}$	Valor de la variable (n) normalizada del municipio (i) en el período (t).
$P_{t,n}$	Ponderador de la variable (n) en el período (t).

Fuente: Índice de vulnerabilidad territorial: Resultados 2008-2012 - DNP

Ponderación de Categorías para determinar el Índice Sintético de Institucionalidad.

$$ISI_{i,t} = P_{c1}(M_{i,t,c1}) + P_{c2}(M_{i,t,c2}) + \dots + P_{c6}(M_{i,t,c6})$$

Donde:

**Tabla 7: Componentes Agregación Índice Sintético de Institucionalidad**

$ISI_{i,t,c}$	Índice de Sintético de Institucionalidad del municipio i en el período t.
$P_c$	Ponderación de la categoría c.
$M_{i,t,c}$	Valor de la categoría (c) para el municipio (i) en el periodo (t).

Fuente: Índice de vulnerabilidad territorial: Resultados 2008-2012 - DNP

Una vez determinado el Indicador Sintético de Institucionalidad, se analizó una serie histórica de 2005 a 2017 del número de homicidios en el municipio para así poder concluir si hay una relación causal entre la inexistencia, o la existencia precaria de instituciones sociales y los fenómenos de violencia que allí se desarrollaron.

Es pertinente aclarar que, respecto a la información de homicidios, no se separaron aquellos relacionados con el conflicto armado, de los asociados con la delincuencia común, puesto que la presencia estatal que se pretende analizar en esta investigación quedaría corta, ya que el surgimiento de instituciones estatales la asociamos con la reducción de la violencia en cualquiera de sus modalidades, no solo de grupos armados (violencia política) sino del surgimiento de grupos delincuenciales (una modalidad de violencia social) Igualmente, se mantuvieron aquellos relacionados con riñas, ya que igualmente la institucionalidad estatal tal como proponemos analizarla buscaría generar relaciones entre los individuos más pacíficas y limitar el retorno a ese estado natural incivilizado que conduce al uso de la fuerza y a la violencia homicida.

## 2. Metodología de la relación entre institucionalidad y violencia

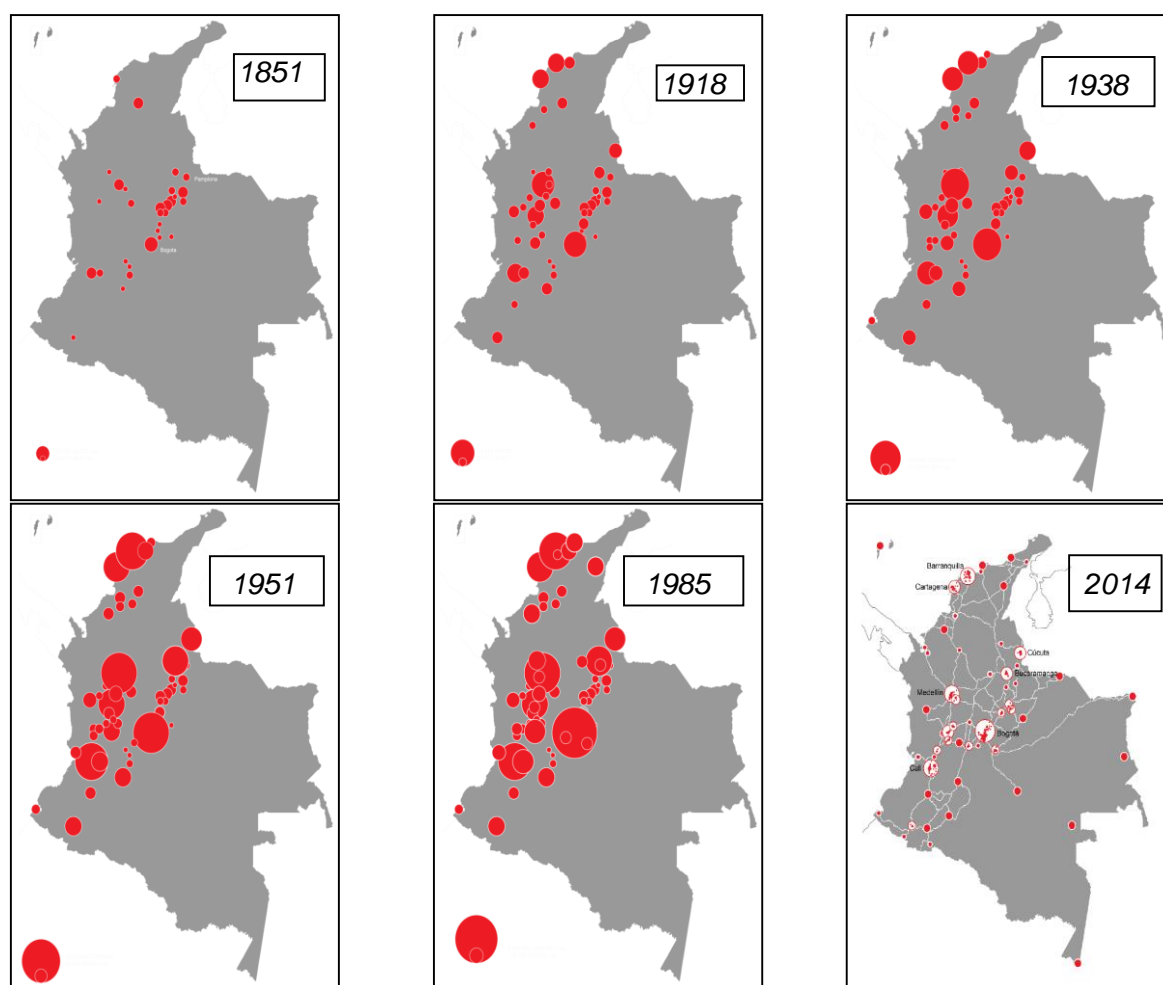
Tal como se señala en las consideraciones teóricas, la concepción de institucionalidad busca configurarse como una serie de normas formales e informales que pretenden regular los comportamientos de los individuos y de los colectivos, que ante su precariedad conducirían a conflictos violentos, que terminan en el derramamiento de sangre.

La evolución de la institucionalidad colombiana es compleja; una geografía que ha limitado históricamente la comunicación y una constante lucha entre departamentos, entre el centro y la periferia, entre élites nacionales y locales, que ha determinado una presencia diferencial del Estado en el territorio colombiano (González, 2014).

En el 2014, el Departamento Nacional de Planeación desarrolló un estudio sobre la configuración de la red de ciudades, en la abstracción nodal, producto de dicho estudio, se puede observar cómo los polos de desarrollo se han concentrado en puntos relativamente aislados, que lentamente fueron generando vectores de conexión, principalmente sobre la Cordillera Oriental, el Valle del Magdalena y del Cauca y entronó al Valle de Aburrá. Conexiones que finalizan en la región Caribe como puerta del comercio exterior.

Igualmente, permite evidenciar cómo este desarrollo se da en un territorio que representa un porcentaje pequeño respecto al vasto territorio nacional, dejando grandes vacíos cuyo desarrollo fue más lento y aislado (Montenegro, 2006). Muchas de estas zonas tienen una muy limitada presencia estatal, lo que ha generado que algunas sean el centro del desarrollo de la lucha armada colombiana (González, 2014). De este vacío, surge la pregunta de investigación, que, como se planteó antes, se interroga si la limitada institucionalidad estatal tiene alguna relación con la presencia de la violencia.

**Figura 1: Evolución del Sistema de Ciudades 1851-2014**



Fuente: DNP, Misión Sistema de Ciudades, 2014.

En la Figura 1, del estudio de Ciudades dirigido por el DNP, se observa ese proceso de desarrollo territorial. Desde 1851, se puede observar cómo el desarrollo gravita entorno a los principales núcleos urbanos, en los cuales se despliegan las principales actividades



comerciales. En los años siguientes, y hasta mediados del siglo XX, se observa que lentamente el desarrollo gira en torno a los vectores que unen las principales ciudades, con la lógica de establecer redes comerciales y de comunicación.

Por último, en el 2014, cobran relevancia otros asentamientos dentro de la red, mucho más distantes de los principales núcleos. Este desarrollo tuvo como consecuencia, que la presencia institucional, que siempre es limitada por capacidad administrativa y presupuestal, se centrará en la red principal tanto en los núcleos como en los vectores de conexión, dejando un vasto territorio con un limitado desarrollo, el cual en gran parte fue el escenario del conflicto colombiano.

A partir de la anterior consideración, el Índice Sintético de Institucionalidad se complementó con una revisión inicial de la evolución de los municipios en el área de estudio, a partir de las cifras recogidas por los Censos de 1993 y 2005. Las cifras que se abordaron en este primer momento, tienen que ver con el acceso a servicios públicos (Energía, acueducto y alcantarillado) y servicios de educación (Analfabetismo y asistencia escolar). Para posteriormente, abordar a profundidad, desde el periodo de estudio 2005-2017, el Índice Sintético de Institucionalidad (ISI).

Para establecer la correlación entre las variables analizadas se hizo uso de dos herramientas estadísticas. En primer lugar, a partir de la media aritmética de las 4 categorías propuestas en el Índice Sintético de Institucionalidad y usando la media de homicidios, se realizó un análisis univariado. En segundo se desarrolló una prueba paramétrica de correlación, a partir del coeficiente de correlación, para comprobar si existe una relación estadística significativa en cuanto al Índice sintético y los homicidios. Mediante esta prueba se busca establecer como incide una variable en el comportamiento de la otra para determinar si la hipótesis plateada en la investigación se comprueba.

### 3. Determinación del área de estudio

Para la evaluación de la hipótesis de investigación se acudió a un análisis histórico de las dos variables de estudio: la violencia y la institucionalidad estatal. Esto a partir de un muestreo

de municipios con características similares. El área de estudio, tal como se determinó en el proyecto de investigación, comprende municipios que compartan las siguientes características.

- Haber sido escenarios de la violencia y del conflicto armado en el periodo comprendido entre los años 1998 y 2016.
- Haber sido escenarios de masacres o actos violentos de crueldad ejemplar y paradigmática (1998-2016).
- Tener en sus territorios presencia significativa de cultivos de uso ilícitos (2001-2016).
- Tener menos de 90.000 habitantes.

Para generar mayor confianza a la investigación, se determinó incluir una variable adicional, el tamaño poblacional, puesto que en la revisión obtenida, la mayoría de los municipios que cumplieron con las características tenían tamaños muy similares, por lo cual se determinó generar un rango máximo para poder analizar muestras con características parecidas y reducir la distorsión que generaría analizar ciudades con características mucho más complejas, más adelante se desarrolla esta determinación

Para realizar el cruce de variables propuestas en el proyecto, se desarrolló un análisis geográfico a partir de Sistemas de Información Geográfica (SIG), cuya información fue aportada por instituciones oficiales y organizaciones sociales que se han dedicado a estudiar el conflicto armado y se le otorgó valor a cada una de las variables para así ponderar un muestreo de municipios similares, tal como se aprecia en la figura 2.

**Figura 2: Variables y fuentes de información.**

Analisis Geografico	Variable	Fuente
	Masacres	Cartografia del Conflicto 1998 - 2016, Proyecto rutas del Conflicto desarrollado por, Centro Nacional de Memoria Historica, Fundacion ConLupa.co y VerdadAbierta.com
	Presencia Grupos Armados	Mapa del Conflicto (FARC, ELN y BACRIM) 2015 Fundacion Paz & Reconciliación Presencia Armada FARC (2015-2016), ELN (2014,2016) y GAO (2015-2016), Datos CERAC - MOE - PARES Geografia de la presencia de Actores Armados 1998-2011, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.
	Cultivos Illicitos	Modulo de Cultivos Illicitos UNODC - 2000 a 2006 Observatorio de Colombia de Drogas 2007-2016
	Cartografia politico Administrativa	Instituto Geográfico Agustín Codazzi - Mapa Politico Administrativo Departamentos y Municipios

Fuente: Elaboración propia.

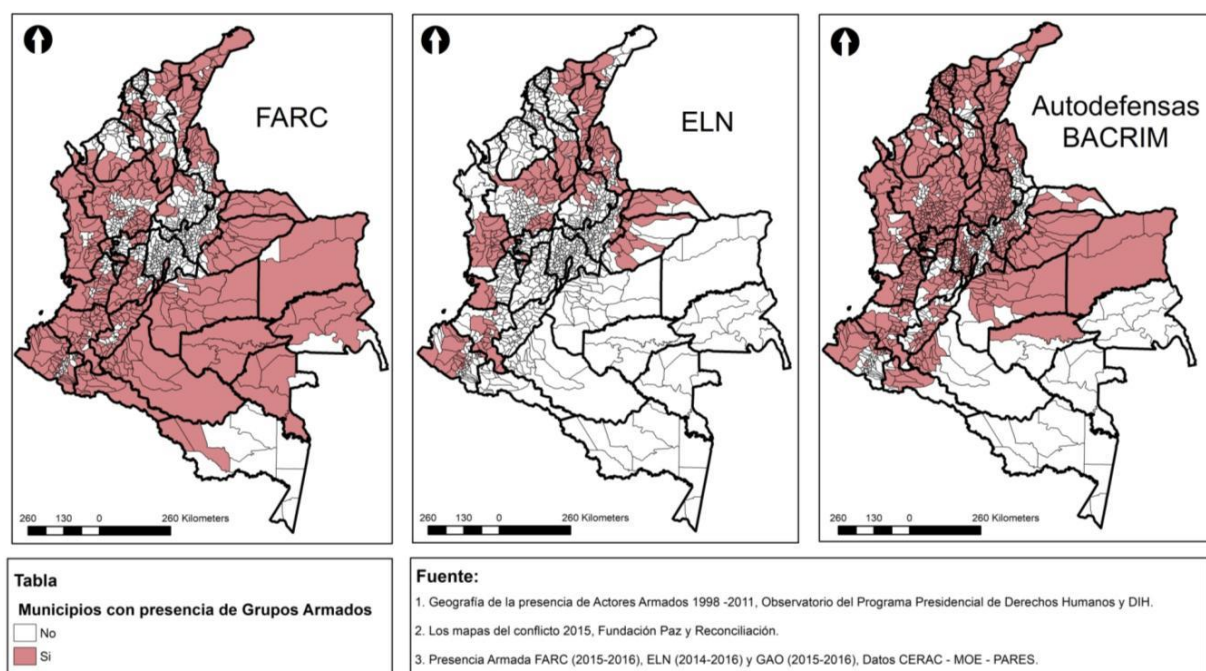
A cada una de las variables planteadas, se les ponderó 1 punto, que se asignaba al municipio si este cumplía con las características planteadas. Es pertinente mencionar que, en la presencia de Grupos armados, se decidió dar mayor importancia a aquellos municipios que tuvieron acciones o presencia de los tres actores Armados principales: Farc, Eln y Bacrim.

Por lo anterior, los municipios que se tomaron para estudio en esta investigación fueron los que cumplieran con el puntaje máximo que es 6 puntos, al cumplir con la ponderación de las 4 variables.

A continuación, se revisó la presencia de grupos armados, principalmente las Farc, el Eln y las Autodefensas, hoy conocidas como Bacrim y se asignó a cada municipio un punto, si alguno de los grupos armados había tenido presencia o cometido algún tipo de acción militar.

A partir de esta información, se elaboraron los mapas que se presentan en la figura 3.

**Figura 3. Presencia de Grupos Armados**

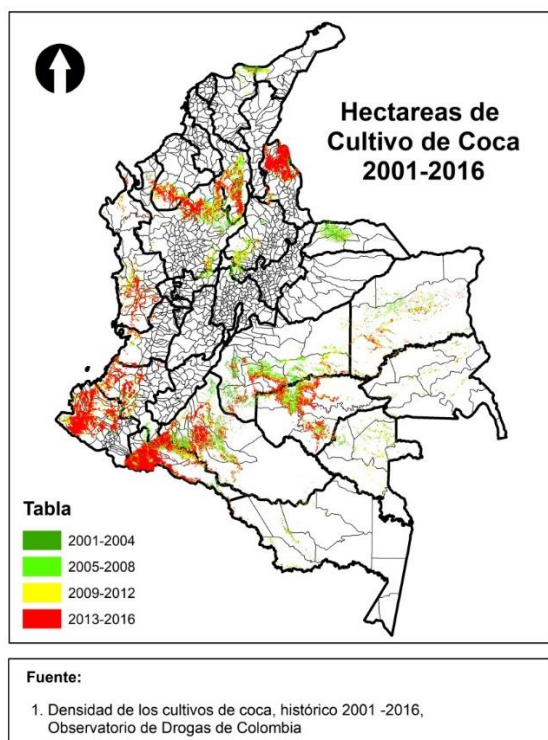


Luego, tomando la información del Observatorio de Drogas del Gobierno Nacional, se les asignó un punto a los municipios que entre los años 2001 y 2016 tuvieron cultivos de coca, lo cual puede observarse en la figura 4.

Con la información proveniente del proyecto Rutas del Conflicto, el cual fue desarrollado en alianza entre Centro Nacional de Memoria Histórica, Fundación ConLupa.com y VerdadAbierta.com, se clasificaron los municipios que en el periodo 1998-2016 se hubieran cometido masacres, lo cual se puede observar en la figura 5.

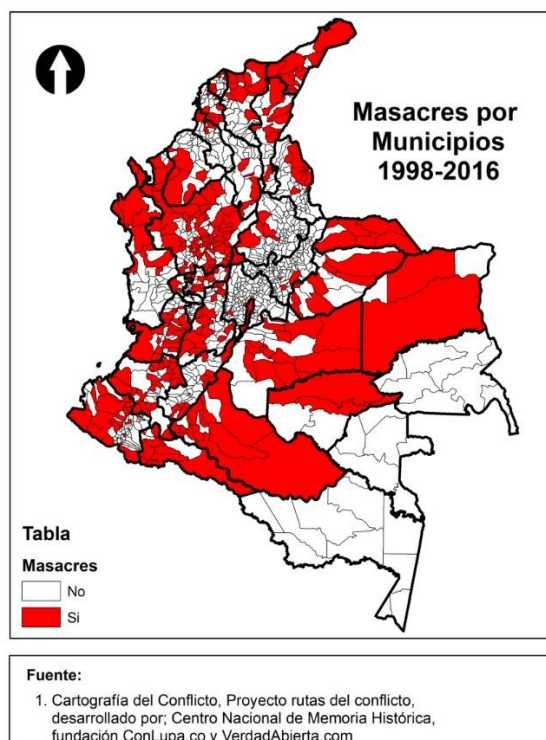
**Figura 4: Hectáreas de Cultivo de Coca**

**2001-2016**



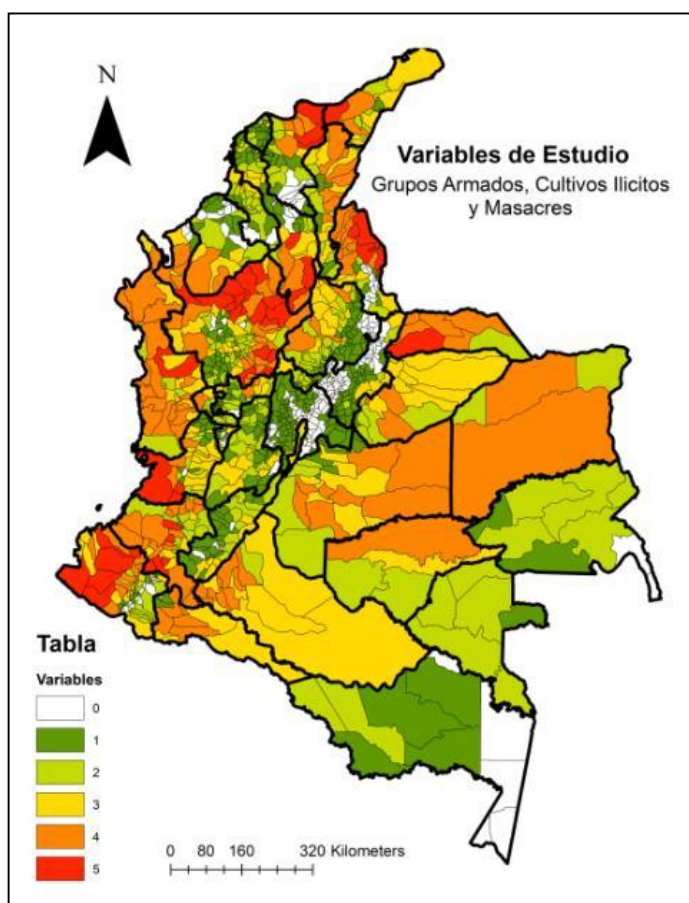
**Figura 5: Masacres por municipios**

**1998-2016**



Finalmente, al ponderar las 5 variables: presencia de las Farc, presencia del Eln, presencia de Autodefensas o Bacrim, hectáreas de cultivos de uso ilícito y ejecución de masacres, se delimitó en 42 municipios que cumplen con las variables. Lo anterior, se puede observar en la figura 6.

**Figura 6. Presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, y masacres**



Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención del último punto, se revisó la población del Censo 2005 lo cual condujo a que 35 municipios de los 42 tenían poblaciones inferiores a 90.000 habitantes. Los siete restantes lo superaban con rangos elevados San Andrés de Tumaco (160.034), Jamundí (96.993), Buenaventura (328.794), Quibdó (112.886), Santa Marta (415.270), Cúcuta (587.676.) y Cali (2.119.908).

De los 7 municipios con población superior a 90.000 habitantes, 4 son capitales de departamento, lo que los convierte en aglomeraciones poblacionales más complejas, ya que, siendo centros de poder departamental, tienen injerencia como núcleos de poder de alcance regional, siendo así que muchos de los municipios de menor población terminan gravitando en torno a su área de influencia. Lo cual hace que tratar de analizarlos al nivel que se propone en este trabajo, pueda ser superficial y tendrían complejidades mayores a las que se analizan

en municipios poblacionales más pequeños, con características similares como observamos en la prestación de servicios públicos y en el Índice de institucionalidad propuesto.

En el caso de San Andrés de Tumaco y Buenaventura, la presencia de los puertos marítimos ha tenido un gran impacto en su desarrollo tanto legal como ilegal. Para analizar la evolución de estos territorios, se requiere estudiar el impacto de los puertos e incluir variables relacionadas con este tema que no se toman en consideración en esta investigación. Por lo anterior, se consideró que la complejidad de estos territorios solo se analizaría de manera muy superficial y afectaría la comparación con las demás muestras.

Por último, la ciudad de Jamundí y su conurbación con la ciudad de Cali hace que analizarla de manera independiente desconocería las lógicas que se han construido en torno a esta relación.

Por las anteriores consideraciones, se estableció que se le otorgaría un punto adicional a los municipios con poblaciones inferiores a 90.000 habitantes lo cual permite tomar municipios con características similares y así tener unas muestras investigativas que permitan generar conclusiones respecto a nuestra hipótesis. Pero lo más relevante de estos criterios metodológicos es la consideración que en el conflicto colombiano el tamaño del municipio es una variable explicativa central. Como se dijo antes, dicho conflicto y los hechos de violencia asociados con él se han desarrollado fundamentalmente en las pequeñas localidades, precisamente por el carácter rural del conflicto, lo que ha sido así desde los tiempos de la llamada Violencia. En los grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín o Cali, la violencia adquiere un carácter urbano y está más asociada con la delincuencia y con los ajustes de cuentas relacionados con el narcotráfico, que son las principales fuentes de las altas tasas de homicidios que han caracterizado a estas ciudades capitales y que son distinguidas como violencia social (aunque toda violencia es social) en la tipología desarrollada en el acápite teórico de esta investigación.

En la tabla 8, se observa el nombre de los municipios seleccionados, el departamento al cual pertenecen y su tamaño poblacional.

**Tabla 8: Tamaño Poblacional - Municipios de Estudio.**

Departamento	Municipio	2005
		Población
Antioquia	Campamento	3,400
Antioquia	Briceno (1980)	7,953
Antioquia	Mutató	9,671
Norte de Santander	El Tarra	9,925
Antioquia	Vegachí (1984)	11,086
Nariño	Magüi	13,831
Nariño	Ricaurte	14,669
Antioquia	San Carlos	15,918
Antioquia	Valdivia	16,489
Antioquia	Puerto Nare (Antes La Magdalena)	16,711
Cauca	Mercaderes	17,670
Bolívar	Simití	18,139
Cauca	Almaguer	18,393
Bolívar	Tiquisio	18,714
Norte de Santander	Sardinata	19,425
Antioquia	Amalfi	20,302
Antioquia	Remedios	20,675
La Guajira	Dibulla	22,000
Arauca	Tame	23,557
Antioquia	Ituango	24,587
Nariño	El Charco	26,163
Bolívar	San Pablo	27,108
Antioquia	Cáceres	28,145
Norte de Santander	Tibú	30,059
Cauca	Timbío	30,222
Nariño	Barbacoas	30,256
Antioquia	Tarazá (1979)	30,633
Antioquia	Yarumal	31,816
Antioquia	Segovia	34,324
Magdalena	Aracataca	34,929
Cauca	Cajibío	36,411
Antioquia	Sonson	37,065
Cauca	Bolívar	43,461
Magdalena	Fundación	56,107
Antioquia	Caucasia	85,667

Fuente: Censo 2005 – DANE.

Para facilitar el estudio de los 35 municipios que comprenden el área de estudio, se realizó una segmentación en cinco grupos con siete municipios cada uno de ellos, agrupados de acuerdo al tamaño poblacional en el año 2005, tal como se muestra en la tabla 8. Esta agrupación, igualmente, nos permite analizar el comportamiento de las diferentes variables en grupos de similar tamaño poblacional, para analizar la presencia diferencial del Estado en los municipios de estudio.

A partir de la anterior clasificación, la variable dependiente (homicidios) se agrupó a partir de las causas de los homicidios, que se ajustan con el tamaño poblacional, para hacer comparable dicha información. Dado que la investigación analiza la presencia diferencial del Estado, se consideró más relevante hacerlo en torno a la población puesto que se logra



diferenciar mayores rezagos a partir del tamaño, tal como se encuentra en el análisis de la prestación de los servicios públicos como acueducto y energía eléctrica.



## CAPÍTULO III

### LA PRESENCIA DIFERENCIAL DEL ESTADO VISTA A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

En el desarrollo de la investigación, se encontró que, sin duda, la información más confiable que se puede utilizar en el país y que se ha recogido de forma estandarizada y rigurosa son los datos censales, por lo cual se consideró que a partir de estos se podría generar una radiografía del desarrollo de la presencia estatal e institucional en los municipios escogidos. Las dos categorías de los censos que se analizaron fueron el acceso a los servicios públicos domiciliarios y el acceso a la educación.

Mediante esta revisión se pretende analizar el fortalecimiento de la presencia estatal en el territorio, partiendo de que la mera existencia de la prestación de los servicios sociales implica no solo una mejora en la calidad de vida por el acceso, sino que transforma las relaciones sociales a partir de la presencia de instituciones que regulan las interacciones humanas y moldean el comportamiento individual y colectivo.

#### 1. Cobertura de Servicios Públicos

Se inicia, en primera instancia, con el acceso a servicios públicos, puesto que los datos censales permiten hacer un recorrido histórico de cómo el territorio es ocupado por instituciones que garantizan la mejora de la calidad de vida. Estos datos se captan a partir de la caracterización de vivienda. En el considerando de que tienen un gran impacto respecto a la normalización de relaciones entre moradores en la medida en que es la institucionalidad la que permite el acceso al servicio y no los agentes privados, que lo toman desordenadamente como es el caso de los accesos artesanales a las cuencas de los ríos.

### 1.1.Cobertura de energía eléctrica

**Tabla 9: Porcentaje de vivienda con acceso a energía eléctrica en los municipios objeto de estudio**

Grupo	Energía		Acueducto		Alcantarillado		Sin Servicios	
	1993	2005	1993	2005	1993	2005	1993	2005
1	35,7%	62,2%	27,6%	49,0%	18,5%	37,2%	40,5%	37,8%
2	43,2%	71,7%	40,1%	55,2%	23,3%	31,2%	30,4%	28,3%
3	44,6%	64,5%	41,9%	48,9%	28,4%	42,6%	37,7%	35,5%
4	52,2%	81,4%	46,9%	64,4%	27,6%	47,7%	30,3%	18,6%
5	66,0%	83,9%	51,5%	59,3%	29,7%	42,1%	21,5%	16,1%
<b>Media Nacional</b>	85,8%	93,6%	79,7%	83,4%	63,0%	73,1%	10,4%	5,2%

Fuente. Censos 1993 y 2005.

Como se puede observar en la tabla 9, la cobertura de la energía eléctrica tuvo un rápido crecimiento en los municipios de nuestro universo de estudio. En 10 años, se duplicó el acceso en todo el territorio. Igualmente, se puede evidenciar, que aquellos territorios con mayores aglomeraciones de población, tienen a progresar mucho más rápido que los que tienen menor población.

Se debe resaltar que una cobertura de 62%, en la prestación de este servicio para el grupo uno, constituido por los municipios de Briceño, Campamento, Mutatá, Vegachí (Antioquia); Magüi, Ricaurte (Nariño) y El Tarra (Norte de Santander) (Ver tabla 8) es baja, cuando 57% de los municipios colombianos tienen características poblacionales similares. Al compararse con la media nacional, todos los grupos se encuentran por debajo del promedio, con la diferencia que para el año 1993, la distancia entre los grupos 1, 2 y 3 era casi el doble y para el 2005 esta se redujo significativamente estando a casi 20 o 30 puntos. En los grupos 4 y 5, se ve más marcado el esfuerzo nacional puesto que para el 2005 la distancia es pequeña a unos escasos 10 puntos.

Colombia cuenta con un gran potencial generador de energía a partir de sus grandes hidroeléctricas, pero aún adolece de grandes deficiencias en la interconexión interna. A esto se suma el hecho de que un gran número de casos hay serias carencias de conexión a nivel rural, obligando a la población a acceder a motores diésel que generan un gran impacto ambiental.

## 1.2 Cobertura de acueducto.

El acceso al agua potable es uno de los retos más grandes que tiene Colombia ya que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteado por la ONU<sup>4</sup>, puesto que tiene un gran impacto respecto a la vida humana, es decir, sin electricidad la vida es más difícil pero no invivable, mientras que sin acceso a agua potable puede conducir a problemas serios de salud y hasta la muerte. Este proceso ha sido más lento. Es importante mencionar que el primer grupo tuvo el avance más importante entre los dos periodos censales de cerca del 50%. Los otros municipios que habían reportado avances significativos mejoraron, pero en una proporción más pequeña.

Al observar la Tabla 9, el grupo 1 presenta una baja cobertura de acuerdo con el grupo 3, Al igual que con la cobertura de energía los mayores avances son proporcionales con el numero poblacional, con excepción del grupo 2 que presentó un incremento significativo.

Respecto a la media nacional, igual que para el caso de la cobertura de energía, se encuentran por debajo de la media nacional los municipios de estudio con una distancia de casi 30 puntos en el grupo de menor cobertura (3) y de 20 puntos en el de mayor cobertura (4).

## 1.3 Cobertura de Alcantarillado

Este comprende el servicio público esencial con mayor retraso tanto en los municipios de estudio como en el promedio nacional, aunque se han generado avances este aún tiene un rezago importante. Los municipios de nuestro universo de estudio no alcanzan una cobertura del 50%, todos están por debajo. Los municipios del grupo 2 son los que tienen la menor cobertura (31.1%), seguidos del grupo 1 (37.1%). Tiene enorme impacto ambiental y sobre la salud pública ya que el manejo indebido de aguas hervidas termina contaminando las fuentes de agua potable. Más aun, puesto que gran parte de estas redes de alcantarillado carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales lo que genera que, aunque exista una limitada recolección, su disposición final sean las fuentes hídricas.

---

<sup>4</sup> Objetivo 6 - Agua Potable y Saneamiento Básico.

Por otro lado, una problemática inherente a estas redes es la captación de agua lluvia, que en condiciones meteorológicas como las que presenta Colombia, que constantemente se enfrenta a inviernos con lluvias torrenciales, terminan generando conflictos y desplazamientos alrededor de inundaciones.

Estas cifras son aún más agravantes si se toma en cuenta la diferencia entre área rural y urbana, aunque en los censos no se hace esta discrepancia, con el último Censo Nacional Agropecuario del año 2014, se evidenció que solo 6% de la vivienda rural cuenta con conexión de alcantarillado.

Al contrarrestar las cifras respecto al promedio nacional encontramos que, aunque el avance ha sido importante en los 10 años entre censos, la distancia entre los municipios de estudio de la media nacional se mantiene cerca de 30 punto. Esto es una gran dificultad puesto que, aunque se mejora la cobertura se mantiene el rezago respecto al resto del país, manteniendo la dificultad de presencia estatal consolidada en el territorio por igual. Viviendas sin Conexión a Servicio Público

En la tabla 9, se puede observar la magnitud de avance que se ha dado en Colombia en la conexión de la vivienda a los servicios públicos. Hace diez años, los municipios más pequeños tenían un alto porcentaje de la población sin conexión alguna. Al cruzar las tres variables (energía eléctrica, acueducto y alcantarillado), el mayor avance se ha dado en energía, seguido por la conexión al servicio de acueducto. Lo cual hace que muchos de estos municipios comiencen a integrarse a la red de desarrollo del país, aunque se evidencian rezagos en los más municipios más pequeños.

Estas dificultades en la mayoría de los casos resultan de las limitaciones presupuestales, debido a que las obras necesarias como conectores de recolección o bocatomas de ríos requieren altos costos. Igualmente, considero que al observarse esta disparidad en grupos de municipios de acuerdo al tamaño poblacional responde a que con la limitación se priorice obras sobre zonas con mayor población y se dejen rezagado los pequeños municipios. Entre 1993 y 2005 en la media nacional, el avance fue del 50% de las viviendas sin conexión a servicios, pero al territorializar estos datos sobre los municipios del área de estudio, fue

mucho más lento, en la mayoría de los casos la reducción fue de tres puntos porcentuales, cabe resaltar el grupo cuatro, que presentó una reducción de cerca de 12 puntos.

Al analizar el conjunto de datos de la cobertura en servicios públicos domiciliarios, se encuentra que todos fueron positivos, respecto al periodo entre los dos censos, pero se evidencia que su avance fue mucho más lento que el del territorio nacional en general; los municipios afectados por el conflicto y con presencia de economías ilegales tienen un mayor rezago.

En múltiples textos el profesor Fernán González ha evidenciado este proceso que cataloga como “La presencia diferenciada del Estado en el territorio” (Gonzalez & Otero Bahamon, 2006), en los cuales las dificultades del conflicto han generado que su consolidación sea más lenta respecto a otras áreas que no presentan las dificultades de combates o ser áreas apartadas de las grandes urbes. En el punto tres de este capítulo, evidenciaremos un poco más este fenómeno, al contrarrestar la información con las tasas de homicidios.

## 2. Servicio de educación

La educación es considerada como una de las variables más relevantes en la sociedad moderna, ya que muestra la madurez en que una institución organizada (El Estado), puede garantizarles a sus ciudadanos la preparación necesaria tanto para autogobernarse como para desarrollarse económicamente. Este fue uno de los desafíos más relevantes para Colombia en el último siglo y era aumentar significativamente el acceso, tratando de educar al mayor número de su población.

## 2.1 Analfabetismo

**Tabla 10: Analfabetismo urbano-rural en los municipios objeto de estudio.**

Grupo	Área Urbano		Área Rural	
	1993	2005	1993	2005
1	15,1%	17,4%	28,2%	32,8%
2	11,9%	13,8%	25,7%	22,1%
3	13,3%	13,0%	28,1%	29,3%
4	15,7%	15,7%	27,8%	24,0%
5	10,0%	9,6%	25,2%	22,0%
Media Nacional	8,5%	8,5%	23,4%	21,7%

Fuente. Censo 1993 y 2005.

La ONU declara un territorio libre de analfabetismo cuando se presentan cifras inferiores al 4%, Colombia se encuentra cerca de alcanzar esta meta. En la tabla 10, observamos cómo evolucionó la superación del analfabetismo en el periodo 1993-2005, comparando las áreas urbanas con las rurales. Como resulta evidente, las cifras de analfabetismo se han ido reduciendo en la medida que aumenta la presencia de la institución escolar en la gran mayoría de los territorios.

No obstante, se observa que aún persiste una brecha entre las cifras de las zonas urbanas y rurales, destacándose una brecha del 50% entre una y otra zona. Con lo cual podemos concluir que las aglomeraciones permiten una mayor cobertura y un mejor acceso que lo que sucede con el área dispersa o rural que aun el acceso a instituciones es limitado.

Los datos de la media nacional presentan un avance en la reducción del analfabetismo. En efecto, al revisar las cifras municipales, encontramos que, en el caso urbano, 3 de los 5 grupos presentaron un aumento respecto de un censo y otro. Tratando de buscar una explicación, revisando la evolución poblacional, o las cifras de desplazamiento, no se encontró una relación que explicase este fenómeno. Pero, se reafirma, lo que se presenta en los servicios públicos domiciliarios, ya que, aunque avanza el país, entorno a la declaratoria de un territorio libre de analfabetismo, al bajar al territorio, se encuentra que son las grandes ciudades las que logran 100% de alfabetismo, pero los territorios apartados, que representan

un porcentaje menor respecto a la población global, continúan con rezagos que afectan su desarrollo y, como veremos más adelante, sus problemas de violencia.

## 2.2 Asistencia escolar

**Tabla 11: Inasistencia escolar en municipios objeto de estudio**

Grupo	Área Urbano		Área Rural	
	1993	2005	1993	2005
1	15,1%	17,4%	28,2%	32,8%
2	11,9%	13,8%	25,7%	22,1%
3	13,3%	13,0%	28,1%	29,3%
4	15,7%	15,7%	27,8%	24,0%
5	10,0%	9,6%	25,2%	22,0%
Media Nacional	8,5%	8,5%	23,4%	21,7%

Fuente. Censos 1993 y 2005.

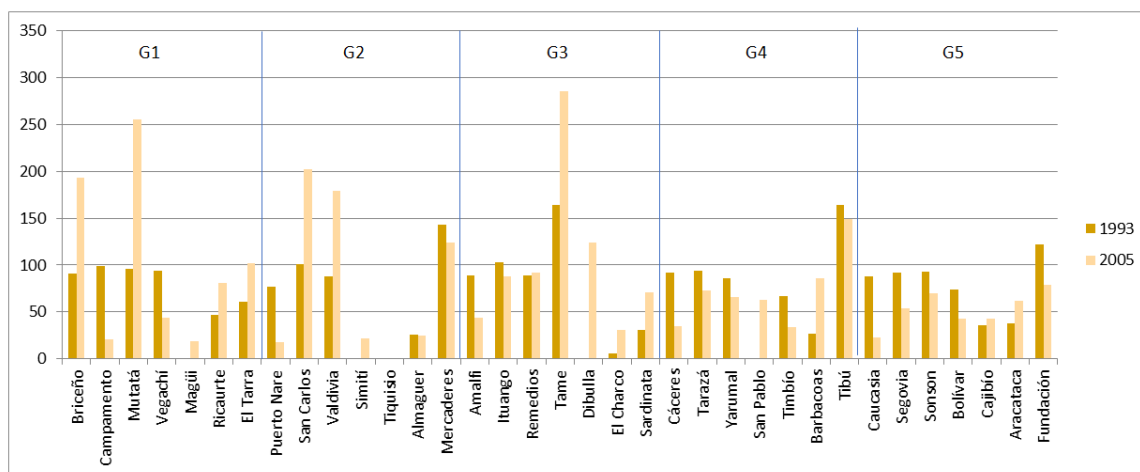
Con el analfabetismo podemos comprender cómo la lucha para masificar una política permite resultados positivos y optimistas, pero al abordar desde la asistencia escolar, se evidencia que muchas de las inversiones en más infraestructura, a veces no permiten alcanzar su objetivo que consiste en lograr que los niños y jóvenes asistan a la escuela. Aunque es notable el avance en la serie de tiempo, aún hace falta lograr que una educación universal en Colombia, tan solo en los municipios del área de estudio casi la mitad de los estudiantes no asisten al aula de clase (véase tabla 11).

La media nacional nos presenta un avance de cuatro puntos, pero, en esta variable, a diferencia de las anteriores, se presenta un mayor avance en los municipios objeto de estudio que en la media nacional, donde en los grupos 1, 2, 3 y 4 presentan una mejora de casi siete puntos.

### 3.Cobertura de servicios públicos comparada con la tasa de homicidios

A partir de los datos presentados, podemos abordar nuestra hipótesis de trabajo, ya que nos permite identificar el alcance del Estado para permear el territorio y garantizar unos servicios públicos que mejoren el bienestar de los habitantes. Pero antes de ello, en necesario hacer un breve análisis de nuestra variable dependiente, los homicidios.

**Figura 7. Tasa de homicidios – Municipios de estudio 1993 y 2005**

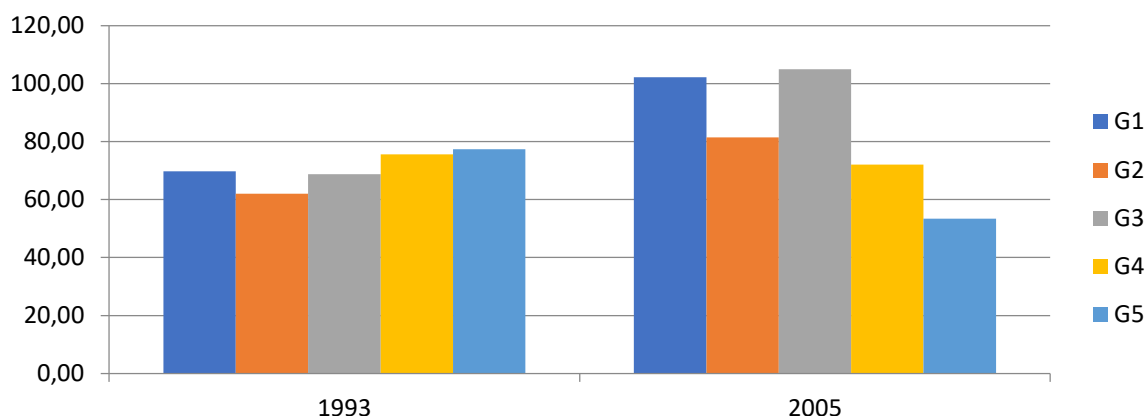


En la figura 7, se observan las tasas de homicidios en los dos años en que se desarrollaron los censos. Para empezar, es pertinente mencionar que algunos municipios no tienen datos, porque la fundación fue posterior al año 1993, como son los casos de Tiquiso (1994) y Dibulla (1995).

Como mencionamos en la determinación del Área de estudio, estos municipios fueron escogidos por su afectación del Conflicto Armado, lo cual hace que la mayoría de los municipios tenga tasas de homicidios relativamente altas, que superan la media nacional tanto en 1993 (66,6) y en el 2005 (41,5). No obstante, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos reporta 0 homicidios en los años censales para los municipios de Magüi, San Pablo y Simití. En 9 de los 35 municipios de estudio, se observa que hubo un aumento en la tasa de homicidios respecto del 1993 y el 2005, en la gran mayoría, los 26 restantes se observa una disminución.



**Figura 8. Tasa de Homicidios – Grupos de Estudio 1993 y 2005**



Fuente: Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos

Al agrupar los municipios de acuerdo con nuestro 5 grupo, que fueron organizados de acuerdo con el tamaño poblacional, se observa que en los grupos 4 y 5 hay una disminución importante en la tasa de homicidios entre los dos años estudiados que, junto con lo desarrollado en cuanto a los servicios públicos domiciliarios y el acceso a la educación. Esto permite suponer, una relación importante entre presencia estatal vista a través de la ampliación de cobertura de los servicios públicos y la educación con la reducción de los homicidios.

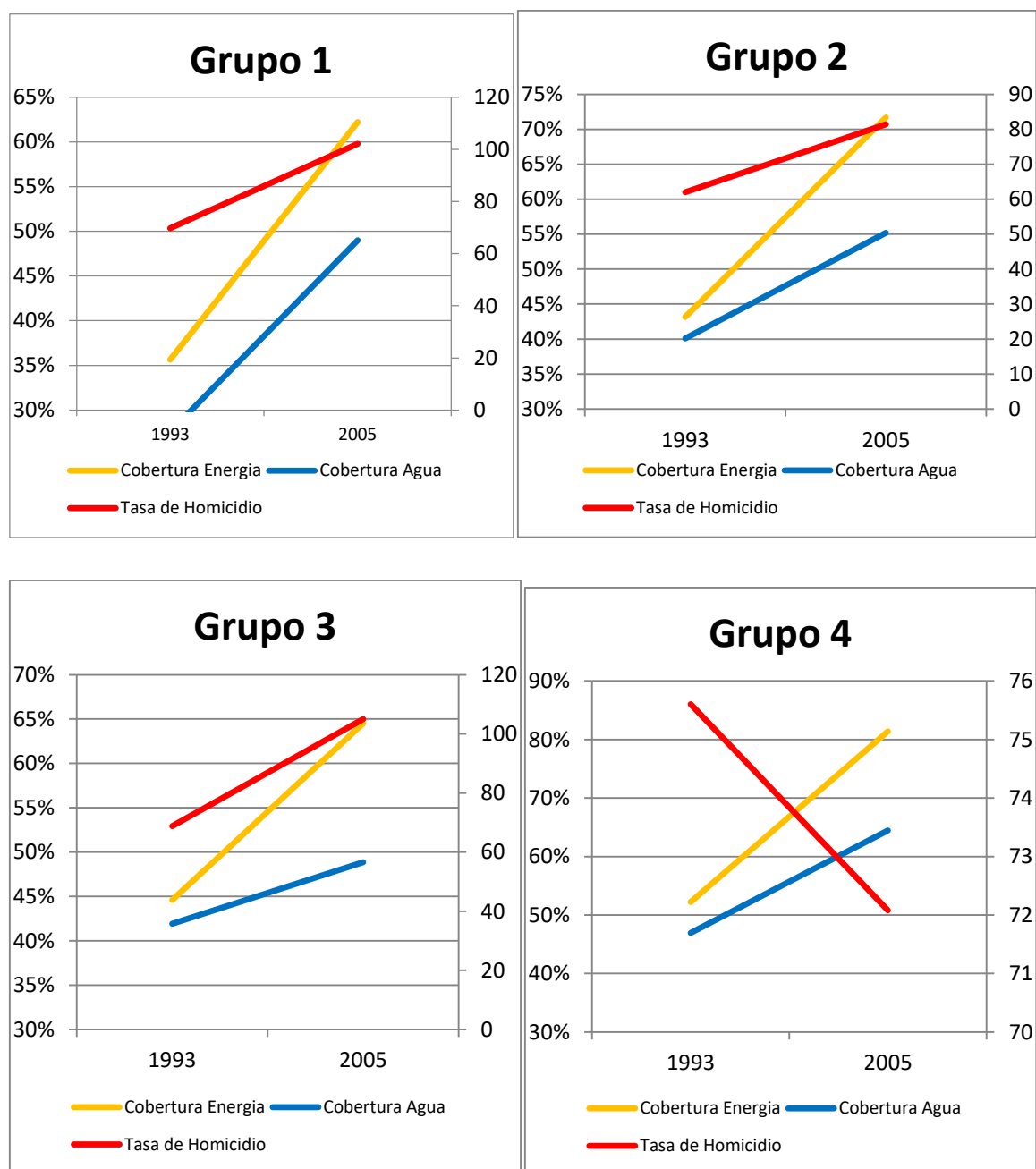
Por otro lado, en los primeros 3 grupos, se observa un aumento entre 1993 y 2005, más pronunciado en los grupos 1 y 3. Es importante recordar, que el 2005 fue un año en el que hubo una intensificación de los combates entre las organizaciones armadas y el Ejército, precisamente algunos de estos municipios, como Tame y Briceño se encontraban en zonas de disputa tanto entre los grupos armados ilegales y entre el Estado y los grupos ilegales.

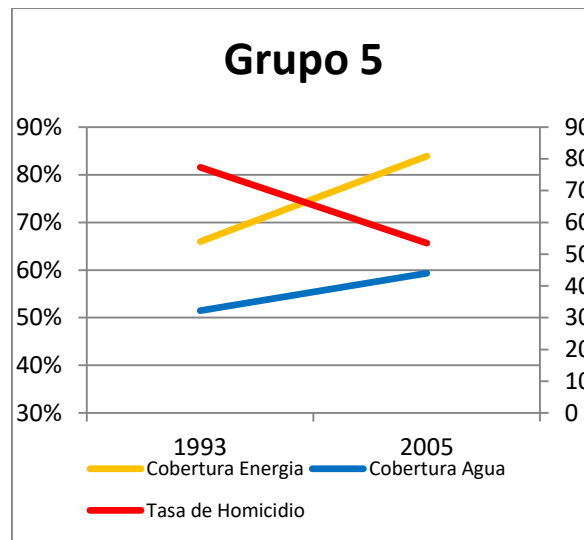
Los servicios públicos domiciliarios y la cobertura en educación son dos de las principales instituciones sociales que presta el Estado a la sociedad. El crecimiento y expansión que observamos, a partir de la información censal, da una radiografía de cómo se ha desarrollado este proceso y con qué ritmo de avance. Al compararlos con las cifras de homicidios presentes en esos dos momentos, nos permite comprender el impacto que tiene el

fortalecimiento de las instituciones sociales sobre el riesgo de homicidios, como una expresión de la violencia.

### 3.1 Servicios públicos domiciliarios y tasa de homicidios

**Figura 9. Gráficas comparativas grupos de estudio y tasas de homicidios 1993-2005**





Fuente: Elaborados por el autor a partir de las cifras censales 1993 - 2005 y las tasas de homicidios aportadas por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En la Figura 9, observamos la relación temporal en los censos 1993 y 2005 comparada con la tasa de homicidios presente para esos años. En los primeros tres grupos, se mantiene una relación similar, en la cual, aunque aumenta la presencia estatal, por medios de una mayor cobertura en los servicios de agua y energía, los homicidios aumentan.

En los grupos cuatro y cinco, cuya cobertura alcanza para el 2005 un porcentaje mayor (energía 75% y Agua 60%), hay una reducción significativa en la tasa de homicidios, por lo cual, podríamos empezar a intuir, que donde la cobertura abarca gran parte del territorio, tendería a reducir la conflictividad y por ende el impulso a cometer homicidios.

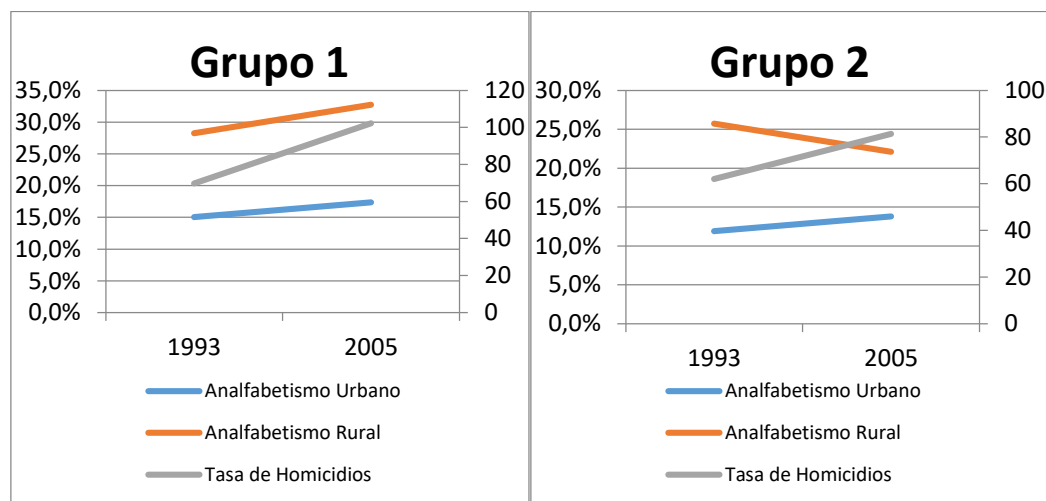
El aumento de la presencia de estas instituciones genera un marco regulatorio que permite mejorar las relaciones entre los ciudadanos, limitando el surgimiento de conflictos a los cuales se deben afrontar cuando carecen de instituciones. En los grupos cuatro y cinco, observamos que para el 2005 se alcanzan cifras promedio por encima del 70% en cobertura lo que sugiere que gran parte de su población municipal recurre al Estado para la satisfacción de sus necesidades. En los otros 3 grupos se encuentra en 60% para energía y 50% en acueducto, esto significa que casi 50% de la población debe recurrir a la informalidad o a relaciones simétricas entre conciudadanos, lo cual consideramos que es una de las razones

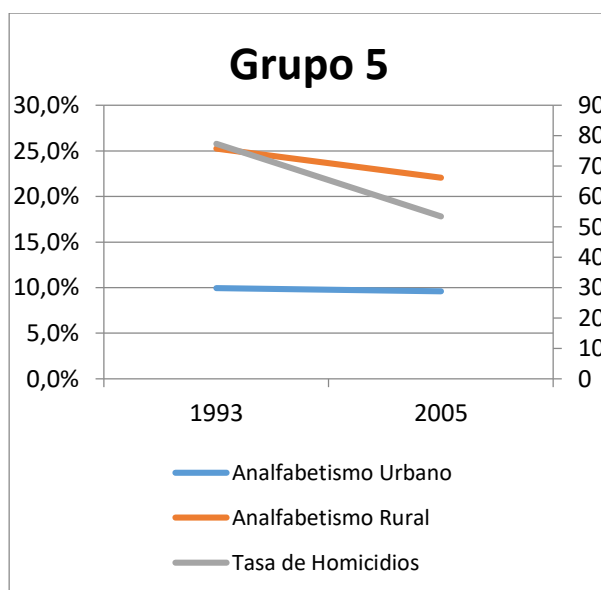
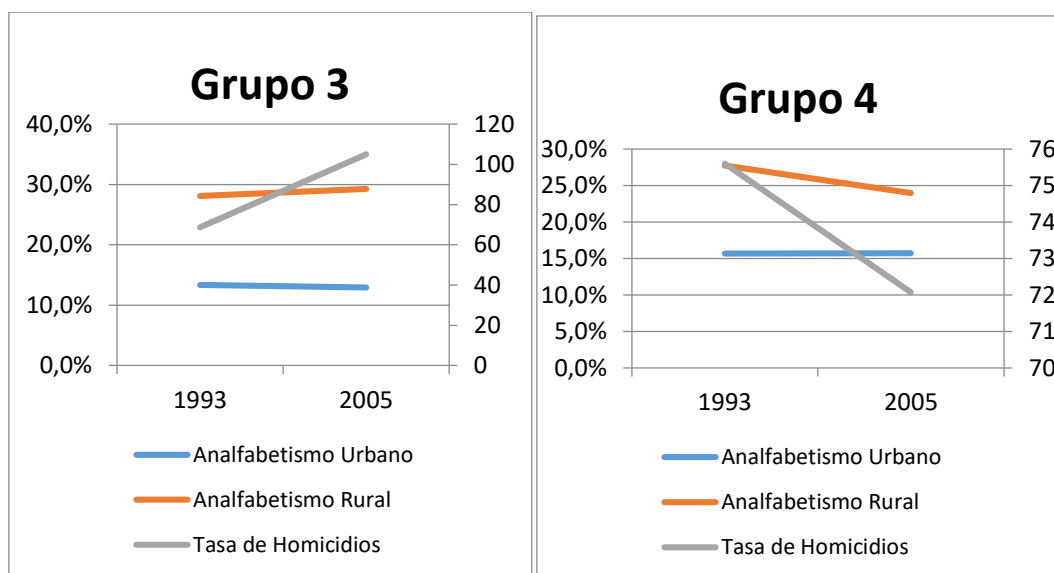
que aumentan las tasas de homicidios puesto que esta relación no tiene ninguna reglamentación o tercero que sirva de garante para limitar el surgimiento de conflictos. Sin embargo, las anteriores relaciones parecen estar afectadas por la demografía, dado que nuestro análisis se ha centrado en municipios con una población inferior a los 100.000 habitantes. Sabemos que, en las grandes concentraciones urbanas como Bogotá, Medellín o Cali las tasas de homicidios han sido altas, pero con variaciones significativas en algunos periodos. Lo anterior sugiere un análisis microlocalizado, a nivel de comunas y barrios, para analizar la relación que se encuentra en los municipios pequeños de nuestra muestra de estudio.

De esta manera, la presencia instrumental del Estado, no solo se limita a garantizar el acceso a servicio, sino que asumen un tipo de relación simbólica que garantiza la integración social entre los individuos; es decir, la mera existencia del Estado hace que los ciudadanos se desprendan de su mera existencia individual y se cobijen por un ente que los agrupa e influye sobre su actuación violenta. Ya que la misma existencia hace que las instituciones nos agreguen y vinculen a una unidad de relaciones que se adoptan para la convivencia.

### 3.2 Servicios educativos y tasa de homicidios

**Figura 10. Gráficas comparativas grupos de estudio y tasa de homicidios 1993-2005**





Fuente: Elaborados por el autor a partir de las cifras censales 1993 - 2005 y las tasas de homicidios aportadas por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En la Figura 10, observamos la comparación entre la tasa de analfabetismo y la tasa de homicidio en los grupos de municipios objeto de estudio, la primera entendiéndose que se reduce en la medida que la presencia estatal garantiza la prestación del servicio de educación o garantiza su desarrollo por lo cual la población aumenta su escolaridad. Observamos, al igual que con los servicios públicos domiciliarios, un comportamiento similar en los grupos

1, 2 y 3, puesto que, aunque se aumenta la presencia generado reducciones importantes de analfabetismo, la tasa de homicidios se mantiene igual.

Por otro lado, en los grupos 4 y 5, se genera una reducción en los homicidios, al aumentar el analfabetismo. No obstante, se presenta una situación singular ya que el grupo 3 presenta una menor tasa de analfabetismo urbana, pero su tasa de homicidios se incrementa, mientras que el grupo 4, a la vez que reduce la tasa de analfabetismo rural, decrece la tasa de homicidios. En el grupo 3, a la vez que la tasa de analfabetismo rural se incrementa levemente, también crecen los homicidios.

Para finalizar esta descripción cuantitativa a partir de los censos, se observa tanto en los indicadores de servicios públicos como de educación que, aunque el proceso de inserción de estos municipios en el desarrollo nacional ha avanzado, aún existen cifras carencias y rezagos, algunas veces protuberantes, como sucede en la cobertura de alcantarillado o la diferencia en el analfabetismo rural.

Lo que se puede concluir, sin ninguna duda, es que la mejoría responde a una mayor presencia del Estado al llegar a estas zonas y dotarlas de instituciones que permitan un mejor desarrollo para su comunidad. Igualmente, intuimos, en relación con nuestra hipótesis, que la presencia de las instituciones (en este caso, la presencia del Estado vista a través de la prestación de los servicios públicos y la construcción de equipamientos colectivos) y su fortalecimiento se relaciona con la reducción del conflicto, visto en nuestro estudio a partir del comportamiento de los homicidios.

Pero cabe resaltar que, igualmente, se valida el planteamiento de Fernán González (2014), en el sentido de la presencia diferencial del Estado en el territorio y más aún cuando se trata de zonas afectadas por el conflicto armado, como es el caso de nuestra área de estudio.

Con la presentación de las anteriores cifras, que permiten ver un panorama histórico, ahora procederemos a desarrollar el Índice Sintético de Institucionalidad el cual nos permitirá comprender la relación entre la debilidad institucional y la violencia.

## CAPÍTULO IV

### ÍNDICE SINTÉTICO DE INSTITUCIONALIDAD Y VIOLENCIA

#### 1.El Índice sintético de institucionalidad

La historia colombiana ha estado marcada por ciclos recurrentes de violencia. En nuestra corta historia de 200 años de independencia, se han producido cerca de nueve guerras civiles y casi catorce guerras territoriales. Aun hoy nos encontramos con un conflicto armado cuyo origen se remonta a 60 años atrás y aunque desde el año 2014 se ha producido un desescalamiento, producto del proceso de paz con la desmovilizada guerrilla de la Farc, aún estamos muy lejos de cerrar este capítulo de nuestra historia.

Bajo nuestra hipótesis de investigación, solo con la presencia de las instituciones colombianas podríamos reducir significativamente el surgimiento de nuevos conflictos, ya que el Estado logra mitigar las disputas y establecer límites al “comportamiento conflictivo” del ser humano.

En el capítulo anterior, hemos tratado de demostrar que el desarrollo institucional colombiano ha sido un proceso lento y diferenciado en el territorio. En un primer momento, con los resultados de la investigación del DNP del sistema de ciudades, evidenciamos que los mayores desarrollos se han concentrado en los principales polos urbanos y luego en las conexiones vectoriales de los mismos.

Igualmente, con el análisis de nuestra área de estudio y con los datos de los censos de 1993 y 2005 hemos encontrado que, aunque se han producido avances significativos, la mayoría de los casos se encuentran por debajo del promedio nacional, adicionalmente, que las áreas más pobladas tienden a presentar mayores avances que las menos pobladas.

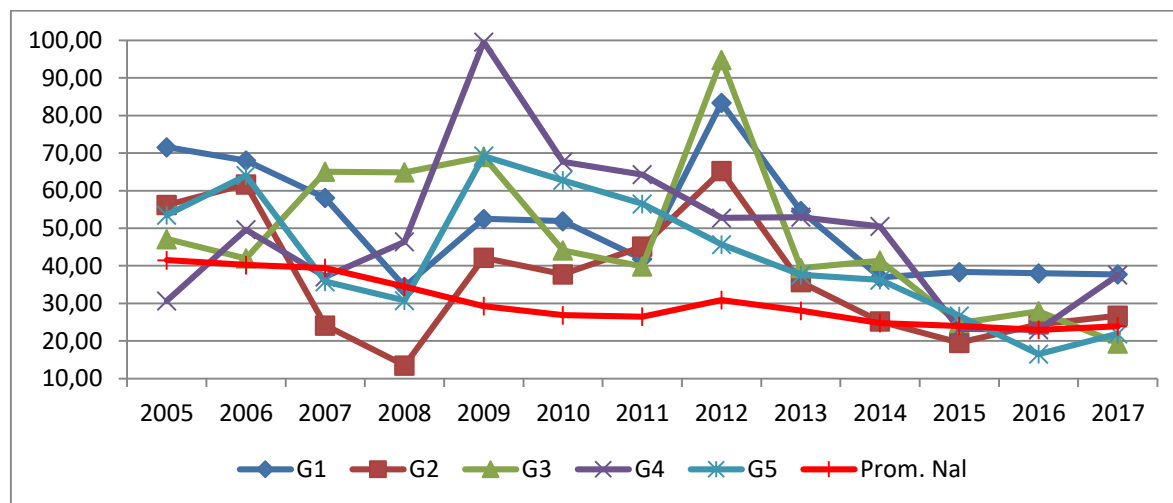
Para continuar con esta investigación, recurrimos a la construcción de un indicador sintético, compuesto por 15 variables, que nos permite con mayor detalle explorar esta relación de desarrollo y fortalecimiento institucional, frente a cifras de violencia, particularmente

homicidios. Cabe resaltar que se recurre a los censos para la construcción de contexto puesto que la información estadística hasta el nivel municipal en Colombia era muy precaria, solo a partir del 2005 encontramos cifras estandarizadas lo que permite a partir de este momento hacer un análisis año a año.

## 2. Comparativo tasa de homicidios nacional y grupos de estudio

Para iniciar, es pertinente hacer un breve análisis del comportamiento general de los homicidios en el área de estudio respecto del promedio nacional. En la figura 11 está representada la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de los 5 grupos de estudio y el promedio nacional en el periodo 2005-2017. En primer lugar, se encuentra que la tasa de homicidios nacional decrece de forma lineal desde el 2005; en 13 años se redujo en cerca de 50% pasando de 41,5, en el 2005 a 23,9 en el 2017. Sin embargo, es significativo un aumento en el 2012, que coincide con las etapas iniciales del proceso de paz con la guerrilla de las Farc. Posteriormente, la reducción es de 2 puntos porcentuales anuales.

**Figura 11. Tasas de homicidios - Grupos de estudio y promedio nacional**



Fuente: Medicina Legal – *Revista Forensis* 2005-2017 y Estudio del 2017 de la Fundación Ideas para la Paz.

La tasa de homicidios presenta comportamientos diferentes en los 5 grupos antes de 2009; por ejemplo, mientras en el 2006 se incrementa en el Grupo 1, en el 3 se reduce levemente. Entre el 2009 y el 2012, la tasa presenta comportamientos similares en los 5 grupos, con



picos de diferente intensidad, pero casi en los mismos años, como se puede ver en el 2009 y en el 2012. Es importante mencionar que desde el 2013, se da una tendencia de reducción, que puede ser resultado del desescalamiento del conflicto con el cese al fuego temporal y luego definitivo de la guerrilla de las Farc.

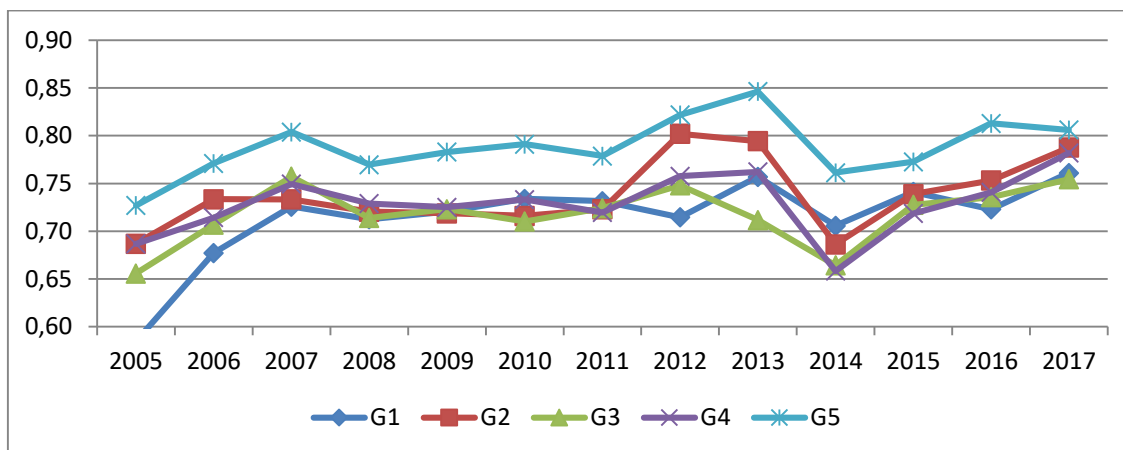
Al igual que el promedio nacional, la tasa de homicidios en los municipios objeto de estudio presenta un pico de aumento en el 2012, que es de mayor intensidad en los tres primeros grupos, mientras que en los grupos 4 y 5 el mayor incremento de la tasa fue en el 2009.

### 3. Análisis Índice sintético de institucionalidad

En el Capítulo 2, se presentó la metodología con la cual se construyó este indicador, al no haber encontrado un indicador estandarizado con el cual se pudiera medir la institucionalidad, se optó por elaborar uno con variables consideradas relevantes para medir la institucionalidad en nuestro caso de estudio. Para no limitarnos solo a la presencia del Estado, se incluyeron variables de buen gobierno como son el fortalecimiento de las finanzas municipales y las cifras de funcionarios y servidores tanto investigados como sancionados.

A partir de lo anterior, y luego de un proceso de recopilación y normalización, se elaboró el índice que se presenta a continuación. Para facilitar la presentación de los resultados, como se ha hecho antes, los 35 municipios se organizan en los cinco grupos, tal como se puede observar en la tabla 10.

**Figura 12. Indicador sintético de institucional 2005-2017 – Grupos de Estudio**



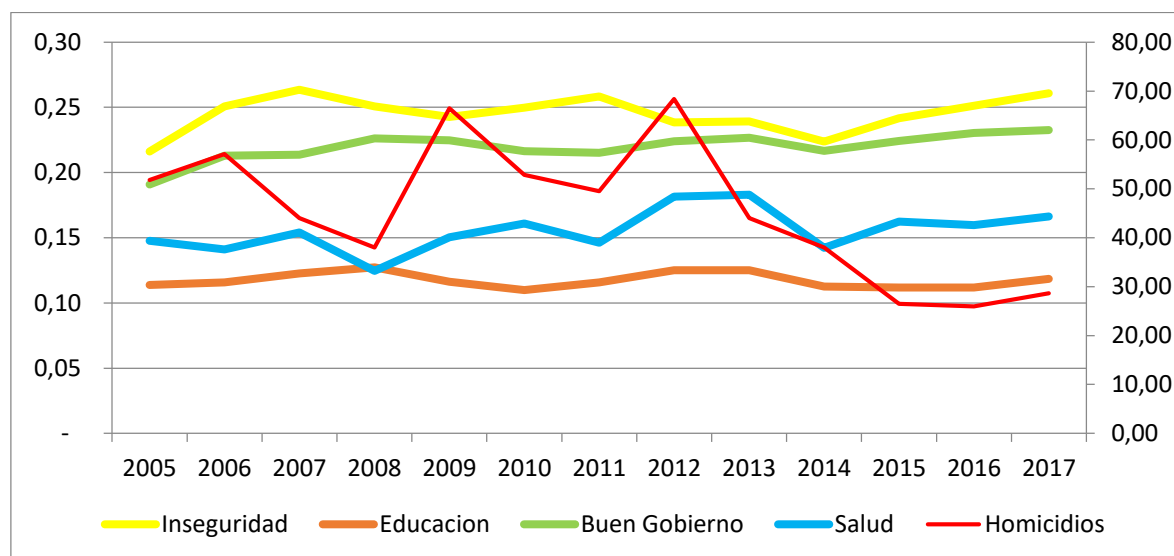
Fuente: Indicador Sintético de Institucionalidad. Elaboración propia, las fuentes pueden consultarse en la tabla 3.

En la figura 12, se observa el desarrollo del índice en el tiempo de estudio. En primer lugar, se encuentra que el grupo que presenta mayor puntaje es el 5. El comportamiento del grupo 4, es bastante lineal, pero se debe resaltar que es el grupo en que más aumenta el indicador en los últimos 4 años.

Los otros 3 grupos presentan comportamientos similares, sin alteraciones importantes en la serie de tiempo.

Para complementar el desarrollo del Índice Sintético de Institucionalidad, se consideró pertinente analizar y contratar el comportamiento de las variables que componen el índice; Inseguridad, Educación, Buen Gobierno y Salud, respecto a nuestra variable dependiente de violencia (homicidios).

**Figura 13 Categorías Índice Sintético de Institucionalidad y Tasa de Homicidios.**



Fuente: Tasa de Homicidios: Medicina Legal – Revista Forensis 2005-2017

Indicador Sintético de Institucionalidad: Elaboración propia del autor, las fuentes pueden consultarse en la tabla 2.

Para comprender la correlación que existe entre el índice propuesto y la violencia, se utilizó un comparativo con la media aritmética de las categorías que componen el Índice y las tasas de homicidios.

En primer lugar, encontramos que tanto el buen gobierno como los efectos de inseguridad son las dos categorías que tienen mayor comportamiento positivo sobre el Índice, ambos han representado grandes esfuerzos por parte del Gobierno Nacional, principalmente la lucha con la inseguridad que ha representado el fortalecimiento del aparato armado ya sea las Fuerzas Militares como la Policía Nacional. Por su parte, el buen gobierno cada día pretende ser más efectivo vigilando las finanzas públicas y la función pública. La educación presenta mayores rezagos ya que, como observamos en el capítulo anterior, estos municipios en su gran mayoría son zonas pequeñas y apartadas que tienen grandes deficiencias en infraestructura.

La media de homicidios tiene tres picos en los que se presentan incrementos significativos en el 2006, 2009 y 2012; a partir del 2013 se presenta una reducción que se podría atribuir a los diálogos de paz que se desarrollaron entre el Gobierno y las Farc.

Al contrarrestar con la evolución de los homicidios y las variables del Índice, observamos cómo el comportamiento positivo de las 4 categorías durante el 2008 representa la primer

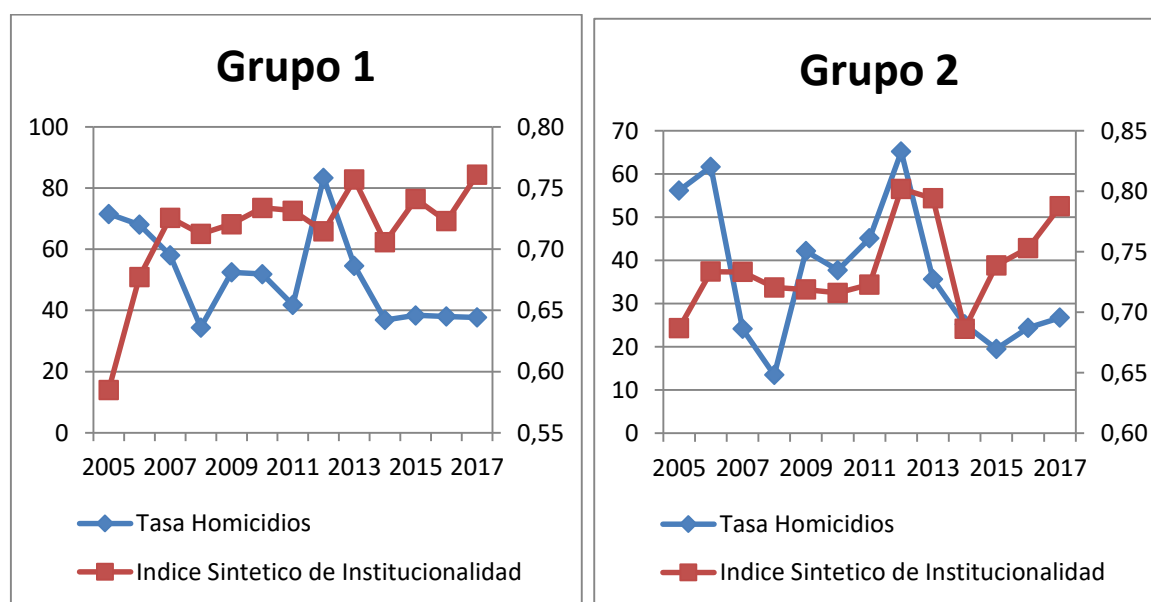
gran reducción de homicidios. Igualmente, se puede relacionar que el aumento durante el 2009 se ve un deterioro importante tanto en seguridad como en buen gobierno lo cual reduce la estabilidad institucional llevando a un aumento importante, esto se repite nuevamente en el 2012.

Posterior al desescalamiento, se ve un aumento sostenido en las instituciones lo que va de la mano con la reducción de los homicidios.

#### 4. Análisis tasas de homicidios e Índice sintéticos de institucionalidad – Grupos de estudio

A continuación, observamos la comparación entre el Índice sintético y la tasa de homicidios en los 5 grupos de estudio, para poder validar nuestra hipótesis de investigación y poder contribuir al estudio de la relación entre institucionalidad y violencia.

**Figura 14. Tasa de homicidios e Índice Sintético de Institucionalidad – Grupos 1 y 2**



Fuente: Tasa de Homicidios: Medicina Legal – *Revista Forensis* 2005-2017. Indicador Sintético de Institucionalidad, elaboración propi. Las fuentes pueden consultarse en la tabla 3.

Estos 2 grupos están compuestos por los municipios más pequeños del área de estudio. En la figura 14, se observa que el Índice sintético tiene un comportamiento lineal, pero con un leve

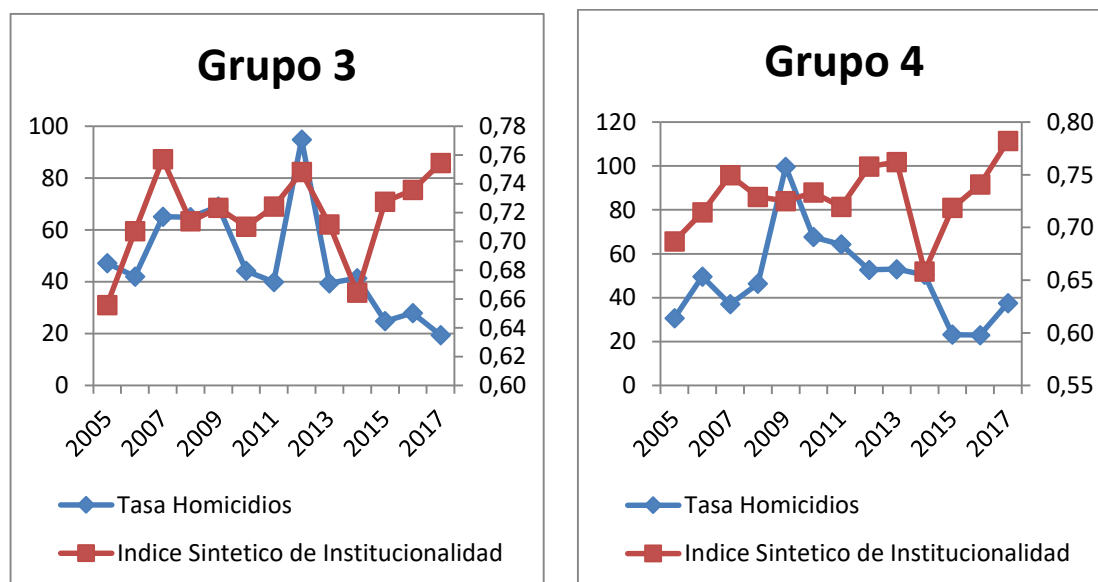
aumento en el periodo 2005-2017. En el grupo 1, se observa que el incremento del Índice de institucionalidad se acompaña de una reducción de la tasa de homicidios. Llama poderosamente la atención que, en el 2012, cuando el Índice de institucionalidad disminuye levemente, la tasa de homicidios crece. En el Indicador se observa que la reducción está vinculada con la categoría de buen gobierno, ya que hubo proliferación de investigaciones y sanciones a funcionarios del gobierno municipal.

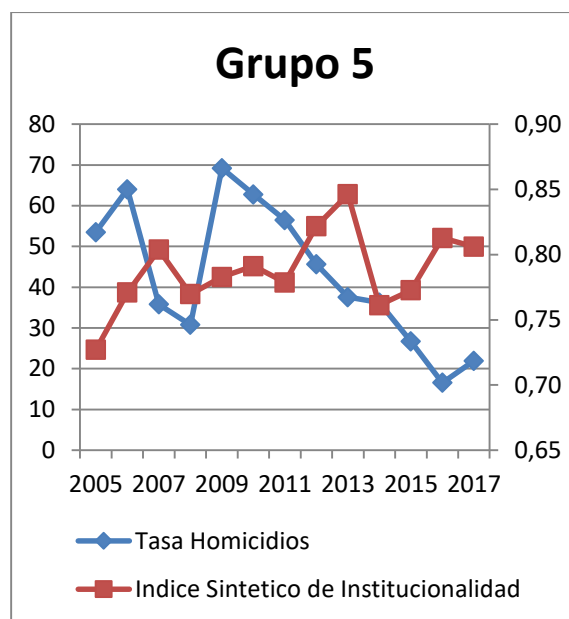
Posteriormente, se mantiene el crecimiento del indicador y hay una reducción significativa de los homicidios, que también puede estar asociada con el desescalamiento del conflicto armado.

En cuanto al Grupo 2, no se presente una relación directa entre el Índice de institucionalidad y la tasa de homicidios puesto que, en varios momentos de la serie histórica, aunque aumenta el indicador sintético, igualmente crecen los homicidios.

Al analizar los anteriores resultados con la información censal, se puede decir que la presencia estatal ha mejorado en los municipios del grupo 2, pero no tan significativamente como para influir en la disminución de la violencia en estas municipalidades.

**Figura 15. Tasa de homicidios e Indicador Sintético de Institucionalidad – Grupos 3, 4 y 5**





Fuente: Tasa de Homicidios: Medicina Legal – Revista *Forensis* 2005-2017. Indicador Sintético de Institucionalidad: Elaboración del autor, las fuentes pueden consultarse en la tabla 3.

En estos tres grupos, se encuentra una relación más directa con nuestra hipótesis de trabajo, particularmente en el periodo 2014- 2017, que corresponde al inicio del desescalamiento del conflicto armado colombiano. En los tres grupos, a partir de dicha fecha, se observa que el aumento constante de la institucionalidad se relaciona de forma directa con la reducción de la violencia vista a través de los homicidios.

En los tres grupos, igualmente, se evidencia que desde el 2009 el indicador sintético de institucionalidad tiene un comportamiento positivo al aumentar constantemente, a la vez los homicidios decrecen. Como se mencionó antes, esto se consolida aún más con el desescalamiento del conflicto a partir del 2014.

Al comparar los resultados en todos los grupos de estudio, se encuentra que en 4 de los 5, se puede detectar una relación positiva entre el aumento de la institucionalidad y la reducción de la violencia, vista a través del comportamiento de la tasa de homicidios. Esto se intensifica, tal como se evidencie en los grupos 3, 4 y 5, posterior del proceso de paz. En efecto, se reducen los picos de homicidios y se estabiliza un comportamiento relativo con la institucionalidad, cuando ésta aumenta se reducen los homicidios

Al encontrar esta diferenciación en municipios que presentan características relativamente similares, se podría estar validando los planteamientos de Fernán González (2014). En efecto, se encuentra un desarrollo diferencial, es decir, el comportamiento el indicador de institucionalidad y la tasa de homicidios difieren en cada caso.

Se evidencia -tal como se corroboró con los resultados censales- que entre mayor es el municipio, tiende a mejorar más rápidamente que los de menor tamaño. En consecuencia, es en los grupos de mayor población en los que se encuentra la relación entre aumento de la institucionalidad y la reducción de los homicidios.

## 5. Análisis número de personas desplazadas e Indicador sintéticos de institucionalidad – Grupos de estudio

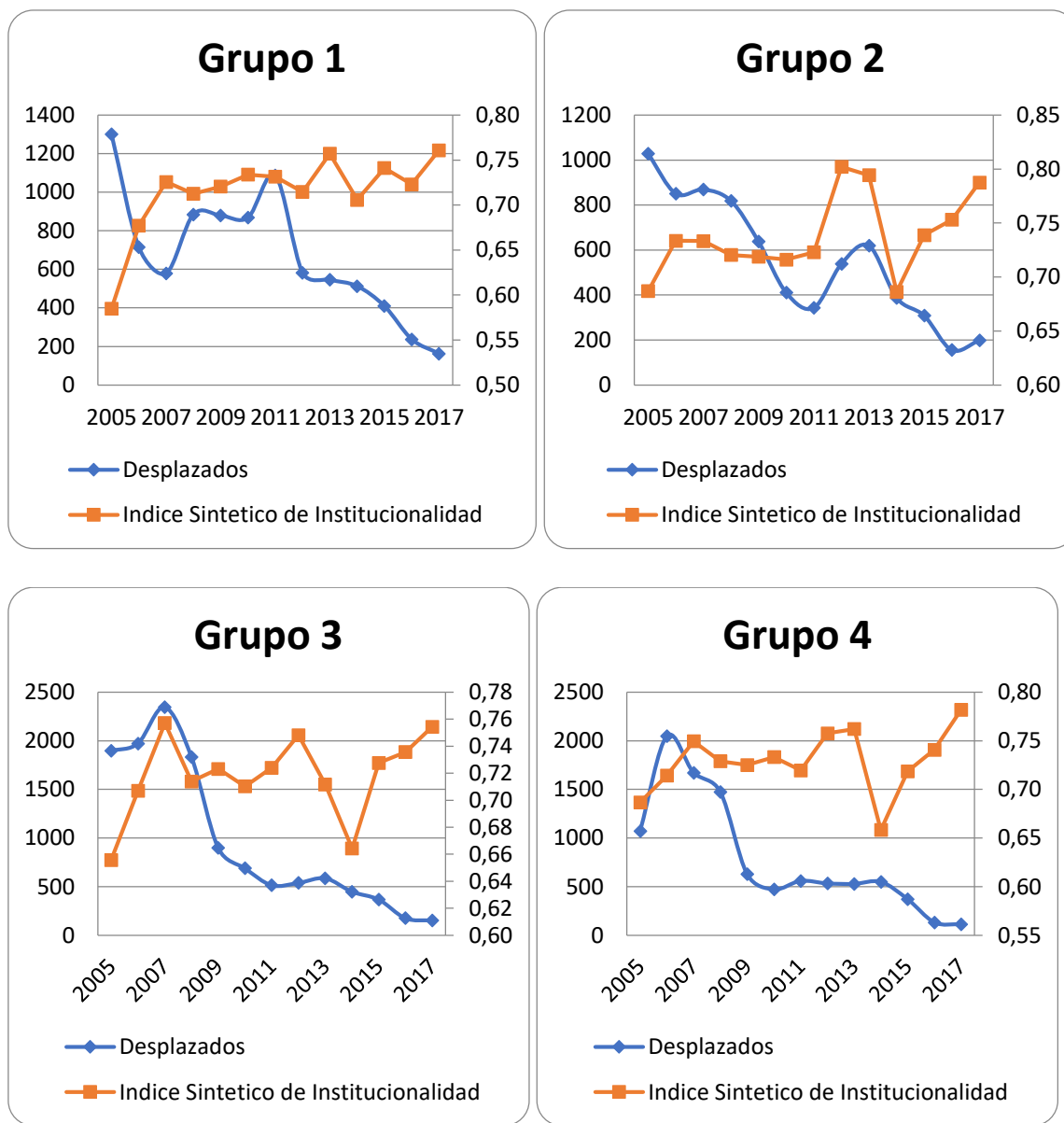
En la formulación del proyecto y en el proceso de investigación, hubo dificultades en la consecución de datos confiables con series anuales continuas. Para resolver este inconveniente, desde la concepción de la investigación, se optó por analizar la violencia a partir del comportamiento de la tasa de homicidios como un indicador indirecto y porque varias instituciones, desde hace varios años, han consolidado dicha tasa con información confiable y fiable.

En el anterior acápite, se desarrolló la comparación de la variable homicidios (Violencia) y el Indicador sintético de institucionalidad, para explorar la relación entre institucionalidad y violencia.

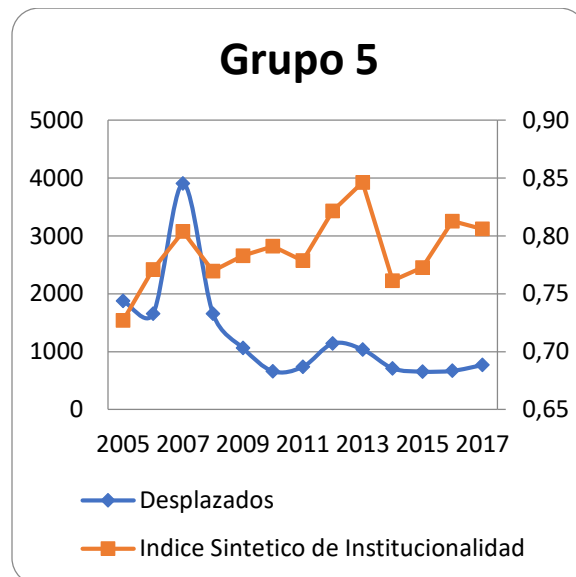
Durante el desarrollo de la investigación, se encontró otro indicador que igualmente podría complementar la investigación ya que cuenta con una serie histórica por municipio que permite realizar la misma comparación que se desarrolló con los homicidios. Se trata del número de personas desplazadas. Este se incluyó en el Indicador sintético ya que permite complementar el análisis de la presencia estatal y la vulnerabilidad del Estado en el territorio, agrupándolo en la categoría inseguridad.

Por lo anterior, se consideró pertinente presentar la comparación el desplazamiento, como indicador indirecto de la violencia y el Índice sintético de institucionalidad.

Figura 16. Número de desplazados e Indicador Sintético de Institucionalidad Grupos 1 y 2







Fuente: Tasa de Homicidios: Medicina Legal – Revista *Forensis* 2005-2017. Indicador Sintético de Institucionalidad, elaboración del autor, las fuentes pueden consultarse en la tabla 3.

En la figura 16, se observa que desde el 2005 el número de desplazados decrece constantemente. No obstante, en los grupos 1 y 2, a diferencia de los 3 restantes, se presentan dos aumentos significativos en la serie de tiempo. En el grupo 1, en los años 2009 y 2011 y en el grupo 2 en el 2013.

Los grupos 3 4 y 5 presentan comportamientos similares. En los años 2006 y 2007, exhiben los picos más altos de desplazamiento, luego se observa una reducción progresiva y significativa.

La comparación del desplazamiento con el Índice sintético de institucionalidad, reafirma lo encontrado con la tasa de homicidios, sobre todo, a partir del desescalamiento del conflicto, producto del proceso de paz con las Farc. En efecto, partir del 2014, se observa una relación directa entre el aumento de la institucionalidad y la reducción de los desplazados.

Lo anterior permitir llegar a la siguiente conclusion: al limitarse los efectos del conflicto, es la institucionalidad la que afecta el comportamiento de los individuos, y, al parecer, al aumentar la presencia institucional, se pueden construir relaciones más armonicas entre los mismos.

## 6. Análisis de la Correlación entre el Índice sintético de institucionalidad y la violencia

Para finalizar la investigación, es pertinente analizar si el indicador construido puede explicar la hipótesis al establecer una correlación del mismo con los indicadores de violencia estudiados; es decir, si al aumentar la institucionalidad existe una relación inversa con los homicidios, mostrando así que el fortalecimiento de las instituciones o la presencia de una institucionalidad democrática del Estado está asociado con la reducción del comportamiento violento de los ciudadanos.

### 6.1 Índice Sintético de Institucionalidad y Homicidios

El coeficiente de correlación es un estadístico que toma valores entre -1 y 1 y que permite establecer la relación entre la muestra de dos variables. A partir de este estadístico, se puede concluir si la relación entre las dos variables es positiva (negativa) y por lo tanto el aumento en una de ellas está asociada al aumento (disminución) de la otra. Igualmente, cuando el coeficiente de correlación es cercano a cero, las dos variables no guardan relación alguna. En la tabla 12, se presenta la evolución del índice y sus respectivos componentes (inseguridad, educación, buen gobierno, salud) entre los años 2005 y 2017. En la última columna, se presenta el coeficiente de correlación estimado entre cada una de estas variables y la tasa de homicidios.

**Tabla 12. Índice de institucionalidad y homicidios - Coeficiente de Correlación**

MUNICIPIO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Coeficiente de Correlación
Índice Sintético Institucionalidad	0.67	0.72	0.75	0.73	0.73	0.74	0.74	0.77	0.77	0.70	0.74	0.75	0.78	-0.141
Variables Índice														
Inseguridad	0.22	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.26	0.24	0.24	0.22	0.24	0.25	0.26	-0.195
Educación	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.12	0.192
Buen Gobierno	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	-0.355
Salud	0.15	0.14	0.15	0.12	0.15	0.16	0.15	0.18	0.18	0.14	0.16	0.16	0.17	0.064

Fuente: Elaboración Propia.

Lo primero que se observa de la información procesada es que la correlación entre el Índice sintético de institucionalidad y la tasa de homicidios es negativa (-0.141). Lo anterior significa que durante los periodos en que el nivel de institucionalidad es alto, la tasa de homicidios es menor. Lo más importante de este resultado es su coherencia con la principal hipótesis de la investigación.

Al aumentar una variable, la otra tiende a reducirse, lo cual da un primer inicio de la validez de nuestra hipótesis de investigación. Aunque el resultado es relativamente bajo, podría explorarse en futuras investigaciones la inclusión de más categorías o la depuración de las mismas para fortalecer el Índice.

Al analizar las variables que componen el Índice, se encuentra que tanto la seguridad como el buen gobierno tienen el mismo comportamiento negativo que expresa el Índice, esto nos conduce a pensar que la confianza institucional, al brindar seguridad y credibilidad sobre las mismas, genera el efecto esperado en la investigación ya que su comportamiento está asociado con una reducción en la tasa de homicidios.

Al observar la categoría de educación, se encuentra que existe un comportamiento positivo; es decir, que los homicidios tienden a aumentar al incrementarse la cobertura educativa. El fortalecimiento educativo ha sido uno de los desafíos más importantes de los últimos gobiernos en el país, lo cual ha generado unos enormes avances en cobertura, posterior a los resultados de las Pruebas PISA, de hace unos años, que evidenció que aún existe una brecha entre la educación privada y pública en cuanto a calidad, ya que, aunque aumente la cobertura esta no va acompañada de una buena educación. El comportamiento del Índice con la variable educación originan nuevas preguntas, que podrían ser estudiados en futuras investigaciones.

Por último, la categoría de salud no arroja ningún resultado estadísticamente válido de correlación al acercarse a 0, lo cual sugiere que no existe una relación significativa entre las variables.

## 6.2 Correlación entre el Índice Sintético de Institucionalidad y la Tasa de Homicidios por grupos de estudio.

**Tabla 13. Correlación Índice Sintético de Institucionalidad y Homicidios - Grupos de Estudio.**

Grupo	Variable	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Coefficiente de Correlación
1	Tasa Homicidios	71.55	68.05	58.08	34.43	52.48	51.88	41.81	83.36	54.60	36.90	38.37	38.01	37.72	<b>-0.494</b>
1	Índice Sintético Institucionalidad	0.58	0.68	0.73	0.71	0.72	0.73	0.73	0.71	0.76	0.71	0.74	0.72	0.76	
2	Tasa Homicidios	56.20	61.68	24.15	13.48	42.14	37.74	45.11	65.21	35.67	25.21	19.53	24.43	26.74	0.105
2	Índice Sintético Institucionalidad	0.69	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.80	0.79	0.69	0.74	0.75	0.79	
3	Tasa Homicidios	47.14	41.99	65.04	64.87	69.02	44.10	39.86	94.80	39.40	41.36	24.75	27.91	19.38	0.132
3	Índice Sintético Institucionalidad	0.66	0.71	0.76	0.71	0.72	0.71	0.72	0.75	0.71	0.66	0.73	0.74	0.75	
4	Tasa Homicidios	30.68	49.63	37.08	46.39	99.58	67.66	64.30	52.73	52.96	50.48	23.18	23.00	37.55	-0.031
4	Índice Sintético Institucionalidad	0.69	0.71	0.75	0.73	0.73	0.73	0.72	0.76	0.76	0.66	0.72	0.74	0.78	
5	Tasa Homicidios	53.52	64.05	35.79	30.76	69.21	62.76	56.48	45.67	37.57	36.21	26.67	16.53	21.92	<b>-0.307</b>
5	Índice Sintético Institucionalidad	0.73	0.77	0.80	0.77	0.78	0.79	0.78	0.82	0.85	0.76	0.77	0.81	0.81	

Fuente. Elaboración Propia.

En la tabla 13, se explora el comportamiento del Índice sintético de institucionalidad calculado sobre los cinco grupos de municipios de acuerdo al tamaño de la población, en los que el grupo 5 representa los municipios con mayor población. En la última columna de la tabla, se presenta el coeficiente de correlación estimado del Índice con la tasa de homicidios. Los resultados indican que solo en 2 de los grupos (1 y 5) el coeficiente de correlación tiene una magnitud importante y negativo; por lo tanto, es coherente con la hipótesis de trabajo. Para los otros grupos, su comportamiento es positivo o presenta una correlación estadística cercana a cero. En los dos grupos, en que la negativa la correlación es negativa, 1 (-0.494) y 5 (-0.307), esta relación fue bastante alta, lo que sugiere una relación importante entre el fortalecimiento institucional y la violencia.

Los resultados de los otros 3 grupos, junto con la reducción en las categorías de salud y educación, sugiere que es posible que estas dos expresiones puedan no ser tan representativas al sugerir la presencia institucional. Pero tal como mencionamos en la metodología, uno de

las problemáticas más grandes de Colombia es la poca continuidad o casi nula recopilación de datos propios en los municipios más pequeños, y por lo tanto la disponibilidad se reduce a la labor realizada por los ministerios o el DNP.

6.3 Correlación entre el Índice Sintético de Institucionalidad y desplazados en los grupos de estudio.

**Tabla 14. Correlación Índice Sintético de Institucionalidad y Desplazados - Grupos de Estudio.**

Grupo	Variable	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Coefficiente de Correlación
1	Desplazados	1301	716	579	884	879	868	1087	583	546	513	409	237	163	<b>-0.637</b>
1	Índice Sintético Institucionalidad	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	
2	Desplazados	1028	851	869	818	638	411	344	539	619	388	309	156	199	<b>-0.317</b>
2	Índice Sintético Institucionalidad	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	
3	Desplazados	1897	1973	2346	1834	899	690	516	539	587	449	369	177	153	<b>-0.183</b>
3	Índice Sintético Institucionalidad	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	
4	Desplazados	1073	2048	1671	1473	628	472	559	533	528	548	370	132	112	<b>-0.211</b>
4	Índice Sintético Institucionalidad	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	
5	Desplazados	1876	1656	3905	1653	1063	662	739	1141	1037	711	656	669	769	<b>-0.068</b>
5	Índice Sintético Institucionalidad	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	

Fuente. Elaboración Propia.

En la tabla 14, se contrasta el Índice sintético de institucionalidad calculado sobre los cinco grupos de municipios con la población desplazada, de nuevo, la última columna indica la correlación entre las dos variables. Los resultados indican que en 4 de los 5 grupos hay una correlación negativa; es decir, que al mejorar el indicador de institucionalidad se tiende a reducir el número de desplazados, la cual es uno de los fenómenos más representativos del conflicto colombiano.

Estos resultados evidencian la relación positiva entre la presencia de una institucionalidad democrática del Estado y la disminución tanto de la violencia política como la violencia social en general. Los resultados también están con consonancia con lo estudiado por el Fernán González (2014), respecto a la presencia diferencial del Estado en el territorio, puesto que al tomar muestras de municipios que difieren en su población, se observa que en algunos

hay una correlación mayor al fortalecerse las instituciones y la reducción de la violencia tanto política como social.

## CONCLUSIONES

Al iniciar en el desarrollo del proyecto de investigación, se propuso un periodo de tiempo mucho más ambicioso, ya que se pretendía abordar la problemática desde los años 1980, pero al iniciar la búsqueda de las series históricas de datos, se encontró una gran dificultad en la validez y continuidad, lo cual generó que se tuviera que reducir el alcance. Finalmente, se encontró que a partir del 2005 se ha logrado una relativa estandarización y publicación de datos lo que permite la construcción de indicadores como los desarrollados en esta investigación para analizar la relación entre la presencia institucional y la violencia. Igualmente, se presentó la dificultad que, en muchos casos, al consultar las instituciones, éstas, al no tener claridad sobre las responsabilidades de quién debe encargarse de los datos, terminan transfiriéndose dicha responsabilidad lo que dificulta la obtención de la información.

Hay múltiples institucionalidades, la del Estado, la de las instituciones públicas y privadas y aquella que se caracteriza por el establecimiento de normas y reglas que rigen el comportamiento de los individuos y los grupos. No toda institucionalidad es contraria a la violencia, algunas que pueden promoverla y ser funcional a ella. Un ejemplo de ello fue el nazismo en Alemania y las dictaduras militares que caracterizaron durante un largo periodo a los países de América Latina. La institucionalidad estatal que puede detener los procesos de violencia es la que promueve los valores democráticos, que hace el uso legítimo de la fuerza, respeta la vida como un principio supremo, incluso de los oponente políticos, que fortalece la autoridad política del Estado, promueve los derechos humanos y la defensa de la diferencia en todas sus dimensiones: política, religiosa, de género, ideológica, étnica, racial, entre otras.

En Colombia hay una diferencia sustancial entre los procesos de violencia entre las áreas rurales y urbanas. El conflicto político, que ha instrumentalizado la violencia política, ha sido más de carácter rural; por el contrario, la violencia de los grandes centros urbanos ha estado más asociada con la delincuencia, el ajuste de cuentas ligada al narcotráfico lo que explica que históricamente las tasas de homicidios hayan sido más altas que en las zonas rurales.

La construcción del Índice de institucionalidad fue una oportunidad para consolidar en una cifra, variables múltiples para representar la presencia institucional. Al mejorar las futuras

cifras, podrán robustecerse para complementar su desarrollo y generar mejores investigaciones.

Las conclusiones obtenidas, a partir del análisis de los datos censales, permiten decir que el desarrollo institucional difiere en el territorio, tal como lo identifica Fernán González con su conocida hipótesis de la presencia diferencial del Estado. Esa presencia tiene mayores avances en los municipios con mayor población, lo que genera rezagos institucionales en los municipios pequeños. Una relación similar se encontró con el Índice sintético de institucionalidad y la tasa de homicidios. En los municipios de mayor población, se presenta una relación positiva entre el índice y la tasa, es decir, a mayor presencia institucional, disminución de los homicidios; por el contrario, que en los municipios pequeños el aumento no tiene mayor impacto.

El indicador sintético permitió una comparación entre las variables de estudio y las cifras de homicidios. En 4 de los 5 grupos se observó una relación concomitante inversa, al incrementarse la institucionalidad, se genera una reducción en la cifra de homicidios, como proxy de la violencia. Se encuentra que este proceso tiene mayor relevancia posterior al desescalamiento del conflicto, que se generó como resultado del proceso de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc. El efecto del desescalamiento también se pudo observar con el desplazamiento, al comparar la población desplazada en los 5 grupos de estudio, conduciendo a validar la hipótesis, es decir, la presencia institucional en municipios sin el impacto del conflicto, tienden a mejorar la convivencia, ya que se establecen relaciones más armónicas entre los individuos.

La consolidación de instituciones procura regular el comportamiento humano, limitando los conflictos que pueden surgir de la interacción entre los mismos. En esta investigación, tomando múltiples variables, como la cobertura de servicios públicos, las cifras del buen gobierno y el desarrollo administrativo, al relacionarlas con el conflicto, se observa que al consolidar la presencia del Estado se establece una relación con la reducción de los homicidios.

Se establecieron las pruebas estadísticas de correlación entre el Índice de institucionalidad y la tasa de homicidios. La prueba arrojó que la correlación es negativa (-0.141) lo cual



significa que en los períodos en que el nivel de institucionalidad es alto, la tasa de homicidios es menor, lo cual es coherente con la principal hipótesis de la investigación.

Al desagregar las variables que componen el Índice y al establecer la prueba de correlación con la tasa de homicidios se encontró que la seguridad y el buen gobierno tienen el mismo comportamiento negativo, lo que es coherente con la hipótesis central de la investigación. Sin embargo, con la variable educación la correlación es positiva, lo que constituye una sorpresa para la investigación. Este resultado evidencia la necesidad de establecer nuevas investigaciones que profundicen mucho más en el tema.

De manera similar se contrastó el Índice sintético de institucionalidad de los cinco grupos de municipios con la población desplazada. Los resultados arrojaron que en 4 de los 5 grupos la correlación es negativa. Lo anterior significa que al mejorar el indicador de institucionalidad se tiende a reducir el número de desplazados, la cual es uno de los fenómenos más representativos del conflicto colombiano.

Las correlaciones entre el Índice sintético y la tasa de homicidios y entre las variables que componen dicho índice y el comportamiento de los homicidios en los 5 grupos de municipios objeto de estudio están afectadas por el tamaño poblacional de estas localidades, que tienen menos de 90.000 habitantes. En centros poblacionales mayores, como las principales ciudades capitales del país, es posible que las correlaciones sean diferentes dada las diferencias estructurales entre la violencia rural y urbana en Colombia. Aquí también se abren nuevos campos de exploración para futuras investigaciones.

Sin embargo, no es un secreto para quien escribe estas reflexiones que el entramado institucional puede ser utilizado, como efectivamente lo ha sido, para fomentar fenómenos violentos. Valga solo echar un vistazo a la historia colombiana para observar la manera en la cual la institución partidista fue utilizada como herramienta generadora de violencia, o incluso en un recuento más frecuente, en la gestación de los fenómenos paramilitares. Sin embargo, esta evidencia no desvalida de forma total la hipótesis planteada en este trabajo si se entiende con suficiencia el planteamiento teórico que le sirve de base.

Ya que, como se mencionó con antelación, las instituciones modelan el comportamiento humano por medio de la creación de significados y su socialización mediada por la

educación, en este sentido el papel que ejercen las instituciones con respecto a la validación o invalidación de los comportamientos violentos depende de manera directa en el tipo de significados y sentidos que ellas generen en el estadio grupal o individual en el que se desarrollan.

En este sentido, lo que se advierte en el periodo de “la violencia” es una revalidación de la perspectiva institucionalista en el entendimiento del comportamiento humano, pues nunca se cuestiona el preponderante papel de los partidos políticos tradicionales colombianos en el desarrollo de este fenómeno violento, y en la instrumentalización del comportamiento que se gestó al interior de estas instituciones para encaminar el comportamiento social colombiano en las dinámicas de la eliminación del adversario político.

Así las cosas, lo que se cuestiona con esta evidencia no es el carácter institucionalizado del comportamiento humano, sino la capacidad institucional para acotar el surgimiento de fenómenos violentos, y el busilis de esta discusión es el tipo de significados y sentidos que se crean al interior de las instituciones que determinan que los comportamientos violentos sean o no considerados como apropiados en el entramado de reglas institucional.

La cuestión que emerge es acerca de lo que sucede cuando las instituciones buscan propiciar un comportamiento violento entre los sujetos que las componen. Ahora bien, valga en este momento echar mano de algunos planteamientos básicos de la ciencia política para esclarecer este aparente galimatías. Michelangelo Bovero (1997) puede dilucidar con sus planteamientos la discusión que nos acaece, especialmente en su texto “la naturaleza de la política” el autor advierte que lo que hace que el poder político adquiera esa naturaleza, incluso cuando utiliza la fuerza como método de coacción, es la persecución de un fin específico e irreductible que es la garantía de la convivencia humana, de esta manera es como el ejercicio de la fuerza con caracteres políticos se diferencia del que es ejercido por una banda de rufianes o de mafiosos. En un estricto sentido para Bovero lo que hace político al poder es su búsqueda por la institución de un orden específico (Bovero, 1997, pág. 101), en sus propias palabras:

“Creo que el poder político se define como político no sólo por ser coactivo, por la pretensión de ser exclusivo y por su duración efectiva – tal es también el poder de la mafia- sino por tener un fin irrenunciable, si cuya persecución, directa o indirecta, el

poder mismo se debilita: es el fin de organizar la convivencia, o mejor dicho, usando una fórmula negativa, el fin de impedir la disgregación de la convivencia, de impedir la transformación de la convivencia en un conflicto generalizado, en guerra civil” (Bovero, 1997, pág. 99)

Para este autor la respuesta la pregunta de si lo político se asemeja a una especie de guerra o a una especie de paz es que: “la política es -no digo <debería ser>, digo <es> esencialmente una especie de paz” (Bovero, 1997, pág. 100). Y con relación al conflicto político, este afirma que:

“El conflicto mismo adquiere significado político sólo bajo la perspectiva de su superación, esto es, en vista de la institución de un orden cualquiera (legítimo o ilegítimo, justificado o injustificable) que se oponga al surgimiento de conflictos análogos” (Bovero, 1997).

En este sentido, en lo que respecta al trabajo de investigación aquí realizado, se hace énfasis en que la institucionalidad que se evaluó fue una institucionalidad eminentemente política en los términos de Bovero, pues es una institucionalidad estatal cuyo fin es la garantía de la convivencia pacífica de los ciudadanos, evidenciable en el texto constitucional que erige al Estado colombiano y es sus desarrollos legales.

Finalmente, se concluye que si bien no se puede evidenciar con los resultados del análisis propuesto que todos los indicadores de institucionalidad tienen el mismo efecto, o efecto alguno, sobre la generación de fenómenos de violencia, esto resulta coherente con la perspectiva teórica escogida, pues la capacidad institucional de evitar los fenómenos violentos depende del tipo de significados y sentidos de lo apropiado que las instituciones estén en la capacidad de generar, con lo cual variables como la del establecimiento de servicios públicos, y los índices de buen gobierno, así como el des-escalamiento del conflicto, y la mejora administrativa tienen un mayor impacto sobre la reducción de la violencia que las demás estudiadas.

Para finalizar, considero que con los resultados de la investigación se logra demostrar la importancia del fortalecimiento institucional como limitante del comportamiento violento humano. No obstante, creo que es evidente una deficiencia cualitativa, ya que las cifras

presentan el fortalecimiento de la infraestructura, la mejora administrativa y el aumento de los servicios institucionales, pero no permiten medir la disfuncionalidad del Estado presente en el territorio, este aparente fortalecimiento del Estado no implica que sea funcional. Sin embargo, desentrañar lo anterior implica desarrollar investigaciones más profundas que capten el real fortalecimiento estatal. Considero que esta carencia puede conducir a futuras líneas de investigación que se centren a analizar cualitativamente la presencia y funcionalidad estatal.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acemoglu, D., García C., & Robinson, A. (2014). *Working Paper Series*. Obtenido de The National Bureau of Economic Research: <http://www.nber.org/papers/w19813>.
- Agudelo, F. (2003). Momento y contexto de la violencia en Colombia. *Revista cubana salud pública*, 18-36.
- Almonacid, W. (2017). “Colombia: El paradigma Existencial de la Violencia”. *Pensamiento, palabra y Obra*, No 17, pp. 68-77.
- Bovero, M. (1997). *La naturaleza de la política. Poder, fuerza y legitimidad*. RIFP, 91-102.
- Camacho, A. (2014). *Violencia y conflicto en Colombia*. Volumen III. Cali: Programa Editorial de la Universidad del Valle.
- Camacho, A., & Guzmán, Á. (1990). *Colombia, ciudad y violencia*. Bogotá: Ediciones Foro Nacional por Colombia.
- Cartagena, C. (2016,). “Los estudios de la violencia en Colombia antes de la violentología”. *Revista Electrónica de Historia* No. 17, pp. 63-88.
- Castillo, L. C. (2004). “Presentación Colombia a Comienzos del Nuevo Milenio”. En L. C. Castillo, *Colombia a Comienzos del Nuevo Milenio* (págs. 7-22). Santiago de Cali: Universidad del Valle.
- Centro de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Comisión de Estudios Sobre La Violencia (1987). *Colombia: Violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Cepal. (2010). *Cohesión Social en América Latina: Una revisión de conceptos, marcos de referencia e indicadores*. Naciones Unidas.
- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016): *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Ediciones desde abajo.
- Coser, L. (1970). *Continuities in the study of social conflict*. New York: Free Press.
- Dawkins, R. (2002). *EL GEN EGOÍSTA. Las bases biológicas de nuestra conducta*. Barcelona: Salvat Editores.
- Dawkins, R. (2004). *The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

- Dawkins, R. (2009). *The greatest show on Earth: the evidence for evolution*. Reino Unido: Free Press.
- Deas, M. (1999). *Intercambios violentos*. Bogotá: Printer Colombia S.A.
- Deas, M., & Gaitán, F. (1995). *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*. Bogotá: FONADE, DNP, Tercer Mundo Editores.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (1993). Censo 1993. Bogotá.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005). Censo 2005. Bogotá.
- Departamento Nacional de Planeación (2015). *Índice de Vulnerabilidad Territorial: Resultados 2008-2012*. Bogotá: DNP.
- Domenach, M. (1981). "Violencia". En *La violencia y sus causas*. París: Editorial de la Unesco, págs. 33-46.
- Douglas, M. (1996). *Cómo piensan las instituciones*. Madrid: Alianza Editorial.
- Dowse, R., & Hughes, J. (1993). *Sociología política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Duncan, G. (2006): *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Bogotá: Planeta.
- Durkheim, E. (1967). *De la División del Trabajo Social*. Buenos Aires: Shapire.
- Elías, N. (1997). *El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Fals, O., Guzmán, G., & Umaña, E. (1962): *La violencia en Colombia, Tomo I*. Monografías Sociológicas. Bogotá: Universidad Nacional.
- Fanon, F. (2011). *Los condenados de la tierra*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Fluharty, V. (1987). *La danza de los millones: Régimen militar y revolución social en Colombia (1930-1956)*. Bogotá: Áncora. (Primera edición: 1957).
- Freud, S. (1997). *El malestar en la cultura*. Madrid: Alianza Editorial.
- García, A. (1955). *Gaitán y el problema de la revolución colombiana*. Bogotá: Artes Gráficas.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Los Angeles: University of California Press.
- González, F. (2014). *Poder y Violencia en Colombia*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular.
- González, F., & Otero Bahamon, S. (2006). Instituto de investigación y debate sobre la Gobernanza. Obtenido de *La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza*: <http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-237.html>.

- González, F., Bolívar, I., & Vásquez, T. (2007). *Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado*. Bogotá: Cinep.
- Guzmán Campos, G., Fals Borda, O., & Umaña Luna, E. (1980). *La Violencia en Colombia*. Vol I y II. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
- Guzmán, A. (1990). *Sociología y violencia*. Cali: Cidse, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, Universidad del Valle, Documento de trabajo N° 7.
- Harari, Y. (2014): *Sapiens. De animales a dioses*. Madrid: Grupo Editorial España.
- Harari, Y. (2016): *Homo deus. Breve historia del mañana*. Madrid: Grupo Editorial España.
- Hobbes, T. (1994): *Leviatán*. Barcelona: Altaya.
- Hobsbawm, E. (1974). “La anatomía de la violencia en Colombia”, en *Rebeldes primitivos*. Barcelona: Aial.
- Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University press.
- López, M. d. (2009). “El concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones teóricas posteriores”. *Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, pp.130-147.
- March, J., & Olsen, J. (1989). *Rediscovering Institutions - The Organizational Basis of Politics*. New York: The Free Press.
- March, J., & Olsen J. (1984). “New institutionalism: organizational factors in political life”, en *American Political Science Review*, 78 (1984), pp. 734-749.
- Montenegro, S. (2006). *Sociedad abierta, geografía y desarrollo. Ensayos de economía política*. Bogotá: Norma.
- North, D. (1989). “Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction”. En *World Development*, 17(7).
- Oquist, P. (1978). *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos Biblioteca Banco Popular.
- Ortiz, C. M. (1985). *Estado y subversión en Colombia: La violencia en el Quindío en los años cincuenta*. Bogotá: Cider-Cerec.
- Palacios, M. (2012): *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Palacios, M., & Safford, F. (2002). *Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia*. Bogotá: Norma.
- Pécaut, D. (1986). “De Las Violencias a la Violencia, el pasado y presente de la violencia en Colombia”. Bogotá.: Sanchez y Peñaranda Eds. Cerec.

- Pécaut, D. (1987a). "Crise, guerre et paix en Colombie", in: Problèmes d'Amérique Latine, n° 84, 2ème trimestre 1987, pp. 3-28.
- Pécaut, D. (1987b). "Colombie: ¿au-delà du point de non-retour?", in: Problèmes d'Amérique Latine, n° 86, 4ème trimestre 1987, pp. 3-22.
- Pécaut, D. (1987c). *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*, vol. I y II. Bogotá: Siglo XXI-Cerec.
- Pécaut, D. (1988). *Crónica de dos décadas de política colombiana: 1968-1988*. Bogotá: Siglo XXI Editores.
- Pécaut, D. (1994). "¿Es posible aún una interpretación global de los fenómenos recientes de Violencia en Colombia?", *Boletín Socioeconómico* n° 27. Cali: CIDSE, Universidad del Valle, pp. 1-15.
- Pécaut, D. (1997). *Presente, pasado y futuro de la violencia*. Análisis político, 3-36.
- Pécaut, D. (1999). "Las configuraciones del espacio, del tiempo y de la subjetividad en un contexto de terror: el ejemplo colombiano", Colombia: democracia y paz, Medellín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, pp. 221-256.
- Pécaut, D. (2001a). *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Planeta.
- Pécaut, D. (2001b). *Orden y Violencia, evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953*. Bogotá: Norma.
- Pécaut, D. (2002). "De la violencia banalizada al terror", (Tercera Parte) de *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Espasa.
- Pécaut, D. (2003). *Violencia y política en Colombia. Elementos de reflexión*. Medellín: Hombre Nuevo Editores.
- Pécaut, D. (2003a). *Midiendo fuerzas*. Bogotá: Planeta.
- Pécaut, D. (2008). *Las Farc. ¿Una guerrilla sin fin o sin fines?* Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Pizarro, E. (2004). *Una democracia asediada. Balance y perspectiva del conflicto armado colombiano*. Bogotá: Banco de la República, El Áncora Editores.
- Presidencia de la República. (2018). *Biblioteca del Proceso de paz con las FARC-EP*. Bogotá: Imprenta Nacional.
- Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2003). *El conflicto: callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano-Colombia 2003*. Bogotá: PNUD.
- Rangel, A. (1998). *Colombia: guerra en el fin de siglo*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.



- Romero, M. (2002). *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*. Bogotá: Planeta-IEPRI.
- Sánchez G. (2007). “Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas”. En G. Sánchez y R. Peñaranda (Comps.). *Pasado y Presente de la Violencia en Colombia* (pp. 17-32). Bogotá: La Carreta Editores.
- Sánchez, G., & Peñaranda, R. (1991): *Presente y pasado de la violencia en Colombia*. Bogotá: Cerec.
- Smelser, N. (1962). *Theory of collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Tilly, Ch. (2007). *Violencia colectiva*. Barcelona: Hacer Editorial.
- Torres C. (1972). *Cristianismo y Revolución*. México: Ediciones Era.
- Unesco (1981). *La violencia y sus causas*. París: Editorial de la Unesco.
- Valencia, A. (2012a). “Memoria y violencia. A los cincuenta años de «La Violencia en Colombia de monseñor Guzmán et al»”. En *Sociedad y economía* No 23, pp. 59-84.
- Valencia, A. (2012b). “La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las trasgresiones al Frente Nacional”. *Revista Colombiana de Sociología*, V. 35, Número 2, pp. 15-33.
- Valencia, A. (2015). *La invención de la desmemoria. El juicio político contra el general Gustavo Rojas Pinilla en el Congreso de Colombia (1958-1959)*.
- Valencia, A. (2018a). *Concepto académico sobre el informe de investigación: Límites institucionales de la violencia. El caso colombiano*. Cali: Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Valle.
- Valencia, A et al (2018b). *Entrega de armas de las guerrillas del Llano Sep.-Oct. 1953*. Cali: Programa Editorial de la Universidad del Valle, Archivo Germán Guzmán Campos.
- Weber, M. (1969). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de cultura económica.
- Zygmunt, B. (2010). *Modernidad y holocausto*. Madrid: Sequitur.
- Zuleta, M. (2006). “La violencia en Colombia: avatares de la construcción de un objeto de estudio”. *Nómaditas* 25, pp. 54-69.

### **Páginas Web consultadas**

Departamento Nacional de Planeación. Indicador de desempeño fiscal 17 de septiembre de 2018. Bogotá. En <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Indicadores-y-Mediciones/Paginas/desempeno-fiscal.aspx>.

Unidad para las Víctimas. Consulta registro único de víctimas. 17 de septiembre de 2018. Bogotá. En <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>.

**Derechos de petición interpuestos antes diferentes instituciones para tener acceso a la información cuantitativa que se procesa y analiza en esta investigación.**

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Derecho de Petición interpuesto el 05 de mayo de 2018. Bogotá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Derecho de petición respuesta del 25 de mayo de 2018. Bogotá.

Policía Nacional Dirección General. Derecho de petición respuesta del 21 de mayo de 2018. Bogotá.

Policía Nacional Dirección General. Derecho de petición respuesta del 28 de agosto de 2018. Bogotá.

Procuraduría General de la Nación. Derecho de petición respuesta del 10 de mayo de 2018. Bogotá.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Derecho de petición respuesta del 10 de mayo de 2018. Bogotá.

Ministerio de Educación Nacional. Derecho de Petición respuesta del 11 de mayo 2018. Bogotá.

Ministerio de Salud y Protección Social. Derecho de Petición respuesta del 07 de junio de 2018. Bogotá.